

La percepción de México en la mente de los inversores cambió de la noche a la mañana. Mucho de lo que ha pasado se debe a su "gran hermano" y vecino norteamericano y a su nueva administración bajo Donald Trump y no tanto a la estructura económica mexicana pero, aun así, la coyuntura económica en México sigue siendo muy preocupante. El desplome del peso mexicano es tan solo un aperitivo del ajuste que se avecina para dicha economía. Sin embargo, el sesgo proteccionista del presidente Trump puede representar una oportunidad histórica para diversificar el destino de las exportaciones mexicanas, aunque estas no pueden entenderse sin China, dado su tamaño económico y a la aún escasa presencia como destino de las exportaciones mexicanas.

La sobre dependencia respecto a la economía americana y en particular de la industria automotriz es evidente. México exportó a Estados Unidos el 82% de sus exportaciones (equivalente a 300.000 millones de dólares en el 2016). Más allá de la gran concentración geográfica de las exportaciones mexicanas, el otro problema es que, aun siendo un país con mucha proyección comercial, las exportaciones de México hacia EEUU equivalen al 28,5% de su PIB. Así, decisiones como la de Ford de cancelar sus planes de inversión por un valor de 1.600 millones de dólares son preocupantes para los mexicanos. La cifra no es nada despreciable si se tiene en cuenta que la inversión extranjera directa neta fue de 22.000 millones de dólares durante 2015.

México sufrirá además un fuerte ajuste debido al choque inflacionario y al aumento de tasas generado por la depreciación cambiaria. Esto a su vez afectará la inversión y el consumo. Más allá del efecto cíclico de la depreciación del yen y de una política monetaria más restrictiva para mantener la mo-

neda, el giro de la nueva administración norteamericana hacia su vecino tendrá consecuencias estructurales que tenderán a reducir el crecimiento potencial mexicano.

Ahora bien, aunque la situación es preocupante, no todo está perdido. La tasa de cambio real se ha depreciado un 26% en los últimos dos años, lo que refuerza la competitividad de un país que se ha caracterizado por las reformas estructurales y una red de tratados de libre comercio con 44 países, si se excluye EEUU. Más allá del entramado de tratados comerciales que México debería perseguir, ahora más que nunca queda un país por cubrir en esos tratados y que resulta ser la segunda economía más importante del planeta y que pronto sobrepasará a la de los propios EEUU, es decir China. La buena noticia es que el nivel de sofisticación de las ensambladoras presentes en México ha aumentado tanto que resulta rentable exportar a muchos lugares del mundo, incluida China (hace ya más de tres años que el salario medio chino es superior al de México). Esto explica que México sea ya el séptimo proveedor de automóviles de China (con ventas por 2.500 millones de dólares en 2014). La realidad es que el monto de exportaciones mexicanas a China sigue siendo muy limitada (5.200 millones de dólares en noviembre 2016), por lo que el gran reto es aumentarlas a la mayor brevedad de manera que México pueda amortiguar una parte del "tornado Trump". En este delicado contexto de relaciones bilaterales China podría tener aún más interés geoestratégico por México, lo que podría allanar el terreno para la firma de un acuerdo de libre comercio, especialmente en el caso en el que el NAFTA se desmantele. De hecho, esa esperanza de un México más multilateral y menos dependiente de EEUU es quizás lo que ha llevado a BMW a abrir una nueva planta en San Luis Potosí en vez de seguir los pasos de Ford. En resumen, parece claro que México tiene que girar hacia el resto del mundo en su política exportadora y el resto del mundo no puede, hoy por hoy, entenderse sin China.

El sesgo proteccionista de Trump puede representar una oportunidad para diversificar el destino de las exportaciones mexicanas

do contexto de relaciones bilaterales China podría tener aún más interés geoestratégico por México, lo que podría allanar el terreno para la firma de un acuerdo de libre comercio, especialmente en el caso en el que el NAFTA se desmantele. De hecho, esa esperanza de un México más multilateral y menos dependiente de EEUU es quizás lo que ha llevado a BMW a abrir una nueva planta en San Luis Potosí en vez de seguir los pasos de Ford. En resumen, parece claro que México tiene que girar hacia el resto del mundo en su política exportadora y el resto del mundo no puede, hoy por hoy, entenderse sin China.

ALICIA GARCÍA HERRERO,

Economista jefe de Asia-Pacífico en NATIXIS e investigadora sénior en Bruegel

JUAN CARLOS RODADO,

Director de análisis de América Latina, NATIXIS



PERÚ: ENTRE EL CAMBIO Y LA CONTINUIDAD

PÍLDORA DE OPINIÓN

PERÚ

En el primer semestre de 2016 se dieron elecciones en el país, en las que hubo un debate importante sobre la continuidad o perfeccionamiento del modelo en curso, o su cambio (con diferentes matices), que incluía propuestas de una nueva Constitución.

Esto es particularmente relevante, porque Perú había tenido el mayor ciclo de crecimiento sostenido en los últimos treinta años de toda su historia, gracias a los elevados precios internacionales de las materias primas y a las condiciones favorables del entorno internacional. Ese incremento se detuvo, cuando el contexto externo se modificó y llevó a una desaceleración de la economía que puso sobre el tapete la discusión de temas como el de la diversificación productiva y el cambio de inserción internacional, o por lo menos se plantearon dudas sobre los beneficios que un modelo primario exportador podía generar. Esto llevó a un debate no solo sobre la política macroeconómica y la estrategia de desarrollo, sino acerca de temas que afectaban crecientemente a la población, como la inseguridad y la corrupción. La segunda vuelta de los comicios fue disputada por dos fuerzas que planteaban la continuidad del modelo en curso: Fuerza Popular por un lado y Peruanos por el Cambio (PPK) por el otro. En tercer lugar quedó por un muy estrecho margen (2%) el Frente Amplio, partido que aglutinó a un conjunto de fuerzas progresistas que planteaba una verdadera alternativa de cambio.

Finalmente ganó el PPK frente a la candidatura favorita en las encuestas (Fuerza Popular), cambiando en la segunda vuelta su discurso inicial y planteando una serie de alianzas y compromisos con diferentes sectores políticos y sociales. El partido matizó su propuesta económica liberal, y buscó una polarización con la candidata rival, Keiko Fujimori, cuestionando los antecedentes autoritarios y de corrupción del partido contendiente.

Asumiendo el gobierno en julio del 2016, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tenía dos opciones: honrar los compromisos y matices planteados en la segunda vuelta, o retomar su propuesta original. Para ello solicitó facultades legislativas al Congreso, controlado por Fuerza Popular. Después de idas y venidas, estas facultades se otorgaron y se materializaron en 112 decretos legislativos en diferentes ámbitos del quehacer nacional. Una primera revisión de los mismos permite afirmar

que se optó por la profundización del modelo en curso, por lo que más allá de contradicciones secundarias con Fuerza Popular, comparten una propuesta común. Pero para implementar este proyecto, el PPK necesita el apoyo de su rival político.

Con un contexto marcado por el cambio internacional, la desaceleración de la economía, la pérdida de aceptación presidencial y algunas señales de contradicción y debilidad, estalló el escándalo de Lava Jato, vinculado a la corrupción por sobornos en los tratos con las grandes empresas brasileñas en el país.

Este caso amenaza a la clase política en su conjunto, incluyendo a presidentes de las últimas dos décadas. A la precariedad institucional descrita, se suman factores de desestabilización, que sitúan nubarrones en el horizonte. Este contexto pone a prueba las instituciones democráticas y el desafío es cómo se responde adecuadamente a la crisis; si se buscan salidas en el marco actual, o si se producen alternativas fuera del sistema lideradas por fuerzas extremas de izquierda o de derecha, que capitalicen el descontento popular ante una situación crítica; o si se da la incapacidad de respuesta y la impunidad. Hacemos votos porque se pueda consolidar el primer escenario.

Las elecciones de 2016 vieron un debate sobre la continuidad o perfeccionamiento del modelo en curso, o su cambio, con la propuesta de nueva Constitución

ALAN FAIRLIE,

Presidente de la Comisión de Desarrollo e Integración Económica del Parlamento Andino



AFGANISTÁN NO NECESITA MÁS TROPAS, NECESITA MÁS TIEMPO

PÍLDORA DE OPINIÓN

AFGANISTÁN

Afganistán, 2017. Más de quince años después del 11-S y de la posterior intervención militar de la ISAF, el país sigue en busca de la paz y la reconciliación. Con independencia del desenlace, lo cierto es que Afganistán ha cambiado, pese a la turbulencia reciente. La militancia y el extremismo siguen vigentes y alejan toda perspectiva de estabilidad y prosperidad a corto plazo. De hecho, según datos de la Misión de Naciones Unidas en Afganistán el país atraviesa por su período más sangriento desde 2001. También es récord el número de refugiados que retornan al país, provenientes de Pakistán, Irán y de Europa, empujados por otros conflictos o por las deportaciones. El Gobierno de Unidad Nacional se enfrenta a la profunda contracción económica que siguió al cese en 2014 de la intervención militar de la ISAF.

Sin embargo, y contra lo que podría sugerir este sombrío panorama, existe la esperanza de que se produzcan pasos significativos hacia la paz. La situación militar permanece estancada pese a las ofensivas de los talibanes para capturar capitales regionales y, cada vez más, los países vecinos son conscientes del riesgo de una mayor desestabilización. Además, la sociedad afgana está más que hastiada del conflicto; en el último año se ha evidenciado que la situación doméstica en Afganistán no es tan terrible como temían los que pronosticaban el colapso total del país tras la salida de la ISAF.

El presidente Ghani ha conseguido ganar poder en detrimento de su socio de gobierno, Abdullah Abdullah, jefe del Ejecutivo, que ha amenazado en diversas ocasiones con romper el acuerdo entre ambos, una decisión que no se materializó gracias a la mediación del entonces secretario de Estado de EEUU, John Kerry. Washington también ha presionado a Ghani para que mantuviera cierta representatividad del gobierno, a lo que este ha respondido "puenteando" a Abdullah y entablando relaciones directas con otros personajes influyentes en el país. No se han visto progresos de la reforma constitucional y electoral, y hace tiempo que el parlamento debería haberse renovado. La cámara es cada día más un mercado de apoyos políticos, lo que daña la credibilidad institucional.

La emergencia del movimiento de la Ilustración, protagonizado por una nueva generación de líderes hazara, supone un primer indicio del cambio que se aproxima, y nos recuerda que la fecha de caducidad de las élites de la guerra civil está cada vez más cercana. Esta es una tendencia que debería tomar forma y confirmarse en las elecciones legislativas que previstas para 2018 o 2019.

La emergencia del movimiento de la Ilustración, protagonizado por una nueva generación de líderes hazara, supone un primer indicio del cambio

A pesar de la firma de un tratado de paz entre el Gobierno y el líder de la milicia Hizb-e Islami, Gulbuddin Hekmatiyar, lo cierto es que no se han dado progresos en el diálogo con los talibanes. Tampoco se ha llevado a cabo una discusión adecuada acerca de las líneas rojas y las condiciones de un posible acuerdo de paz. Segmentos importantes de la sociedad afgana no aceptarían una vuelta al gobierno religioso dogmático y aislacionista de los talibanes, y otros ya han perdido la fe en las promesas de un desarrollo pluralista que tenga en cuenta a las minorías y que sea respetuoso con los derechos humanos.

Aunque la población afgana está harta de la guerra y apoya la noción abstracta de paz, los detalles siguen estando borrosos. ¿Cuáles son los aspectos no negociables? ¿Será necesario hacer concesiones respecto al ordenamiento constitucional y a los derechos humanos? ¿Qué forma adoptará el nuevo Afganistán? ¿Conservará el país un sistema legal consuetudinario? ¿Cuál será la política económica de la nueva entidad política? La falta de una noción compartida de lo que significa la "paz" debilita a los promotores del diálogo, y envalentona a los halcones, tanto afganos como entre sus aliados.

Para los expertos cada año es "un año en la encrucijada" y 2017 promete ser otro año crucial. A pesar de todo, persisten las esperanzas de consolidación de una dinámica positiva si la ayuda internacional se mantiene constante. Afganistán no necesita más tropas; necesita más tiempo.

ALEXEY YUSUPOV,

Director de la Oficina en Myanmar de la Frederick-Ebert Stiftung y exdirector de la Oficina en Afganistán entre 2015 y 2016



La suerte de Pakistán en el 2016 fue contradictoria. En la actualidad, existen dos frentes principales que siguen siendo foco de la crisis por la que pasa el país: la debilidad del liderazgo político y la lucha antiterrorista. Tras ambos está el estamento militar, perpetuamente indemne a las crisis.

Pakistán puede congratularse de encadenar dos gobiernos civiles que han cedido el poder de forma constitucional. El presente gobierno de Nawaz Sharif lleva camino de finalizar su legislatura y ya parece estar pensando en las próximas elecciones de 2018. Pero la falta de ideas en el ámbito político lo somete al liderazgo de los militares, que monopolizan el debate ideológico en Pakistán en su beneficio exclusivo. La imagen pública de Sharif, esperanza económica en 2013, ha salido duramente castigado tras la filtración de los papeles de Panamá, que reflejan la inmensa fortuna acumulada por su familia mientras él se muestra incapaz de proveer a los pakistaníes de las necesidades más básicas. El Partido Popular de Pakistán (PPP) está descabezado, con un Bilawal Bhutto lejano, sin ideas nuevas y exhibiendo un discurso convencional, más pensado en la captación de votos en clave populista y en aplacar la desconfianza de los militares. La segunda fuerza real, según las últimas elecciones parciales, es el partido de Imran Khan. No obstante, el mayor problema de Khan radica también en lo ideológico. El cambio y la erradicación de la corrupción, bases de su discurso, han brillado por su ausencia en su gobierno en la provincia de Jyber-Pajtunjwa. Khan parece, en cambio, más obsesionado con derrocar al gobierno central a través de la movilización social de sus seguidores, no exenta de violencia. Ahora bien, su último intento de movilización ha sido un gran fracaso; Khan esperaba capitalizar la represión policial de sus militantes, Sharif por su parte, mostrarlo como un problema de orden público. Ambos, esperaban alguna señal de respaldo militar desde los cuarteles. Sin embargo, el Ejército se mantuvo

al margen. No respecto al juego político, porque en Pakistán nada es lo que parece, sino porque así demuestra su imprescindibilidad para resolver las disputas políticas.

En el frente antiterrorista, hay pocas razones para creer que la operación militar en las Áreas Tribales haya tenido el éxito que se anuncia oficialmente a bombo y platillo. Si bien el número de ataques y de víctimas a nivel nacional ha experimentado un marcado descenso desde 2015, la letalidad va en aumento, así como la vulnerabilidad de la población civil, objetivo de la mayoría de los ataques. No hay operación militar que combata la dualidad ideológica, que sigue permitiendo que algunos grupos gocen del apoyo estatal. Así mismo, el estamento militar sigue estando en contra de la pacificación en las relaciones con los dos vecinos principales, India y Afganistán. Esta postura

está contribuyendo a un mayor aislamiento, y en paralelo, al incremento del discurso victimista. El control absoluto del Ejército en la erradicación de los santuarios terroristas en las Áreas Tribales es contraproducente. Solo se ha combatido al movimiento talibán pakistaní y sus grupos aliados. En cambio, se sigue acogiendo al liderazgo talibán afgano en Quetta. Los militares persisten en monopolizar esta interlocución, a pesar que dicho grupo pretende llevar

el diálogo con el gobierno afgano lejos de su esfera. De igual modo, los grupos con Cachemira en el punto de mira siguen gozando del beneplácito de todos y sus líderes siguen contando con protección oficial. No se llega a comprender que los límites entre estos grupos están lo suficientemente difusos como para que las distinciones sean inútiles, y que, tarde o temprano, acabarán siguiendo sus propias agendas.

El estamento militar sigue estando en contra de la pacificación con India y Afganistán

ANA BALLESTEROS,

Doctora en Estudios Islámicos y autora del libro *Pakistán* (Ed. Síntesis)



BOLIVARIANISMO, EL RÉGIMEN AUTOCRÁTICO DE UN ESTADO FALLIDO

PÍLDORA DE OPINIÓN

VENEZUELA

Hasta 2016 el régimen venezolano era un caso de autoritarismo competitivo: la oposición podía presentarse a elecciones pero se enfrentaba a un campo de juego trucado. Sin embargo, la negativa del presidente Maduro a convocar un referéndum revocatorio en el mes de octubre y su desconocimiento de las competencias parlamentarias retiró el adjetivo “competitivo” de la fórmula. Venezuela es ya una autocracia.

Ahora bien, lejos de ser algo coyuntural o ligado al régimen actual, el problema es más grave. Los regímenes políticos pueden cambiar rápido, pero los aparatos estatales se construyen gradualmente. Y, en Venezuela, lo que se colapsó fue el Estado.

Cierto es que el 95% de las exportaciones venezolanas se compone de petróleo y sus derivados. Sin embargo, la tragedia económica no obedece a los bajos precios internacionales, sino a la destrucción de la infraestructura de extracción y refinación. Venezuela es el único miembro de la OPEP que no ahorró durante el boom petrolero. Y, además, es el que tuvo peor desempeño, siendo el único cuya actividad productiva se contrajo.

Por otro lado, Venezuela importa dos tercios de los bienes que consume, incluyendo alimentos y medicina. Una inflación del 700% anual terminó por desestructurar lo que quedaba del orden socioeconómico. Por eso, la catástrofe petrolera ha derivado en una emergencia humanitaria. Hambrunas, desnutrición y enfermedades han disparado la mortalidad. La descomposición social se manifiesta también en la tasa de homicidios; con cerca de 29.000 asesinatos en 2016 y una tasa de más de 91 muertes violentas cada 100.000 habitantes, ya es el segundo país sin guerra más violento del mundo.

La disolución del orden político, más que el autoritarismo, ha hecho a los observadores externos escépticos sobre las perspectivas de democratización. Si lo que falla es el motor (el Estado), cambiar de conductor (el gobierno) no va a poner el auto en marcha. Por eso dos de las tres potencias extranjeras con mayor influencia en Venezuela — Estados Unidos y el Vaticano—, apoyaron el diálogo entre el gobierno y la oposición; no para promover la democratiza-

ción, sino más bien el statu quo, entendiendo quizá que las alternativas en el horizonte son peores: a izquierda, la caída del régimen podría derivar en anarquía y más violencia; a derecha, su militarización implicaría dictadura y, también, más violencia. En el análisis de Washington y Ciudad del Vaticano, Maduro es el mal menor.

Otros actores externos tienen cada vez menos peso. Cuba sigue siendo el principal sustentador del régimen bolivariano, pero Raúl Castro priorizó el deshielo con Estados Unidos y la pacificación de Colombia a la profundización de la revolución bolivariana. Por su parte, Colombia necesita estabilidad en sus fronteras con independencia del régimen político de los vecinos. Y Brasil, ofuscado por su propia crisis interna, está desaparecido de la región y del mundo.

Bolivia mantiene hoy la concordia social y el crecimiento económico mientras Venezuela se agrieta y se empobrece. Lo que falló, entonces, no fue el giro a la izquierda ni la viabilidad de los estados sudamericanos sino una fórmula específica, la de Chávez y Maduro. La única certeza es que la situación venezolana va a empeorar antes de mejorar —y esta es la mirada optimista.

Los regímenes políticos pueden cambiar rápido, pero los aparatos estatales se construyen gradualmente. Y, en Venezuela, lo que se colapsó fue el Estado

ANDRÉS MALAMUD,

Investigador Principal, Universidad de Lisboa



MÁS QUE VIENTOS DE COLA PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

PÍLDORA DE OPINIÓN

ESPAÑA

De enfermo de Europa a alumno aventajado de la eurozona. Esta podría ser una forma de resumir el comportamiento de la economía española durante la crisis. Después de una fuerte recesión, la tasa de crecimiento está por encima del 3%. Es el mayor crecimiento de las economías desarrolladas de la OCDE. Además, las proyecciones para 2017 mantienen tasas relativamente elevadas. Este comportamiento requiere alguna explicación.

“The party’s over”. Así titulaba *The Economist* un reportaje especial sobre España en noviembre de 2008. Esa visión despilfarradora y de fiesta continuada se vio reforzada en 2010 con la aparición de la crisis de la deuda soberana.

Los desequilibrios económicos a la altura de 2008 parecían confirmar esta visión de debilidad y despilfarro: el déficit comercial era del 10% del PIB, algo que nunca antes había ocurrido. La otra cara de ese desequilibrio, era el sobreendeudamiento exterior.

Sin embargo, la economía española corrigió ese déficit de forma sorprendente y a partir de 2014 se produjo un fuerte rebote. Quedaba la duda de si no sería lo que en economía se conoce como el “rebote del gato muerto”. Pero la continuidad de ese crecimiento en 2015 y 2016 confirma que tiene fundamentos.

La pregunta es inevitable: si la economía española estaba tan enferma, ¿por qué ahora crece tanto?

La explicación convencional es que está impulsada por “vientos de cola”: la caída de los precios del petróleo; la nueva política monetaria del BCE con su efecto en la caída de los tipos de interés y, por tanto, de la carga de intereses de la deuda privada; la mejora del tipo de cambio del euro y la política fiscal menos restrictiva. Sin duda, esos vientos han beneficiado nuestro crecimiento. Pero también a las demás economías europeas y, sin embargo, no tienen el mismo dinamismo. Hay algo más, por lo tanto, que vientos de cola.

La segunda explicación es la reforma del mercado de trabajo de 2014, que facilitó las condiciones de despido y contratación e introdujo una devaluación de los salarios. Pero esta tampoco es suficiente para identificar bien los fundamentos del crecimiento español.

Además de esos dos factores hay también una mejora continuada de la productividad de las pymes y grandes empresas, así como del número de empresas que exportan de forma continuada. Desde 2001 España ha sido la economía de la OCDE que mejor ha sabido conservar su cuota de exportaciones en los mercados mundiales.

Pero hay algo más. En los últimos años España ha experimentado una transformación estructural extraordinaria: las exportaciones de servicios no turísticos (ingeniería, servicios financieros, de transporte, *retail*, consultoría, I+D, etc.) han crecido de forma rápida y sostenida. Este es un hecho nuevo y alentador. Nos dice que había una productividad durmiente que la crisis ha puesto en valor.

La mejora continuada de la productividad, junto con un clima social y laboral cooperativo, son los mejores fundamentos para la continuidad del crecimiento.

Si la economía española estaba tan enferma, ¿por qué ahora crece tanto?



ANTÓN COSTAS

Catedrático de Política Económica de la UB

INVERTIR EN MULTILATERALISMO PARA ACABAR CON LA POBREZA EXTREMA ANTES DE 2030

El mundo se encuentra en una encrucijada, y para citar a Paul Valéry, que en 1937 dijo: “el problema de nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que era”, existe una incerteza cada vez mayor sobre qué nos depararán los próximos años.

A ambos lados del Atlántico, segmentos del electorado corren el riesgo de caer presa de la ilusión que cerrar los mercados y alejarse del multilateralismo podrá devolver los puestos de trabajo y aumentar los ingresos.

Por este motivo, es importante ceñirnos a las evidencias. El sistema abierto de comercio mundial ha contribuido a que mil millones de personas pudieran salir de la pobreza en las últimas tres décadas. El comercio, en particular, ha sido el principal motor del crecimiento. Basta observar la trayectoria de economías como las de Kenia, Rwanda o Vietnam para darse cuenta de que los mercados abiertos, la inversión en infraestructuras duras y blandas, así como el estímulo de la demanda global para sacar recursos materiales y humanos de la subsistencia y colocarlos en trabajos más productivos, ha resultado en cambios reales sobre el terreno. Como consecuencia de ello, las desigualdades de renta entre países se han reducido de manera considerable durante las tres últimas décadas.

Sin embargo, esta convergencia global ha ido acompañada de una creciente desigualdad interna en algunos países.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas proporciona indicaciones precisas acerca de cómo podemos colaborar globalmente para erradicar la pobreza extrema. El comercio es un medio importante para llegar a este fin, no un fin en sí mismo. Para que sea efectivo es necesario implementar políticas complementarias, predecibles y transparentes y acompañarlas de legislación que impulse el crecimiento basado en el comercio pero que al mismo tiempo protejan a los elementos vulnerables de la población.

Una política nacional clave es la inversión en innovación y en la cualificación de los trabajadores. Contamos con evidencias de que la automatización destruye aproximadamente cuatro puestos de trabajo por cada uno que se pierde por culpa del comercio. Y las estimaciones más recientes sugieren que la mitad de todos los trabajos están en riesgo de ser automatizados antes de 2055. Conectar la demanda del mercado de trabajo con el conjunto de capacidades de la población es esencial.

El panorama no es tan desolador como podría parecer. La denominada “cuarta revolución industrial” podría impulsar el crecimiento de la productividad y llevar a una nueva producción más sostenible, digital y de mayor valor añadido en sector agropecuario.

China está ya invirtiendo en robots industriales para ascender en la cadena de valor y contrarrestar el efecto de la subida de los costes laborales, manteniendo la ventaja competitiva del país. Esto también abre potencialmente nuevas

PÍLDORA DE OPINIÓN

GLOBALIZACIÓN

oportunidades para la reubicación de cadenas de valor inferiores y de sistemas de producción innovadores en la industria ligera y en la elaboración de productos agropecuarios en partes de África y el Asia en desarrollo.

Hacer que el comercio sea más inclusivo requiere acción en tres frentes: política comercial, protección social doméstica y cooperación internacional.

Primero, es preciso invertir en la mejor competitividad de las pyme, mayoritarias en la economía. Hay mucho a ganar reduciendo la brecha de productividad existente entre empresas grandes y pequeñas, dado que en los países en vías de desarrollo esta brecha es de un 80%, frente a solo un 30% en las economías avanzadas. ¿Por qué? Porque las empresas más competitivas pagan unos salarios mejores.

Segundo, para afrontar el reto de la economía digital, los gobiernos tienen que responder con políticas que promuevan el dinamismo económico. Esto requiere inversiones de capital humano en educación, capacitación y formación profesional, combinadas con políticas de mercado laboral activas.

Finalmente, debido a que la agenda doméstica no será barata, los gobiernos tendrán que reformar las políticas fiscales, incluidas las tributarias, para repartir mejor los beneficios de un pastel económico más grande. Una política social redistributiva es mejor –y más barata– que seguir con la política proteccionista de mirarse el ombligo. Esto significa implementar medidas para amortiguar el golpe del subempleo o del desempleo, desde mejoras salariales y seguros hasta una consideración seria de una renta básica universal.

Nadie puede enfrentar en solitario los retos globales. Invertir en multilateralismo, movilizarse respecto a la Agenda de Desarrollo del 2030 e incentivar un crecimiento sostenible es una necesidad prioritaria para construir soluciones duraderas.

ARANCHA GONZÁLEZ,
Directora Ejecutiva del Centro
de Comercio Internacional (ITC)



¿ES BELARÚS LA PRÓXIMA SORPRESA ESTRATÉGICA DEL KREMLIN?

PÍLDORA DE OPINIÓN

BELARÚS

Las tensiones entre Belarús y Rusia han ido en aumento en los últimos meses, con el Kremlin ejerciendo una creciente presión económica, política, militar e incluso informativa sobre Minsk, para ejercer un mayor control político y militar sobre Belarús. La naturaleza de esta presión responde al deseo del Kremlin de convertir a Belarús en un puesto avanzado de la Guerra Fría, intensificando su estrategia de “dominio de la escalada” (escalation dominance) frente a Occidente y de generación de amenazas convencionales e híbridas a los estados miembros de la OTAN y a Ucrania.

Moscú también debe estar seguro de que cuenta con pleno acceso al territorio de Belarús llegado el caso de un conflicto militar a gran escala con la OTAN (debido a Kaliningrado). Esto es difícil mientras el estado bielorruso sea fuerte y Aliaksandr Lukashenska se mantenga neutral en la confrontación entre Rusia y la OTAN, motivo por el cual niega la presencia de bases militares rusas en suelo bielorruso. Esta posición, obviamente, contradice las intenciones estratégicas del Kremlin y podría conducir a Moscú a activar un escenario de crisis.

Lamentablemente, como otros estados postsoviéticos, Belarús es rehén de cómo el Kremlin concibe las relaciones internacionales, esto es, como un juego de suma cero. A juzgar por las declaraciones de Aliaksandr Lukashenska, parece claro que los dirigentes bielorrusos no se plantean normalizar sus relaciones con Occidente en detrimento de sus obligaciones estratégicas con Rusia o con la integración euroasiática. Pese a ello, el Kremlin insiste en tratar cualquier atisbo de normalización entre Occidente y Belarús como una amenaza a su influencia.

Existen indicios de que Moscú ya ha desarrollado un plan de contingencia ante una posible pérdida de influencia en Belarús. Parece que el Kremlin considera la posibilidad de desplegar tropas para “estabilizar la situación y restaurar el orden constitucional” como respuesta a posibles disturbios en Belarús, algo que se desprende de las maniobras militares conjuntas de “interacción” y de “hermandad eslava”, celebradas en 2015.

En este contexto, Moscú ha desplegado ya dos brigadas mecanizadas de las Fuerzas Armadas rusas en Yelnya (en la región de Smolensko), y en Klintzy (en Briansk), a 80 y 40 kilómetros respectivamente de la frontera bielorrusa. Convenientemente para Moscú, estas brigadas están estratégicamente situadas para llevar a cabo una hipotética intervención de crisis so pretexto, por ejemplo, de una operación antiterrorista conjunta.

El año pasado se desvelaron datos logísticos referidos a un cargamento militar ruso compuesto por 4.162 vagones ferroviarios, que dan pistas claras de los ambiciosos objetivos estratégico-militares del Kremlin. Según parece, Moscú planearía desplegar un gran número de unidades rusas en territorio bielorruso —al menos una o dos divisiones mecanizadas dependiendo del método de cálculo utilizado— lo que supone un contingente que supera con mucho cualquier objetivo declarado del Zapad-2017, las maniobras militares conjuntas con Rusia que tendrán lugar en territorio bielorruso en septiembre de 2017.

Además, Rusia sigue reforzando la infraestructura y los controles aduaneros en la frontera bielorrusa, desplegando dos formaciones operativas del Servicio Federal de Seguridad. En febrero de 2017 también hicieron acto de presencia unidades del Servicio Federal Aduanero. Oficialmente, el objetivo es proteger el mercado ruso del embargo de productos

alimenticios occidentales introducidos desde Belarús y otros estados miembros de la Unión Económica Euroasiática, pero esto podría convertirse fácilmente en un bloqueo económico.

Los indicios apuntan a que el conflicto Rusia-Belarús puede desembocar fácilmente en una nueva fase crítica, de mantenerse la actual escalada. La cuestión principal es si el Kremlin se prepara realmente para una crisis con Belarús o simplemente, utiliza las amenazas como medio para lograr otros objetivos políticos y concesiones a través de un brutal chantaje.

Lo cierto es que ambas opciones conllevan consecuencias dramáticas y de largo alcance para la seguridad regional. Porque solo una Belarús fuerte, soberana e independiente puede frenar la escalada de la estrategia rusa de dominación y contribuir a la seguridad y a la estabilidad regional, impidiendo al mismo tiempo una confrontación militar entre Rusia y la OTAN.

Los indicios apuntan a que el conflicto Rusia-Belarús puede desembocar fácilmente en una nueva fase crítica

ARSENI SIVITSKI,

Director del Centro de Estudios Estratégicos y de Política Exterior de Minsk y oficial militar en la reserva de las Fuerzas Armadas Bielorrusas



INDIA ANTE EL RE-EQUILIBRIO DE LAS GRANDES POTENCIAS

PÍLDORA DE OPINIÓN

INDIA

El colapso de la Unión Soviética y el cénit de la Guerra Fría hicieron añicos el universo estratégico de la India. Con la confluencia de presiones para que el país emprendiera la reforma económica y de nuevos retos de seguridad –internos y regionales–, Nueva Delhi reorientó su política exterior. Esta implicó zanjar los grandes déficits económicos y políticos en las relaciones con Estados Unidos, Europa y Japón; normalizar la relación con China; y preservar la esencia de la asociación tradicional con Moscú. Dicha estrategia de “multilineación” se vio favorecida por el hecho de que no estalló ningún conflicto mayor entre las grandes potencias durante la década de 1990. Ya en los 2000, el rápido ascenso del peso económico indio reforzó la percepción generalizada del país como una “potencia emergente” con peso en el sistema internacional.

Incluso cuando la India intensificó sus relaciones con Estados Unidos y recibió el apoyo de George W. Bush y de Barack Obama, Nueva Delhi mantuvo suspicacias menores acerca del momento unipolar, y fueron muchas las voces políticas y de los responsables de la seguridad nacional que temían que India pudiera convertirse en un “socio subalterno” de Estados Unidos. Por ello, la salvaguarda de la autonomía estratégica y la promoción de la multipolaridad siguieron siendo objetivos importantes de la política exterior india durante las décadas de 1990 y del 2000.

La llegada del primer ministro Narendra Modi al gobierno en 2014, aportó una mayor audacia a la política exterior, que ganó aplomo en la relación con las grandes potencias, y proclamó sin ambages que India ambicionaba convertirse en una “potencia preeminente”. Para ello, abandonó la tradicional ambivalencia respecto a Estados Unidos y profundizó los vínculos defensivos con Washington, esbozando una visión conjunta con el presidente Obama para el litoral Indo-Pacífico. En la misma línea, amplió el compromiso con Japón –que apunta a ser su nuevo socio esencial y puntal de sus aspiraciones regionales y globales– y Australia, ambos aliados de Estados Unidos en la región.

Dicho contexto agudizó las disputas con China y despertó tensiones con Rusia. Beijing vigorizó su relación especial con Pakistán y bloqueó las maniobras indias para entrar en el Grupo de Suministradores Nucleares (GSN), desde donde pretendía presionar a Pakistán para que retirase su apoyo a grupos terroristas contrarios a la India. A Modi, que tenía una actitud más positiva que sus predecesores con respecto a Chi-

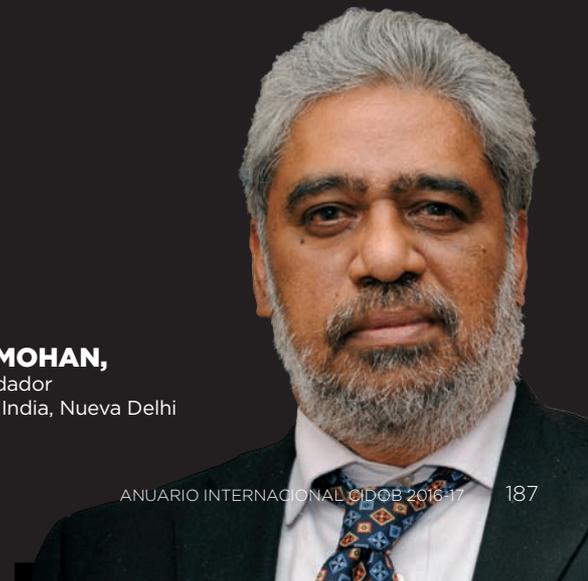
na, no le quedó otra alternativa que concluir que Beijing no iba a acomodarse en modo alguno a los intereses indios. La creciente influencia china en el subcontinente y en el océano Índico, y su actitud inflexible hacia la India, han minado la buena voluntad inicial hacia Beijing. A su vez, han limado las reticencias hacia una asociación con Estados Unidos más estrecha. Tampoco Rusia parece complacida con la proximidad de Delhi y Washington, y en consecuencia vuelve su mirada a Pakistán. Los planes de Moscú de vender armas a Islamabad y de intensificar la cooperación diplomática respecto a Afganistán alimentan la desconfianza india, a pesar de las garantías ofrecidas por el Putin.

India está abierta a construir alianzas en base a su propio interés y de la mano de las grandes potencias y de potencias medias

A diferencia de otras capitales del mundo, en Nueva Delhi hay menos inquietud sobre la nueva administración Trump. No obstante, hay plena consciencia del impacto significativo que puede tener en el equilibrio entre las grandes potencias. Modi y sus asesores están imbuidos de un gran realismo, y se preparan para asistir a incipientes cambios estructurales en el equilibrio de fuerzas. La India está lista para abandonar su antigua casilla por la defensa del no-alineamiento, la autonomía estratégica y la multipolaridad. Está abierta a construir alianzas en su propio interés y, de la

mano de las grandes y las medianas potencias proyectarse en Eurasia. Si el tirón de la *moralpolitik* ha inhibido a la India en el pasado, Nueva Delhi apuesta ahora claramente por un equilibrio de poder basado en la *realpolitik*.

C. RAJA MOHAN,
Director fundador
de Carnegie India, Nueva Delhi



CINCO PASOS HACIA LA INTEGRACIÓN REGIONAL AFRICANA

PÍLDORA DE OPINIÓN

INTEGRACIÓN REGIONAL

Más allá del ideal panafricano de unidad, hay un objetivo todavía no alcanzado que necesita convertirse en realidad: la integración regional, que actualmente en África dista bastante de ser un activo económico para el continente. Los flujos comerciales entre Burundi y Bélgica, por ejemplo, parecen más fáciles y baratos que entre Burundi y Kenya. Solamente 328 *hubs* africanos de transporte aéreo, unidos por el grado de conectividad más bajo en comparación con cualquier región del mundo, cubren una masa terrestre de 11,7 millones de kilómetros cuadrados. Este panorama podría explicar por qué África no ha llevado plenamente a cabo su objetivo integrador, pese a los diversos intentos realizados, como el Plan de Acción de Lagos, el Tratado de Abuja, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África y la Agenda 2063. Comparado, por ejemplo, con el porcentaje del 25% del comercio intrarregional sobre el comercio total (únicamente mercancías de Norteamérica, el 41% de la Unión Europea o el 43% de Asia, el porcentaje africano sobre el comercio total es del 9%, un número muy bajo.

La integración regional incluye el comercio, pero no se limita solo al comercio. De hecho, la integración regional debería medirse por la forma en que los ciudadanos viajan por placer o trabajo, por la forma en que se comunican al mismo tiempo que hacen transferencias internacionales. Básicamente, la integración regional ha de traducirse en movimientos libres y agilizados de mercancías y de personas, con un enfoque equilibrado en ambos aspectos. Al fin y al cabo, la integración regional se hace por y para los ciudadanos, y ha de estar arraigada en las comunidades económicas regionales.

Este fue el leitmotiv del lanzamiento del Índice de Integración Regional en África. Mediante la investigación llevada a cabo por el Banco Africano de Desarrollo, la Unión Africana y la Comisión Económica para África, los estados miembros africanos pueden acceder ahora a una visión multidimensional y transfronteriza de la integración. Este índice mide los cinco pasos hacia la integración regional africana: especialmente para las economías más grandes del continente, que operan sobre la base de la nación más favorecida cuando comercian unas con otras, la integración comercial entre países vecinos en África es débil, debido a los retos que representan el déficit en infraestructuras, los elevados costes del capital y las barreras no arancelarias. Esto significa que una infraestructura regional mejor que facilite el movimiento de bienes y personas reducirá el coste de las transacciones y acelerará la entrega de bienes y servicios. La integración productiva es clave para el éxito económico de África, y el desarrollo de cadenas de valor regionales y globales ha de ser potenciado mediante unas bases económicas más diversas. Unos corredores comerciales regionales y más

compañías regionales de electricidad para impulsar la producción son realidades que deberían impulsar el mercado interno del continente. Por lo que respecta al libre movimiento de personas, el crecimiento de las remesas en los últimos años habla por sí solo: la apertura de fronteras hace posible que la migración colme la brecha de la falta de cualificación, promueve el intercambio de ideas y lleva a la expansión transnacional de la iniciativa empresarial y la innovación. Y en cuanto a la integración financiera y macroeconómica, debería tenerse en cuenta que el libre flujo de capitales estimula la inversión y hace posible un reparto más uniforme del capital entre los sectores más productivos; además, los costes de transacción para hacer negocios caen, lo que beneficia al sector privado y a las empresas de nueva creación (*start-ups*).

Los resultados apuntan a la EAC (Comunidad del Este de África) como la principal comunidad más integrada de África, seguida por la IGAD (la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo) y la ECOWAS (Comunidad Económica de los Estados del África Occidental). El Índice revela, además, que la integración regional no está necesariamente relacionada con el peso económico de un país en concreto. Por ejemplo, aunque Nigeria representa el 37% del PIB en la región de la ECOWAS, no es uno de los países que obtiene mejores resultados en dicha región. Costa de Marfil, en cambio, representa solamente el 3% del PIB regional dentro de la ECOWAS, pero es el país con un mejor rendimiento en cuanto a integración regional entre los miembros del bloque.

La integración regional se hace por y para los ciudadanos, y ha de estar arraigada en las comunidades económicas regionales

Finalmente, África necesita armonizar las políticas de integración entre sus bloques regionales, si quiere superar los obstáculos de la multiplicidad de estándares, reglas de origen y regímenes que entorpecen los esfuerzos de las comunidades económicas regionales, que han sido el *locus* de muchas medidas integradoras efectivas.

CARLOS LOPES,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas



La Unión Europea se ha convertido en el objetivo y el escenario político idóneo donde enraizar y hacer crecer el populismo. Con las emociones sociales a flor de piel por la desigualdad económica, y con las imágenes aún presentes en la retina y en el debate político y social de la mal llamada crisis de los refugiados, el populismo euroescéptico ha conseguido erigirse como un actor clave. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ofreció, además, un nuevo *momentum* a la derecha radical europea; una sensación renovada de victoria posible, ya alimentada por el referéndum del *Brexit* y lo que conllevaba de derrota dolorosa del statu quo comunitario.

Es el triunfo de la política de la disrupción, acrecentada por la debilidad de las instituciones europeas y una profunda erosión de la unidad en el seno de un proyecto comunitario concebido como escenario de choque de los distintos intereses nacionales.

La UE lleva décadas lidiando con la presencia de la extrema derecha pero, en los últimos quince años, el populismo se ha extendido, fortalecido y reversionado a sí mismo hasta transformar la agenda, la retórica y las políticas comunitarias. La extrema derecha ha ido cambiando de estética y enemigos para asegurarse una supuesta respetabilidad y nutrir su cesta de votos, pero, sobre todo, su verdadero éxito es haber conseguido erigirse en alternativa de poder: por vía indirecta, a fuerza de imponer su agenda política a gobiernos y partidos tradicionales (la crisis de los refugiados y los atentados han exacerbado discursos y apoyos); y por vía indirecta, ejerciendo de refugio electoral de aquellos que se habían sentidos excluidos de la política y de las políticas dictadas en los últimos años. El populismo ha dejado de ser síntoma de descontento para convertirse en alternativa real, que gobierna en Hungría o Polonia, forma parte de coaliciones gubernamentales como en

El año 2017 es el del paso al frente, la “primavera patriótica” anunciada por los grandes líderes populistas

Finlandia, o ejerce de actor clave en la escena política francesa, holandesa o danesa.

Cada uno de estos populismos aglutina desencantos o frustraciones distintos (austeridad, inmigración, una defensa de la soberanía y la identidad, la lejanía de Bruselas) y eso le permite arraigar tanto en países económicamente fuertes, como Austria, o en estados receptores netos de ayudas comunitarias, como Polonia o Hungría. En estas nuevas democracias liberales que se consolidan en el seno de la Unión, así como en los argumentarios políticos de líderes populistas como el holandés Geert Wilders, el desdén por las instituciones –europeas, pero también nacionales– que constriñen su poder es una constante.

Todas estas fuerzas tienen, a su vez, un mínimo común denominador: un euroescpticismo que ha traspasado los límites de señalar a la Unión Europea como culpable de todos los males por sus políticas injustas y tecnocráticas; la UE es ahora también culpable por lo que es, por lo que representa de instrumento político y burocrático, por la cesión de soberanía que conlleva, porque obliga a repensar y a abrir la idea de identidad y de pertenencia. Aunque la inseguridad económica, la precariedad laboral y los costes sociales de la crisis han actuado como ejes movilizados del apoyo electoral a estas fuerzas, el discurso identitario

es el fino hilo conductor de un populismo de derechas, que puede discrepar en sus recetas económicas o balancearse entre el conservadurismo o liberalismo social, pero que coincide ampliamente en su discurso sobre inmigración y derechos de las minorías. En su ideario figura una nueva interpretación de los derechos, menos universales, y más centrados en los derechos de los suyos, de su potencial electorado.

Cada triunfo electoral de Marine Le Pen –y de un Front National que llegó a convertirse en el primer partido de Francia– es una nueva derrota política para una UE que no ha sabido dar respuestas convincentes en la sucesión de crisis que han marcado la última década. El año 2017 es el del paso al frente, la “primavera patriótica” anunciada por los grandes líderes populistas, es el momento de la colaboración transeuropea al servicio de la supremacía de los intereses nacionales y de la estrategia de unas fuerzas totalmente establecidas ideológica y electoralmente.

CARME COLOMINA

Investigadora asociada, CIDOB



GUANTÁNAMO, LA PROMESA IMPOSIBLE

PÍLDORA DE OPINIÓN

GUANTÁNAMO

Hace quince años que llegaron los primeros prisioneros a la Base Naval de Guantánamo, Cuba. Concebida como una cárcel al margen de la ley para “combatientes enemigos”, Guantánamo se convirtió en símbolo de los abusos de la “guerra contra el terror” que lanzó la Administración Bush después del 11-S. Barack Obama ocupó la Casa Blanca en enero de 2009 con la promesa de cerrarlo. Una promesa que ha renovado año tras año y que obstáculos legales y políticos han frenado hasta hoy.

Como corresponsal de Catalunya Ràdio en EEUU visité Guantánamo a finales de octubre de 2016, pocos días antes de las elecciones presidenciales que ganó Donald Trump. Una visita estrictamente controlada por los militares, nuestra única fuente de información aquellos días. Y una oportunidad única.

En estos quince años, por Guantánamo han pasado casi 800 prisioneros. Desde la época Bush se han ido aprobando transferencias a terceros países, incluida España, de aquellos a quienes ya no se considera una amenaza. Al final del mandato Obama quedaban en ese recinto entre 40 y 50 reclusos. La mayoría viven en el Campo VI, donde cada detenido dispone de una celda con las comodidades básicas; en un espacio comunitario con televisión, comen y rezan juntos. Pudimos observarlos a través de un cristal y una reja. Muchos son de Yemen y Arabia Saudí. Se confeccionan turbantes con toallas. Llevan barbas largas.

En los últimos tiempos, los responsables de la *Joint Task Force* (JTF) de Guantánamo –un contingente de casi 2.000 efectivos que custodia la cárcel– han actuado en dos direcciones. Se preparaban para cerrar, pero mientras la orden no se hiciera efectiva, planificaban el futuro: renovando instalaciones

para trasladar la clínica, o construyendo una cafetería. “Nosotros ejecutamos órdenes, sean cuales sean”, nos decían.

En Guantánamo nadie pronuncia la palabra tortura. El ambiente es calmado y “no se maltrata a nadie”, insistían los altos mandos de la JTF. El famoso mono naranja, que identificaba a los presos conflictivos, ha desaparecido del Campo VI. El problema, dicen, es cómo los medios explican la historia. Pero todavía hay detenidos que se declaran en huelga de hambre. Lo que el jefe médico de la base denomina “ayuno no religioso”.

Al margen de la imagen de Guantánamo que el Pentágono quiera proyectar al mundo, el problema de fondo persiste. Muchos detenidos llevan allí años sin que nunca se hayan presentado cargos contra ellos. Se ha institucionalizado la figura del “preso para siempre”: hombres a quienes se considera demasiado peligrosos para liberar, pero a quienes no pueden procesar –en Comisiones Militares que organizaciones de derechos humanos consideran ilegítimas– por falta de pruebas.

Y queda el núcleo duro de presos, una decena, confinados en el secretísimo Campo VII, de ubicación desconocida dentro de la Base Naval. Entre ellos, el pakistaní Khalid Sheikh Mohammed, a quien EEUU considera el cerebro del 11-S. El Congreso ha vetado el uso de fondos federales para trasladarlos a suelo norteamericano y procesarlos en tribunales ordinarios. Parece una situación sin salida. Y el nuevo triángulo republicano –Casa Blanca, Cámara de Representantes, Senado– no ha dado señales de querer buscar soluciones. Mientras, la cárcel de Guantánamo cuesta más de 400 millones de dólares al año.

Hoy, entre los restos abandonados del famoso Campo X-Ray, adonde llegaron los primeros presos encadenados, crece la vegetación caribeña. Cuesta creer que junto a McDonald’s, campos de deporte y la tienda de souvenirs de la Base Naval se encuentre el que ha sido uno de los centros de tortura más infames del mundo occidental. Guantánamo ha cambiado en la última década. Pero mientras allí queden presos sin ningún derecho jurídico, continuará siendo un vergonzoso episodio en la historia de EEUU

**Mientras
Guantánamo acoja
presos sin ningún
derecho jurídico,
continuará siendo
un vergonzoso
episodio para EEUU**

Hoy, entre los restos abandonados del famoso Campo X-Ray, adonde llegaron los primeros presos encadenados, crece la vegetación caribeña. Cuesta creer que junto a McDonald’s, campos de deporte y la tienda de souvenirs de la Base Naval se encuentre el que ha sido uno de los centros de tortura más infames del mundo occidental. Guantánamo ha cambiado en la última década. Pero mientras allí queden presos sin ningún derecho jurídico, continuará siendo un vergonzoso episodio en la historia de EEUU

CÈLIA CERNADAS,

Periodista, corresponsal de Catalunya Ràdio en EEUU



ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN: UN MODELO ECONÓMICO PARA EL FUTURO

PÍLDORA DE OPINIÓN

BIEN COMÚN

A nivel global, cada vez son más los ciudadanos que manifiestan su preocupación por los problemas que afectan al mundo, como el aumento de la desigualdad, la exclusión, la emigración forzosa, la destrucción ambiental o la erosión de los derechos democráticos y de la participación; pero también por la pérdida de su significado y de valores. Así se refleja en una encuesta realizada por la Bertelsmann Foundation entre 2010 y 2012, según la cual entre un 80 y un 90% de los alemanes y austríacos desean la emergencia de “un nuevo orden económico”.

La contribución desde la “economía” a una solución holística para estos retos bien podría consistir en un retorno a la esencia etimológica de la palabra *oikonomia*: gestionar de una manera sostenible y con una finalidad humana y social el *oikos* (la casa); un fin por cierto muy distinto del arte de hacer dinero (o *chrematistike*).

Se trata de una distinción que no es ajena a los textos fundacionales de nuestros gobiernos. Según la Constitución de Baviera, “la finalidad de la actividad económica en su conjunto es servir al bien común”. También la Constitución española afirma: “Toda la riqueza del país en sus diferentes formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.”

Es en este sentido que, con tan solo cinco años de antigüedad, la Economía del Bien Común (EBC), surge como modelo económico alternativo en el que el conjunto de los actores económicos —empresas, inversores, consumidores, organismos de contratación públicos— persiguen el bien común en detrimento de otros factores, como el beneficio financiero o el crecimiento del PIB.

El núcleo de la idea es proponer una metodología alternativa para medir el éxito económico, que actualmente se limita al uso de indicadores monetarios como el Producto Interior Bruto, el beneficio empresarial o el rendimiento de las inversiones. En pocas palabras: parámetros sobre los medios de producción. En la “economía del bien común” el éxito no se mide en función de este objetivo. Por contra, un producto, balance financiero o evaluación de solvencia crediticia “de bien común” visibilizan y dan prioridad a factores que consideramos mucho más importantes. Por ejemplo: en la EBC solo se concederán préstamos si la evaluación ética es positiva. Los balances financieros positivos de las empresas serán premiados con reducciones de impuestos y aranceles, condiciones crediticias más favorables y prioridad en contratos públicos. Y es mediante estos incentivos legales y fiscales que los bienes y servicios éticos devienen más baratos para los consumidores y más competitivos que los bienes y servicios no tan éticos. En consecuencia, solo las empresas responsables podrán sobrevivir; las no éticas quedarán fuera de los mercados.

El mayor logro de la EBC es que no es una idea teórica. El movimiento internacional Economía del Bien Común comenzó en octubre del 2010 por iniciativa de unas doce empresas austríacas y desde entonces congrega a 2.200 empresas de 50 países, 400 de las cuales han implementado con éxito un balance financiero de bien común hasta su fase final, en la que tiene lugar una auditoría externa.

En el terreno político, el movimiento promueve cambios en la legislación actual mediante procesos democráticos “de abajo hacia arriba”, cuya principal aspiración es dotarse de una nueva “constitución económica”, redactada y adoptada por los ciudadanos soberanos. En la actualidad existen ya en España algunos “municipios para el bien común”. Sevilla ha firmado un tratado de colaboración con la asociación andaluza para la mejora de la EBC. También en

Valencia se establecerá una Cátedra de Economía del Bien Común. La Universidad de Barcelona es la primera que implementará un balance financiero de bien común. Y no solamente el nivel local ha adoptado sus propuestas. En febrero de 2015 el Comité Económico y Social Europeo (órgano consultivo de la UE) aprobó un dictamen —ratificado por el 86% de los votos— que considera que el modelo de la EBC debería integrarse en el marco legal de la Unión Europea.

Los balances financieros positivos de las empresas serán premiados con reducciones de impuestos y aranceles

CHRISTIAN FELBER

Psicólogo, sociólogo y politólogo en Madrid y en Viena, y es autor de una serie de éxitos de ventas sobre economía. Su libro *La economía del bien común* ha sido publicado en 12 idiomas.



La audaz decisión tomada en diciembre de 2015 por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) de autorizar una Misión Africana de Prevención y Protección en Burundi (MAPROBU) de 5.000 efectivos parecía, a primera vista, personificar las esperanzas de los padres fundadores de la UA para un enfoque más de principios y más intervencionista en la paz y la seguridad. Frente a la escalada de la violencia en Bujumbura, la invocación sin precedentes, por parte del Consejo de Paz y Seguridad (CPS), del artículo 4(h) de la Ley Constitutiva, que permite a la UA intervenir en un Estado miembro en caso de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad, parecía constatar la voluntad de la organización de adoptar una postura clara.

Sin embargo, los jefes de Estado africanos decidieron no aprobar la misión MAPROBU. Esto perjudicó la credibilidad de la UA, y puso de manifiesto la existencia de una fisura entre la Comisión, más activista, y los líderes de los estados miembros que, en su mayoría, se mostraron reacios a intervenir en la crisis constitucional de Burundi. También mostró lo que muchos ya sabían: que el celo panafricano de la primera década del nuevo milenio –ejemplificada por los presidentes Thabo Mbeki, Olusegun Obasanjo y Paul Kagame, y por el primer ministro Meles Zenawi– había pasado a mejor vida, enterrado bajo la losa de una mayor sensibilidad por la soberanía, el retroceso democrático en partes del continente, la debilidad de algunos líderes, esos mismos dirigentes enfrentados a retos internos, y un compromiso un tanto ambiguo con el multilateralismo.

**La UA se basa
excesivamente en
soluciones militares
para resolver crisis
que en muchos
casos son de
naturaleza política**

El principio de subsidiariedad, en virtud del cual las organizaciones subregionales, como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la Comunidad de África Oriental, son el primer recurso cuando estalla un conflicto, ha complicado en cierto modo la capacidad de actuar de la UA. El principio ha sido explotado por algunos líderes hegemónicos regionales, que no se fían del ascenso de un organismo continental independiente que algún día podría poner el foco en ellos. La UA, como cualquier otra organización multilateral, es solo lo fuerte que sus estados miembros le permiten ser. Esto no significa que la UA no haya tenido éxitos desde sus comienzos en julio de 2002. Somalia se habría visto desbordada por el movimiento islamista radical Al-Shabaab sin la AMISOM (la misión de la UA en Somalia), una intervención que tuvo un costo enorme en vidas y en dinero. En la República Centroafricana, una misión internacional encabezada por la UA puso freno al baño de sangre posterior a un conflicto que había adquirido dimensiones religiosas. La organización y sus estados miembros han mostrado su disposición a asumir riesgos mucho mayores que las Naciones Unidas, que son muy reticentes y están muy condicionadas por mayores restricciones en sus mandatos que les impiden implicarse en actividades destinadas a hacer cumplir la ley por la fuerza.

Sin embargo, la UA se basa excesivamente en soluciones militares para resolver crisis que en muchos casos son de naturaleza política. Debería centrarse en construir y en desplegar de manera más efectiva las herramientas diplomáticas, de mediación y políticas que tiene a su disposición.

A finales de enero, los líderes tienen que elegir un nuevo presidente para dirigir la Comisión, el secretariado de la organización. La relación del presidente con los estados miembros será vital, igual que su habilidad para trabajar en colaboración con determinados agentes clave, como la Unión Europea y las Naciones Unidas. Trabajar conjuntamente con estas instituciones, especialmente en labores de prevención, ayudará a la UA a retomar impulso para alcanzar los objetivos que ella misma se ha planteado.

COMFORT ERO,

Directora del Programa para África del International
Crisis Group



EL FUTURO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE LA AGRICULTURA

PÍLDORA DE OPINIÓN

SEGURIDAD ALIMENTARIA

El precio de los alimentos se disparó durante la crisis alimentaria global de 2008, reavivando los temores malthusianos de los años setenta acerca de la sostenibilidad a largo plazo para proveer de alimentos a una población mundial creciente. Tras la Segunda Guerra mundial, la productividad agrícola se disparó en muchas regiones, espoleada por la mecanización, la producción ganadera intensiva y el uso de fertilizantes minerales. Como consecuencia, las alarmantes predicciones de Malthus se mostraron intrínsecamente erróneas. La población mundial creció espectacularmente, pero la producción alimentaria creció todavía más. Sin embargo, la crisis alimentaria global ha reabierto las dudas acerca de la capacidad suficiente de la producción.

El aumento de la población, la mayor demanda de biocombustibles en los países desarrollados, y los cambios de hábitos dietéticos a favor del consumo de carne y de productos lácteos en mercados emergentes, como el chino, han trastornado la demanda de los mercados alimentarios globales. En el lado de la oferta, los desechos sobrantes de la cadena logística siguen siendo abundantes, el aumento de productividad derivado de la Revolución Verde se moderado progresivamente, y la erosión, la escasez de agua y el cambio climático también afectan a la producción. Las reservas disponibles de tierras sin cultivar son limitadas y los factores de producción, como el petróleo y los fertilizantes, se encarecieron durante la primera década del siglo XXI y solo recientemente han empezado a ser más baratos. Los habitantes de las ciudades superan actualmente en número a la población rural, y el coste de la distribución de alimentos irá seguramente en aumento.

El crecimiento -aunque desigual- de la productividad agrícola contribuyó en un 70% al crecimiento de la producción agrícola global entre 1961 y 2005, muy por encima de la expansión de tierras cultivadas (23%) o la intensificación de la rotación de los cultivos (8%).

Hoy hay quien sostiene que podríamos asistir a un nuevo incremento de la productividad agrícola si se permitiera que la "revolución genética" siguiera su curso; sin embargo, también hay quien discrepa, aduciendo la escasez de pruebas empíricas y los graves riesgos sociales y ambientales que acarrearán los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), que podrían mermar la soberanía alimentaria de los agricultores.

Poner el foco en la disponibilidad de los alimentos conlleva el riesgo de ignorar otro factor que también es importante, como es el del acceso a los mismos. Durante las hambrunas, la gente no muere de hambre porque no haya comida disponible, sino porque carece de "derechos" y no está en condiciones de acceder a ella, como ha señalado recurrentemente

el premio Nobel Amartya Sen. El sistema alimentario mundial produce teóricamente 1,5 veces comida suficiente para toda la población del mundo, pero aun así sigue agregándose en torno a los polos de la obesidad y del hambre. La globalización, las distancias cada vez mayores que se cubren en el transporte de los alimentos, y los despilfarros en la cadena logística forman parte de un sistema que depende en gran medida de la producción de hidrocarburos. Las empresas multinacionales como Monsanto, Cargill o Nestlé han dominado cada vez más las cadenas de valor de este sistema alimentario global. Controlan la oferta de factores de producción como las semillas y los fertilizantes, y dominan el comercio de materias primas y productos básicos que luego procesan en forma de alimentos envasados.

Por un lado, este sistema ha sido capaz de proporcionar alimentos de manera fiable a la población mundial urbanizada; por otro lado no es medioambientalmente sostenible y tiende a privar de derechos a los agricultores, cuya participación en los beneficios del sistema alimentario ha disminuido constantemente desde la Segunda Guerra mundial.

Un número creciente de personas en el mundo sigue hábitos dietéticos poco sanos y consume un exceso de carne, azúcar y alimentos procesados, mientras que los habitantes de los países en vías de desarrollo están expuestos a las subidas de precios en los alimentos básicos, que constituyen un porcentaje muy elevado de sus gastos presupuestarios. El debate acerca de las reformas y compromisos en el régimen alimentario global es cada vez más apremiante.

**El sistema
alimentario
mundial produce
teóricamente 1,5
veces comida
suficiente para
toda la población
mundial**

ECKART WOERTZ
Investigador sénior, CIDOB

LA EMIGRACIÓN ENTRE LOS JÓVENES DE LOS PAÍSES ÁRABES

PÍLDORA DE OPINIÓN MIGRACIONES

Miles de jóvenes en la región árabe quieren emigrar. Si bien son pocos los que lo han hecho, lo cierto es que son muchos los que expresan explícitamente su deseo de hacerlo. Según datos extraídos del proyecto europeo SAHWA, liderado por CIDOB, que analiza la situación de los jóvenes en cinco países árabes del Mediterráneo (Argelia, Egipto, Líbano, Marruecos y Túnez) solo entre el 1 y el 5% de los jóvenes que viven en la región han emprendido algún proceso emigratorio. Sin embargo, aproximadamente entre el 15% (para el caso de Marruecos) y el 53% (en el de Túnez), quieren emigrar a un tercer país.

Buena parte de los jóvenes en el mundo árabe están considerando la emigración como una salida posible y viable ante la falta de perspectivas de futuro. La frustración que los jóvenes sienten en sus países de origen les empuja a embarcarse en experiencias migratorias que ellos mismos reconocen como inciertas e incluso peligrosas (a través de la emigración irregular). Pero es que para muchos de ellos salir de sus países, de la forma que sea, es la única vía posible para aspirar a un desarrollo personal. La emigración se convierte en una elección obligatoria, y así lo expresan los propios jóvenes.

La emigración, como muestran los datos recogidos, lejos de tratarse de una respuesta a la situación de inestabilidad política o de falta de democracia, es la situación económica de estos países lo que lleva a sus protagonistas a buscar un futuro mejor. Países como Francia o Alemania son los principales destinos a los que miles de jóvenes aspiran a llegar. Así, cuando se les pregunta cuáles son los principales motivos para querer emigrar, la gran mayoría de ellos afirman que es la falta de oportunidades profesionales, así como la pobreza generalizada y los bajos niveles salariales.

A este respecto, cabe destacar que, en concreto, la situación de empleo (o falta de este) no es determinante en el deseo de emigrar de los jóvenes. Es decir, tanto los jóvenes empleados como los desempleados aspiran de igual forma a salir del país, lo que indica un claro descontento con la situación laboral existente. Por otro lado, en cuanto a los niveles educativos de estos jóvenes, existe una alta representatividad de aquellos con estudios superiores (grado universitario). Destaca el caso de Túnez, donde el 60% de jóvenes con un alto perfil educativo desean emigrar. Es importante recordar que, en la región con mayor paro del

mundo entre los jóvenes, en torno al 30%, -la media global en 2014 fue del 13% según ILO en 2014-, el paro afecta en especial a los grupos altamente cualificados.

Conocer las causas que llevan a miles de personas a desear emigrar, o a hacerlo establecerse definitivamente en el lugar de acogida, se ha convertido en uno de los principales objetivos de todo tipo de actores que buscan poner freno a estos movimientos migratorios, forzados en su mayoría. Pues bien, los jóvenes en países árabes reclaman aliviar la situación de frustración en la que encuentran por un mercado de trabajo y una situación laboral que no cubre ni sus necesidades, ni expectativas, ni intereses.

**Para muchos
jóvenes de los
países árabes salir
de sus países es la
única vía posible
para aspirar a un
desarrollo personal**

ELENA SÁNCHEZ-MONTIJANO
Investigadora, CIDOB



España vivió en 2016 uno de los episodios más singulares de su historia política contemporánea. Diez meses de Gobierno interino, dos partidos nuevos en escena con cien diputados entre ambos, dos elecciones legislativas en seis meses y, al final, la continuidad de la fuerza gobernante. El Partido Popular (PP) sigue siendo el Partido Alfa de las clases medias tradicionales, un bloque electoral que no baja de los siete millones de electores, formado principalmente por personas mayores de 55 años, repartidas de manera bastante uniforme por el territorio español (con la significativa excepción de Cataluña y el País Vasco), con especial protagonismo político en los pueblos, las ciudades medias y las capitales de provincia. La España conservadora y algo más: la que quiere tranquilidad ante la fenomenal aglomeración de incertidumbres. Una discreta paz española mientras el mundo cruje y en Cataluña ondea la bandera independentista. El mal menor. Esa es, muy en síntesis, la oferta de Mariano Rajoy. Esa es la propuesta que ha acabado ganando, porque la amplia corriente de protesta no ha encontrado un partido capaz de aglutinarla y sintetizarla.

El PP se confirma como el Partido Alfa a la espera de acontecimientos y la izquierda queda partida en dos mitades casi iguales. Este es el destilado final de los diez meses de interinidad. Si ese esquema se consolida, el Partido Popular puede asegurarse un largo periodo de gobernación en España, actuando como "Partido Nacional" garante de una estabilidad básica y de una correcta interlocución con los centros de poder europeos. "Partido Nacional" como lo fue durante más de cuarenta años la Democracia Cristiana italiana; como lo fue el *gaullismo* francés en un periodo de tiempo algo inferior, o la CDU alemana hasta el Bad Godesberg del

En la crisis, cada país europeo parece remitirse a sus mitos fundacionales. España siempre ha sido una desordenada suma de resistencias

Partido Socialdemócrata. El partido de orden capaz de congregar a los españoles que no quieren que el país se rompa y que recelan de las dos izquierdas: la moderada –en la que no ven líderes fiables–, y la nueva, que perciben como un peligro radical. "Veinticinco años de paz", bromeaba un joven dirigente del Partido Popular el pasado mes de enero, al constatar la fortaleza relativa de Rajoy frente a sus adversarios después de un año nunca visto.

Esos diez meses de interinidad han vuelto a poner de manifiesto el más genuino de los pensamientos políticos españoles. El lema del doctor Juan Negrín, el más tenaz de los dirigentes republicanos: "Resistir es vencer". El aforismo de Camilo José Cela, que conocía bien el país: "En España, el que resiste gana". La pasmosa capacidad de aguante de Franco, ese autoritarismo frío que supo aliarse con el paso del tiempo. Aguantar, aguantar, aguantar. Toda una mitología nacional que nos transporta a los dramas de Sagunto y Numancia, a las resistencias heroicas durante la Guerra de la Independencia y

a algunos de los más trágicos episodios de la Guerra Civil: la resistencia de los oficiales franquistas asediados en el Alcázar de Toledo y la resistencia de los mineros asturianos fieles a la República en las montañas que rodean el puerto de Pajares. En los actuales momentos de crisis, cada país europeo parece remitirse a sus mitos fundacionales. España siempre ha sido una desordenada suma de resistencias.

La partición de la izquierda en dos mitades casi iguales puede ir para largo. El PSOE, demasiado desgastado, no ha podido ofrecer una alternativa tranquilizadora a la gente dispuesta a cambiar de gobierno –ese voto ha sido interceptado en buena medida por Ciudadanos–, mientras que Podemos apostó por el *sorpasso* (el "adelanto" a los socialistas) y no le salió bien, porque ese partido es todavía percibido como una aventura. Los grandes bloques electorales siguen casi intactos, pero repartidos de manera distinta. El centroderecha se ha fraccionado menos que la izquierda. Han jugado a favor del Partido Popular la inercia del poder, el evidente apoyo de Bruselas, los buenos datos estadísticos de la economía (que no repercuten a la práctica en la vida de mucha gente), la endiablada cuestión de Cataluña y la radicalidad de Podemos.

De la interinidad del 2016 surge una hegemonía funcional de la derecha española, a la espera de acontecimientos.

De la interinidad del 2016 surge una hegemonía funcional de la derecha española, a la espera de acontecimientos.

ENRIC JULIANA,
Director adjunto de *La Vanguardia*



REFLEXIONES DE LAS FARC-EP SOBRE EL ACUERDO DE PAZ CON EL GOBIERNO

ENTREVISTA CON **IVÁN MÁRQUEZ**

Jefe de la Delegación de Paz de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones, miembro de la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Verificación (CSIVI) y miembro del Secretariado de las FARC-EP

Con la aprobación, en noviembre de 2016, del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) la sociedad colombiana alcanza un momento histórico y trascendental para el desarrollo pleno y pacífico del país. La puesta en práctica del exhaustivo Acuerdo, que sitúa a las víctimas en un lugar preeminente, contempla aspectos como la tan ansiada reforma agraria, la conversión de la guerrilla en un actor político, su desvinculación del tráfico de drogas, la reparación de las víctimas mediante un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, como no, el cese definitivo de la violencia y la creación de mecanismos de implementación y verificación de todo lo acordado. El contexto actual invita al optimismo, aún cuando los actores deben mostrarse prudentes y responsables para transitar con éxito el largo camino que queda por delante. Con el Acuerdo, la sociedad colombiana pone fin a 50 años de guerra y afronta ahora el reto de materializar la paz en todos los rincones de la geografía colombiana.

La presente entrevista tuvo lugar mediante un intercambio de preguntas escritas a Iván Márquez, Jefe de la Delegación de Paz de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones, miembro de la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Verificación (CSIVI) y miembro del Secretariado de las FARC-EP, el día 26 de marzo de 2017 en Cartagena de Indias, Colombia. El trámite contó con la intercesión de Enrique Santiago, abogado y asesor jurídico de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones y en la CSIVI.

¿Qué razones llevaron a las FARC-EP a decidir que era la hora de iniciar un proceso de paz con el gobierno de Colombia?

La decisión de dialogar no es coyuntural. Para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la búsqueda de una salida dialogada a la confrontación forma parte de la columna vertebral del planteamiento político estratégico; ello ha sido una constante, y es por esta razón que en la historia de nuestra organización existen muchos momentos en los que se intentaron aproximaciones y desarrollos en esta materia, empeños que desafortunadamente resultaron fallidos debido a la intransigencia y a los incumplimientos gubernamentales. El origen mismo de las FARC-EP está antecedido por un intento claro de los campesinos del territorio de Marquetalia de buscar una solución pacífica de

sus problemas con el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1964). En ese propósito trabajaron muchos sectores sociales, pero no fue posible y lo que se produjo fue el ataque a aquella pequeña región del Tolima en 1964, iniciándose con ello la subsiguiente guerra de resistencia que se prolongó por más de medio siglo.

Entre los intentos de solución podemos recordar que a iniciativa de las FARC-EP se dieron los Diálogos de la Uribe durante el Gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986), los Diálogos de Caracas (1991), los Diálogos de Tlaxcala (1992) y los Diálogos del Caguán (1999). De tal manera que la decisión siempre ha estado presente junto con una disposición también constante a interlocutar con el gobierno que de verdad expresara su interés en resolver por la vía del diálogo

tanto las causas económicas, sociales y políticas de la confrontación, como sobre todo de la exclusión, miseria y desigualdad. Ahora, respecto a los Diálogos de la Habana (2012-2016), en la medida en que el Gobierno buscó aproximaciones y mostró voluntad de querer abordar estos asuntos, se decidió iniciar una primera etapa reservada para consensuar una agenda de negociación, para pasar posteriormente a una etapa pública que condujo al Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Para ustedes, ¿en qué se diferenció este proceso de paz respecto a las pasadas experiencias que apuntaba?

Definitivamente en esta ocasión se mostró la disposición y la voluntad de querer llegar a soluciones. Esta predisposición fue aumentando a medida que transcurrían las conversaciones, comenzando por la construcción misma de la agenda de negociación. Posteriormente el debate y el acuerdo sobre Reforma Rural Integral elevó la confianza entre las partes en torno a la posibilidad cierta de llegar a la firma de la paz. Me gustaría destacar que en esta ocasión se consiguió llegar a soluciones concretas a los verdaderos problemas causales de la confrontación, lo cual fue fundamental para el avance. Estas respuestas prácticas se dieron solamente en los Diálogos de la Uribe que entonces sirvieron de plataforma para el lanzamiento de la Unión Patriótica en 1985. Desafortunadamente la guerra sucia y el paramilitarismo de Estado aniquilaron esas conquistas. Ahora pienso que hubo más énfasis en estas concreciones de compromisos, cuyos resultados son el tratado de paz que tenemos hoy día y que hemos comenzado a implementar.

La correcta implementación del Acuerdo de Paz modernizará el país y consolidará un Estado de derecho plenamente democrático

Finalmente, me gustaría añadir que en este proceso el papel de países garantes como Cuba y Noruega, y el de acompañantes como Venezuela y Chile, también marcaron con su compromiso y abnegación una garantía y apoyo que antes no hubo en lo que respecta a la implicación de la comunidad internacional.

¿De qué manera se logró el apoyo de todos los integrantes de las FARC-EP en el proceso de paz? Cuáles fueron los mayores retos y los mayores temores de sus integrantes?

Pienso que en la medida en que la política de paz y la búsqueda del diálogo han sido parte esencial de la línea estratégica de las FARC-EP, tal asunto está en la formación ideológica y política de nuestra militancia. Esa es la base sólida que ha garantizado nuestro consenso interno en ese campo. Y esto se acompaña de la cohesión y la unidad de mando que históricamente han tenido las FARC-EP. De esta manera, en tanto que las aproximaciones con el Gobierno se informaron suficientemente desde el inicio, y se consultaron con las bases, nadie se vio sorprendido por ninguna determinación de fondo. Podemos decir que las determinaciones se fueron construyendo desde las bases y con el ejercicio de la dirección colectiva. Esta realidad se observó de manera clara en las conclusiones a las que se llegó en las reuniones de Dirección y en la X Conferencia Nacional de Guerrilleros donde la refundación de lo acordado en La Habana fue plena y contundente. Lo mismo se puede decir de la determinación a dar el paso a la legalidad, no queriendo decir esto que no hubiera discusión, controversia y dificultades. Pero en todo caso el centralismo democrático siempre resolvió las diferencias.

¿Cuál fue el momento más crítico para ustedes durante el proceso de paz?

El momento más difícil fue en el 2015, cuando el Estado en respuesta al ataque del Bloque Móvil –que produjo la baja de 14 soldados en Buenos Aires (Cauca) que adelantaban operaciones contra la guerrilla en la tregua unilateral-, bombardeó nuestras posiciones provocando la muerte de 30 guerrilleros en Guapi (Nariño). Por esos mismos días, en acciones de francotiradores, fueron abatidos por el Ejército en el río Atrato, el comandante del 18 Frente Román Ruiz y Emiro Jiménez, quien había participado en la Delegación de las FARC-EP en la Mesa de Diálogos en La Habana y se encontraba en los campamentos, explicando la marcha del proceso de conversaciones. A estos hechos luctuosos siguió una acción generalizada contra la infraestructura del Estado, recrudeciéndose así la confrontación, lo que generó grandes tensiones en la Mesa de Diálogo. Todo esto fue el resultado de una lógica absurda por parte del Gobierno que consistía en que en La Habana se debía dialogar como si no hubiese guerra en Colombia, y en Colombia se debía proseguir la guerra como si no hubiese conversaciones de paz. Finalmente se impuso el sentido común que obligó a las partes a convenir un desescalamiento de la guerra y un cese bilateral, de hecho, del fuego y las hostilidades, que se mantuvo hasta la firma del Acuerdo de Paz.

¿Consideran ustedes que el Acuerdo definitivo es un mejor acuerdo?

El Acuerdo final es el producto de cerca de cinco años de discusiones con posiciones a veces diametralmente opuestas en cada lado de la Mesa de Diálogo. Durante los cuatro años de negociaciones se produjo una intensa batalla de ideas en la que de nuestro lado se procuraba buscar las máximas reivindicaciones para los sectores sociales más desfavorecidos del país. Siempre estuvimos hablando en nombre de las pobrerías tratando de construir nuestras propuestas a partir de las plataformas y pliegos reivindicativos de organizaciones y movimientos sociales. A eso nosotros le llamamos propuestas mínimas y siempre estuvimos adelante en la iniciativa, dándolas a conocer públicamente antes de llevarlas a la discusión directa con el gobierno. De este modo presentamos 100 propuestas mínimas para la Reforma Rural Integral, 100 propuestas para la Participación Política, alrededor de 50 propuestas para el tema de la nueva política antidrogas, 100 propuestas para el tema víctimas y 70 propuestas mínimas para garantizar el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera, etc.

De estas iniciativas creemos que se logró introducir aproximadamente el 10% de temáticas que consideramos “mínimas” para construir al menos un Estado de derecho que genere espacios para iniciar la apertura democrática que requiere el país. No se trató de que nosotros lleváramos a la Mesa de Diálogo el programa revolucionario de las FARC-EP, en ningún caso. Reitero que eran propuestas mínimas para dar pasos firmes hacia la democracia.

De esta manera puedo afirmar que lo ideal hubiese sido que se incluyera el 100% de las reivindicaciones populares, y ese sería el mejor Acuerdo. Pero somos dos partes en la Mesa y lo que se firmó es lo que se logró, lo cual indudablemente y pese a que dejamos 48 salvedades muy importantes, si se cumple puede producir un salto verdaderamente revolucionario en nuestra sociedad en favor de las mayorías empobrecidas.

La correcta implementación del Acuerdo Final tendrá como resultado la modernización de país y la consolidación de un Estado de derecho plenamente democrático

Temas como poner freno al latifundio, a la extranjerización de la tierra, a la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno, la democratización de la propiedad de los medios de comunicación, los problemas urbanos, etc., quedaron como salvedades y planteados en perspectiva constituyente. A su solución no hemos renunciado, y por ello es importante destacar la precisión que se hace en el noveno párrafo de la introducción del Acuerdo de La Habana: en él se establece que “el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”.

Pero en todo caso lo que sí podemos afirmar es que el Acuerdo posterior al 2 de octubre precisó y mejoró la redac-

En esta ocasión se mostró la disposición y la voluntad de querer llegar a soluciones concretas para los problemas causales de la confrontación

ción del Acuerdo que se puso en consideración plebiscitaria, considerando que la esencia de los dos es la misma.

¿Cuál es la expectativa que las FARC-EP tienen sobre el posible número de disidentes?

Este es un tema menor frente al enorme nivel de cohesión y compromiso con la paz que tiene el conjunto de las estructuras de las FARC-EP. No ha habido lo que dicen algunas desinformaciones de prensa sobre la existencia de frentes o columnas completas de las FARC-EP en tal situación de disidencia. Por ejemplo, se habló del Frente Primero como el caso más sonado; pero en realidad fue un grupo de dicho Frente no mayor a una compañía (54 unidades) el que tomó tal determinación. Y en ello hay, desde causas que obedecen a la falta de información o comunicación con estas unidades sobre las cuales, de una u otra forma, la propaganda anti-acuerdo también tiene su peso. Aunque sea un fenómeno excepcional y menor, como ya dije, no por ello deja de ser preocupante. A mi modo de ver, hay que persistir en buscar aproximaciones y entendimiento con estas unidades, tal como lo dispuso la X Conferencia de las FARC-EP. La solución no debe ser abrir la confrontación con ellos. Nunca será tarde para escuchar razones y buscar soluciones incruentas.

¿Cuáles son para ustedes los mayores riesgos de la implementación de lo acordado en los territorios del país?

El mayor riesgo siempre será el de que la confianza se pierda porque persista la guerra sucia y la acción siniestra y terrible del fenómeno del paramilitarismo en contra del conjunto del movimiento social. Otro riesgo es que el Gobierno no cumpla la palabra empeñada, ya sea por negligencia o por incompetencia, o ya sea porque los sectores del *establishment* que se oponen a la paz logren imponerse. Creemos que los Acuerdos tienen un buen blindaje jurídico que compromete a los dos siguientes gobiernos en su cumplimiento. Este blindaje debe fortalecerse con el Plan Marco de la implementación; no obstante existe una enorme dificultad financiera en el sentido de que ni el presupuesto de 2017 ni el Plan Nacional de Desarrollo en su redacción actual no comprometieron recursos en labores de paz. Esperamos que esto lo corrija el Plan Marco de la implementación. Sin duda habrá que comprometer mucho más que el 1% del Producto Interior Bruto que se pretende; habría que elevar el compromiso de inversiones al menos al 3% anual si se quieren cambios de fondo como los que plantea el Acuerdo, procurando sin duda la mayor ayuda internacional posible.

Al respecto de todo esto, creo que la reunión de balance y búsqueda de soluciones del 25 y 26 de marzo de 2016 en Cartagena de Indias, realizada por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación da un impulso bastante grande al proceso en lo que respecta al cumplimiento de compromisos. El comunicado conjunto número 17 emitido en esta última fecha recoge suficientemente elementos que refuerzan este punto de vista.

¿Qué mensaje le darían ustedes a los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esta nueva fase de negociaciones que se ha abierto recientemente con el gobierno de Colombia?

Durante mucho tiempo coincidimos con el ELN y así sigue siendo, en la consigna y propósito de tener “dos mesas y un mismo proceso”. El proceso de paz debe mirarse como uno solo para Colombia, de manera que exista una Mesa de Diálogo en Quito con el ELN y otra en Bogotá procurando la implementación de lo acordado con las FARC-EP. En este sentido, la mejor manera de persuadir a un movimiento revolucionario con larga tradición de lucha, como es el caso del ELN, es que el gobierno cumpla el acuerdo de La Habana, no con las FARC-EP sino con todo el país, porque este compromiso es con toda Colombia. Nosotros verdaderamente, siempre respetando la soberanía política del ELN y reconociendo su voluntad de paz, alentamos a su militancia a seguir adelante porque el destino de Colombia no puede ser el de la guerra.

Habría que elevar el compromiso de inversiones al menos al 3% anual si se quieren cambios de fondo como los que plantea el Acuerdo, procurando sin duda la mayor ayuda internacional posible

LA UNIÓN EUROPEA Y EL MULTILATERALISMO O CÓMO HACER FRENTE A LA ADVERSIDAD

PÍLDORA DE OPINIÓN

UNIÓN EUROPEA

La Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE), dada a conocer el 28 de junio de 2016, afirma que “la UE fomentará un orden mundial basado en normas, con el multilateralismo como principio esencial, y articulado en torno a las Naciones Unidas (...) Mediante nuestro peso combinado podremos promover normas acordadas para contener las relaciones políticas basadas en el poder y contribuir a un mundo pacífico, justo y próspero”.

Esta afirmación ha caracterizado el discurso de la UE durante la última década. En realidad, desde la adopción en 2003 de la Estrategia Europea de Seguridad, la UE se presenta a sí misma como “promotora del multilateralismo” a la vez que “potencia normativa”, ese tipo de potencia que contiene el poder con el uso de las normas. Ahora bien, el contexto internacional no ha dejado de cambiar durante la última década... para mal, si el mundo se ve desde Bruselas. Recordemos que hablar de un mundo adverso para la UE es algo plenamente asumido. En 2009, Javier Solana habló del peligro de “un mundo de multipolaridad sin multilateralismo”, mientras que Catherine Ashton, de manera elocuente, afirmó en 2010 que “este ya no es nuestro mundo”. En efecto, el orden internacional liberal surgido tras el final de la Segunda Guerra Mundial y centrado en las instituciones multilaterales sufre fuertes desafíos. La redistribución del poder material (economías emergentes) y las controversias

ideológicas, en torno a democracia, derechos humanos o libre competencia, erosionan el orden establecido, a la vez que el discurso de la UE.

En un contexto adverso como el actual, la doble identidad de la UE, multilateralista a la vez que normativa, nos plantea dudas: ¿cómo reacciona la UE frente a la adversidad? Si pensamos en términos de buen funcionamiento de las instituciones multilaterales, cabría esperar una UE dispuesta a adaptarse a las nuevas circunstancias; esto es, a ceder espacio de poder a los emergentes (cuota de voto o asientos) en las instituciones (el Fondo Monetario Internacional es un buen ejemplo) o a aceptar cambios normativos (la promoción de la rendición de cuentas o del buen gobierno han generado resistencias en muchos países del llamado Sur Global, que lo ven como una imposición occidental). Ahora bien, la UE que se ve a sí misma como exportadora de normas y que aspira a universalizar la promoción de los derechos humanos o la economía de mercado, tendería a reforzar sus posiciones, a atrincherarse, tanto en lo que se refiere a los objetivos perseguidos como a los procedimientos aplicados.

La adversidad en las instituciones multilaterales dificulta a la UE manejar su identidad, multilateralista y normativa

¿Qué está haciendo la UE frente a los desafíos? Esa es una buena pregunta que, de momento, no tiene una respuesta única. Más bien es una pregunta que nos permite abrir la reflexión cuando, por un lado, vemos una UE que capitula en materia de cambio climático, rompiendo con el

marco normativo de Kyoto para acomodarse a la lógica chino-americana; mientras que, por otro lado, se atrincheró frente a Rusia, respecto a la Carta Energética, o frente a los países africanos, cuando se trata de defender la integridad normativa del Tribunal Penal Internacional. En suma, la adversidad en las instituciones multilaterales ha puesto de manifiesto la dificultad de la UE para manejar esa doble identidad, multilateralista y normativa, que conforma su discurso como actor internacional en el siglo XXI.

ESTHER BARBÉ,

Catedrática de Relaciones Internacionales en la Universitat Autònoma de Barcelona y coordinadora del programa de investigación en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales



EL MAGREB CARECE DE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA

PÍLDORA DE OPINIÓN

MAGREB

Durante dos generaciones han dominado en el norte de África una serie de temores que han tenido como resultado la congelación de las relaciones entre Argelia y Marruecos, cuya frontera común permanece cerrada desde 1994.

Al este, Libia se ha convertido en un Estado fallido. La decisión occidental y qatari de destruir el régimen de Gaddafi en 2011 no previó las probables consecuencias que ello tendría para un país que, durante siglos, había sido poco más que una federación algo difusa de tres regiones variopintas: Cirenaica, que miraba hacia El Cairo; Tripolitania, vinculada a Túnez, y Fezán, perdida en la inmensidad del desierto del Sáhara.

Túnez es el único país árabe cuya revuelta contra la dictadura no fue aplastada o desactivada. De momento, goza de seguridad y del apoyo financiero de Argelia y de la UE, pero su economía está estancada. Los tunecinos pobres que se rebelaron contra la falta de empleo hace seis años son más pobres hoy. Las clases medias tienen libertad de expresión, pero en ausencia de pan esto significa muy poco para los más humildes.

Al oeste, la casi paralización de las relaciones entre las dos economías más importantes de la región explica por qué la industria marroquí de los fertilizantes requiere cada vez más fuentes de energía, y por qué el gas argelino es la materia prima más barata. Rabat ha comprado una cantidad mínima de energía a su vecino pese a la existencia del gasoducto Pere Duran Farell que desde 1996 ha estado llevando gas argelino a la península Ibérica atravesando Marruecos.

Marruecos puede suministrar a Argelia alimentos y una serie de artículos manufacturados. Y si se reabriere la frontera ese podría ser un destino atractivo para muchos argelinos que pasan las vacaciones en el extranjero cada año. Se calcula que unos 150.000 marroquíes trabajan con contrato en Argelia, con un visado temporal de tres meses.

Si bien Marruecos sería quien más se beneficiaría, económicamente hablando, de la reapertura de la frontera, los empresarios privados de ambos países aprovecharían rápidamente la mayor libertad de movimientos. Las exportaciones de gas argelino a Marruecos podrían incrementarse en una etapa posterior, pero restablecer la confianza entre estas dos naciones distanciadas será una tarea difícil y llevará tiempo. Si este es el caso, ¿qué ventajas económicas obtendría Argelia con la apertura de la frontera?

Es poco probable que Argelia y Marruecos empiecen a hablar pronto en serio. El restablecimiento de la confianza podría tomar la forma de inversiones si los dos países dejasen a un lado por el momento su disputa por el futuro estatus de la antigua colonia española del Sáhara Occidental, anexionada por Marruecos en 1975.

La ONU no ha logrado que se produzca ningún progreso en este tema. La UE ha sido rehén del apoyo incondicional a Marruecos de la clase política francesa, convencida de que la supervivencia de la monarquía estaría en juego si el país acordase una solución de compromiso. Este punto de vista no es compartido por todos los observadores del Magreb, porque huele a chantaje.

Quienes en Argel se oponen a abrir la frontera destacan los beneficios de que permanezca cerrada, entre ellos, una fuerte caída en el tráfico de drogas y la mayor facilidad para controlar a los marroquíes que viajan para alistarse al Estado Islámico (EI). Miles de marroquíes y tunecinos están luchando con el EI en Siria, Irak y Libia, mientras que son muy pocos los argelinos que lo hacen. Su posible regreso a la madre patria es una de las principales preocupaciones de los servicios de seguridad argelinos

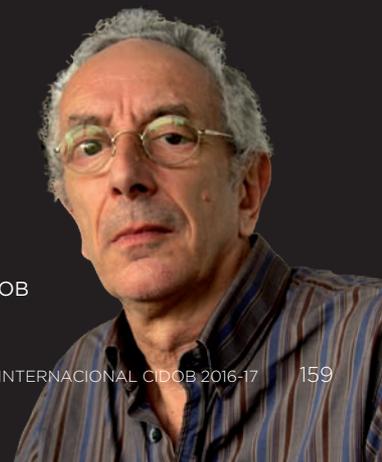
y tunecinos. Para Túnez, con unos 5.500 yihadistas en el extranjero, esto constituye un gran reto para su seguridad.

Abrir su frontera con Marruecos podría granjearle a Argelia más simpatías en la UE, pero nadie sabe si esto le daría mayor sostén diplomático. Lo que no cambiaría sería la postura pro-marroquí de Francia. Muchos destacados diplomáticos argelinos dudan de que las actuales circunstancias domésticas, que incluyen un presidente enfermo y la tensión económica por la caída en un 50% del precio del petróleo, sean propicias a una iniciativa audaz.

Abrir su frontera con Marruecos podría granjearle a Argelia más simpatías en la UE

FRANCIS GHILÈS

Investigador sénior asociado, CIDOB



EL PAPEL DE CHINA EN EL REDISEÑO DEL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL

PÍLDORA DE OPINIÓN

CHINA

China se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo, gracias a su reforma económica y a la apertura iniciada en 1978. Para ajustarse a su creciente poder económico, aspira a tener un rol más importante en el sistema financiero internacional, en el que del mismo modo que otras economías emergentes, ha estado infrarrepresentada durante décadas.

Uno de los esfuerzos más destacables que ha llevado a cabo China ha sido potenciar su moneda, el yuan, para convertirla en una divisa global. A este respecto, ha conseguido que fuera formalmente incorporada a la cesta de monedas que determina los SDR [Derechos Especiales de Giro] del Fondo Monetario Internacional (FMI) que entró en vigor el 1 de octubre de 2016. Ahora el yuan es uno de los activos de la cartera diversificada para los inversores globales públicos y privados, ocupa el quinto lugar en pagos globales y el octavo en transacciones de divisas, y representa el 29% y el 10%, respectivamente, de la liquidación de operaciones y de las inversiones extranjeras de China.

Y lo que es más importante: con el yuan en esta posición, se espera que el sistema SDR sea más utilizable que antes, ya que representa relativamente una distribución más ajustada del comercio y del peso económico en el mundo. China también dispone de un SDR mejorado en el mercado global, cuya importancia ha sido reiterada por Zou Xiaochuan, el gobernador del Banco Popular de China (BPC). En abril de 2016, el BPC decidió utilizar el SDR como la divisa de referencia para los datos referidos a sus reservas de moneda extranjera. En agosto de 2016, el mercado chino de bonos interbancarios dio la bienvenida al primer tramo de bonos SDR emitidos por el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD).

China ha logrado auspiciar nuevas instituciones financieras internacionales, como el BRICS Bank y el AIIB

Otra iniciativa de China encaminada a la reconstrucción del sistema financiero internacional ha sido la de desempeñar un rol activo en la gobernanza financiera global. Uno de los logros obtenidos ha sido la reforma del sistema de cuotas del FMI, que permite a China y a otras economías emergentes una contribución mayor, que se emparea con un mayor peso del voto en la toma de decisiones.

China también ha logrado auspiciar nuevas instituciones financieras internacionales, como el BRICS Bank y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB), que se postulan como complementos de las instituciones ya existentes. Junto a sus propias estrategias financieras, China está llevando a cabo una estrategia masiva de desarrollo económico conocida como "Un cinturón, Una ruta" (*One Belt, One Road*) que dará contexto a sus inversiones hacia Eurasia. El objetivo de dicha estrategia es redistribuir los recursos financieros y destinarlos a las necesidades reales de inversión a largo plazo, colmando el déficit en la demanda de infraestructuras, facilitando la inversión y el comercio global, y contribuyendo como resultado al desarrollo económico global.

En el futuro, la emergencia del yuan puede suponer un reto para el dólar norteamericano. No obstante, el yuan no aspira a reemplazar al dólar en el sistema monetario internacional; actualmente, el dólar todavía es la moneda de referencia en el comercio y las transacciones financieras internacionales y seguirá ejerciendo un papel dominante en los años venideros.

La internacionalización del yuan es una estrategia a largo plazo. Su éxito radica en muchos factores, como la continua influencia económica global de China, la política fiable y creíble de su Banco Central, el grado de apertura de su mercado financiero doméstico, así como otros factores que se encuentran más allá del ámbito puramente económico.

Como conjunto, el sistema financiero internacional se está volviendo cada vez más multipolar. La forma en que China ejerce su influencia y el papel que juega son fundamentales, especialmente en el actual período de transición. Sin embargo, China por sí sola no puede acarrear la reconstrucción a largo plazo. Existe ciertamente una necesidad de cooperación internacional, considerando el riesgo de contagios económicos devastadores y una tendencia a la "desglobalización", que supone una amenaza real para la economía mundial.

GAO HAIHONG,

Investigadora del Instituto de Economía Mundial de la Academia China de Ciencias Sociales



MALDIVAS: LA RADICALIZACIÓN DEL PARAÍSO

PÍLDORA DE OPINIÓN MALDIVAS

Más allá de su imagen de paraíso turístico, con su pléyade de playas de aguas turquesa y de soleados resorts-todo-incluido, Islas Maldivas ha experimentado uno de los procesos truncados de transición a la democracia más llamativos del Sur de Asia. Durante treinta años, hasta el 2008, el presidente Abdul Gayoom dirigió con mano de hierro el gobierno, superando una serie comicios en los que era el único candidato autorizado. Durante su mandato, el presidente promovió una reorientación del islam suní moderado, que era mayoritario, hacia posiciones próximas al wahabismo saudí, buscando legitimar su rol como “guardián del islam”, mediante la Ley para la Protección de la Unidad Religiosa de 1994, que ponía trabas a toda religión distinta del islam suní. También se instauraron las primeras escuelas de cultura árabe, libros de texto wahabíes procedentes de Arabia Saudí y becas para estudiar en Egipto, Arabia Saudí y Pakistán.

Recientemente, el expresidente Mohamed Nasheed afirmó que 200 maldivos han viajado a Siria e Irak para combatir al lado del EI; de ser cierto, supondría que Maldivas es probablemente el país del mundo con más militantes per cápita enrolados en dicha organización. Ello responde a que la política de Maldivas de las dos últimas décadas ha seguido un proceso de manual sobre cómo crear un entorno propicio a la radicalización.

Si bien algunos maldivos ya viajaron a Afganistán a finales de la década de 1990, supuso luego una severa advertencia la participación de maldivos en atentados en Karachi en 2002. Tras el tsunami del Océano Índico del año 2004, diversas organizaciones benéficas islamistas de Pakistán viajaron a las Maldivas para realizar labores humanitarias, y se cree que algunas reclutaron a jóvenes maldivos para llevarlos a estudiar a madrazas pakistaníes.

La política de Maldivas de las dos últimas décadas ha seguido un proceso de manual sobre cómo crear un entorno propicio a la radicalización

Si bien la expresión pública del extremismo fue reprimida –y empujada a la clandestinidad–, aumentaban sus expresiones físicas: barbas y abayas. Tras diversos ataques puntuales, en 2007 tuvo lugar un primer atentado con bomba contra un grupo de turistas en la capital, Malé.

La victoria del Partido Democrático de Maldivas (MDP), liderado por Mohammed Nasheed, en las elecciones de 2008, puso fin al régimen de Gayoom, pero no frenó la radicalización, sino más bien al contrario: formó coalición con el partido islamista Adhaalath –que obtuvo el ministerio de Asuntos Islámicos– y puso fin a la censura, dando alas a la divulgación del ideario radical. De nuevo, insurgentes maldivos atentaron en Lahore (2009) y fueron detenidos en Waziristán de camino a Afganistán. En el año 2012, una turba asaltó el Museo Nacional de Malé y destruyó varias estatuas budistas, y aumentaron los atentados contra moderados, ateos y sufíes.

Nasheed fue derrocado en 2012 y su lugar lo ocupó Abdullá Yameen, hermanastro del antiguo presidente Gayoom. A pesar de que este minimizó inicialmente la amenaza del islamismo, pronto la utilizó a su favor para perseguir opositores. En 2014, promulgó una ley antiterrorista que, en los años venideros, sirvió para condenar a Nasheed (13 años de cárcel y ahora exiliado político en Reino Unido), al líder del Partido Adhaalath, Imrán Abdullá (12 años) y tras un atentado contra el barco en el que viajaba el presidente Yameen, en 2015, también a su vicepresidente Ahmed Adeeb (15 años de cárcel). En 2016 promulgó una nueva ley antidifamación que imponía límites a la libertad de expresión. Tras las críticas de la Commonwealth por la deriva del país, Yameen abandonó la organización. En paralelo, la relación con Arabia Saudí es cada vez más estrecha. Riad ha abierto embajada en Malé, ha incrementado su intervención en la formación de los imames maldivos, y ha acordado que ambos países formarán una “unidad religiosa”.

La actitud displicente del gobierno ante el extremismo islámico –en contraste con la mano dura contra la oposición política moderada– no presagia nada bueno. Un ataque a cualquiera de los centros turísticos pondría en peligro a la principal industria del país, aunque de momento, las Maldivas no parecen ser un objetivo estratégico para ninguno de los diversos grupos islamistas. El factor clave, que podría agravar la situación, sería el regreso al país de los ciudadanos maldivos que ahora combaten en Oriente Medio.

GARETH PRICE,
Investigador principal asociado del Programa Asia de Chatham House



UE: ¿SANCIONAR O NO SANCIONAR? ESA ES LA CUESTIÓN

PÍLDORA DE OPINIÓN

UNIÓN EUROPEA

En julio de 2016, un mes después de que Reino Unido decidiese abandonar el club comunitario, la Comisión Europea preparaba sanciones para Portugal y España por incumplir, con un 5,1% y un 4,4% respectivamente, el máximo del 3% de déficit público que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (diseñado en 1997 y modificado en 2015). La imposición de la multa, que se había empezado a gestar en mayo, se fue retrasando varias veces debido a la cercanía del referéndum británico para no abrir otro frente de conflicto en el sur de Europa y el *standby* hasta la aprobación de los presupuestos en ambos países.

La mayor parte de la Comisión -con Jeroen Dijsselbloem a la cabeza (ministro de Finanzas de los Países Bajos- era partidaria de activar el mecanismo sancionador, y encontraba apoyos en Alemania y los demás países acreedores, arguyendo que “las reglas son las reglas”. En cambio, Francia (partidaria de flexibilizar las reglas en cuanto a ajuste fiscal y susceptible de ser sancionada) e Italia (con problemas en el sistema bancario que podrían acabar en rescate) se posicionaban en contra. España y Portugal argumentaron que ya habían pasado muchas penurias en los años más duros de la crisis y la sanción podía tener efectos negativos tanto sobre la economía, cuando parecía que empezaba a recuperarse, como sobre la situación política tornándola más inestable. Portugal insinuó que la multa podría tener carácter político por haber rectificado las medidas de ajuste fiscal implementadas mientras se encontraba bajo el mecanismo de rescate y el *Bloco de Esquerda*, partido que sostiene el gobierno socialista junto con los comunistas, amenazaba con un referéndum de pertenencia a la UE si se hacía efectiva la sanción. España, por su parte, argumentó que una sanción podría complicarle aún más a Mariano Rajoy la formación de gobierno; el problema fue que la bajada de impuestos previa a las elecciones de diciembre de 2015 no sentó bien en Bruselas, que viene pasando por alto las continuas promesas incumplidas del ejecutivo español.

Finalmente, fue el ministro de Finanzas germano, llamada telefónica mediante, quien persuadió a los comisarios europeos que no aplicaran las sanciones. Alemania, con los problemas derivados de la gestión del *Brexit* y con la legitimidad del proyecto europeo puesta en entredicho por parte de los ciudadanos, entendió que era mejor idea emplear la zanahoria en lugar del palo. Sobre todo teniendo en cuenta que las sanciones recaerían en unos ciudadanos

muy hastiados pero que no han generado ningún partido xenófobo ni anti-UE, a pesar de la crisis económica. Aun así, las sanciones no están completamente fuera de la mesa; Bruselas exige a España un ajuste de entre 5 y 7 mil millones (0,5% del PIB) para 2017 (y se lo exigirá para 2018) y unos nuevos presupuestos que atajen la reducción del déficit; también se mantiene vigilante sobre la evolución del déficit en Portugal al que pidieron, presupuesto en mano, más aclaraciones de cómo reconducirán un posible desvío, aunque finalmente lo aceptaron sin más modificaciones.

Haber evitado las sanciones en 2016 no garantiza que no se puedan imponer más adelante; queda por ver si llegado el momento, la UE cumplirá con sus propias normas (“las reglas son las reglas”) o prevalecerá la flexibilidad y las realidades nacionales en la decisión que tome el Consejo.

¿Cumplirá la UE con sus propias normas o prevalecerá la flexibilidad y las realidades nacionales?

HÉCTOR SÁNCHEZ MARGALEF
Investigador, CIDOB



EL DOBLE RETO DE LA SEGURIDAD EN ÁFRICA

PÍLDORA DE OPINIÓN SEGURIDAD

El poder global está cambiando y aunque el proceso llevará su tiempo, probablemente nos acercamos al final de más de dos siglos de hegemonía occidental debido al desplazamiento del poder hacia Asia. En su conjunto, el panorama actual es de un mundo mucho más fragmentado, en el que se disuelve la confianza y el apoyo en los pretéritos tratados, acuerdos e instituciones. Muy probablemente asistiremos a una pugna más intensa por el poder global, que tensará el sistema internacional y aumentará la probabilidad de conflictos por el estatus entre potencias ascendentes y en declive. Esta competencia coincidirá en el tiempo –y se entrecrujará– con la violencia sectaria y el terrorismo transnacional.

A pesar de que África sigue siendo una región marginal económicamente, ya que solo representa el 3% de la economía global, su proximidad a Europa la convierte en un actor de seguridad importante, como evidencian los acontecimientos relacionados con la emigración y, en menor medida, con el terrorismo. Progresivamente, y debido al despegue de Asia, África Subsahariana acoge a mayores porciones de la pobreza global extrema.

El reto más importante sobre seguridad en África Subsahariana proviene de la incapacidad generalizada de los gobiernos de proveer de servicios, administrar con eficacia los territorios extensos o remotos y proporcionar seguridad a sus ciudadanos.

En general, la falta de capacidad de gobernanza solo puede corregirse con el incremento de las rentas que se derivan del desarrollo económico, que al aumentar los ingresos tributarios, amplifican la capacidad de los gobiernos para proteger las fronteras y reprimir la discrepancia y el descontento. En líneas generales, África está creciendo ahora más rápido que durante los años setenta y ochenta, pero el mundo ha entrado en una fase de crecimiento económico aletargado y de duración imprecisa. En 2007, unas 60 economías estaban creciendo alrededor de un 7% anual. Una década más tarde, son solo ocho o nueve los países del mundo que alcanzan ese ritmo de crecimiento. Se espera que, de promedio, los 54 países de África crezcan alrededor de un 4% en 2030, bastante por encima de la media global, pero aún no tan rápido como para que podamos pensar en reducciones de la pobreza similares a las de Asia.

Algo distinto es el reto planteado en el Norte de África, donde la carencia no reside tanto en la capacidad de la

gobernanza como en la poca inclusión de los gobernados. Aumentar los niveles de inclusión es también un propósito exasperante, ya que requiere de una acomodación difícil de la religión y el estado, así como la edificación de economías y sociedades más flexibles y más abiertas: esta es una región configurada en base a sistemas políticos y económicos cerrados..

Observando las tendencias de la democracia en el mundo, podría pensarse que el declive relativo de Occidente se traducirá también en un menor ímpetu de la democratización en África, ahora que el liderazgo de las democracias liberales más consolidadas pierde atractivo (e influencia) frente a los modelos exitosos de desarrollo autoritario, como China. Lo cierto es que la democratización en África es un proceso impulsado de

abajo hacia arriba, gracias a las mejoras en educación, renta y calidad de la gobernanza. Es por ello probable que la democracia siga su curso a paso firme, a pesar de las actuales amenazas de una regresión democrática.

Puede que la respuesta más importante al doble reto de mejorar la capacidad de gobernanza y la inclusión de los gobernados resida en una mayor regionalización, que desencalle el comercio y el crecimiento. En este contexto, el lanzamiento en junio de 2015 del Acuerdo Tripartito de Libre Comercio, que incluía a 26 economías del Mercado Común de África Oriental y Austral (en inglés, COMESA), la Comunidad del África Oriental (en inglés, EAC) y la Comunidad de Desarrollo del África Austral (en inglés, SADC), seguido por el comienzo oficial de las negociaciones para establecer un Área Continental de Libre Comercio (en inglés, CFTA)] en 2017, suponen hitos fundamentales para el futuro del continente, que aspira a ser más integrado y dinámico.

El reto más importante sobre seguridad en África viene de la incapacidad de los gobiernos administrar con eficacia

JAKKIE CILLIERS,
Director de Futuros Africanos e Innovación
en el Institute for Security Studies (ISS) de Pretoria



EL NARCOTRÁFICO: BUSCANDO SOLUCIONES LOCALES A DESAFÍOS GLOBALES

PÍLDORA DE OPINIÓN NARCOTRÁFICO

El mercado de drogas ilegales se ha estabilizado. En términos globales, la demanda permanece en niveles similares, mientras que la oferta continúa, garantizada por organizaciones criminales que se adaptan a las respuestas del Estado -cuando las hay. En la superficie, la eterna disputa entre las fuerzas del orden y los traficantes continúa, como prueban las imágenes diarias de capturas, incautaciones y enfrentamientos. En el fondo, el asunto es mucho más complejo, con instituciones y funcionarios al servicio de intereses criminales, y poblaciones cuyos ingresos dependen de esta economía ilegal.

Es cierto, la diferencia entre países consumidores y productores se han vuelto más difusa. Cuando el Estado logra interrumpir una ruta, los narcotraficantes abren o recuperan otra. El tema es que, si bien las organizaciones criminales son mucho más fragmentadas y pasajeras, los contextos en los que operan siguen brindando las condiciones propicias para su reproducción. La violencia, su manifestación más preocupante, suele concentrarse en lugares donde las instituciones son débiles y el tejido social se encuentra fragmentado. El narcotráfico ha conseguido conectar estas zonas aisladas con la economía global y, en no pocos casos, influir en cómo funciona el Estado.

Pero si se observa de cerca, lo que se ha presentado como una lucha global es un problema focalizado y local. Aunque Naciones Unidas estima que 250 millones de personas consumieron por lo menos una droga en 2014, en realidad son 29 millones los que desarrollan usos problemáticos. En un único país, Afganistán, se concentran dos tercios de los cultivos de adormidera. Además, la demanda global de cocaína podría ser abastecida por menos de un tercio de todo el territorio de un país como Colombia. Y en todo caso, la sustancia más consumida es la marihuana, que es cada vez más abastecida por producción local.

Entonces, si este es el tamaño del problema, ¿por qué sus consecuencias han llegado a ser tan graves? ¿Por qué no hemos encontrado una mejor solución? ¿Cuáles son las razones para que sigamos con esta eterna disputa? Apunto cuatro razones, a continuación.

En primer lugar, lo que en un principio era un problema de salud pública y desarrollo, fue catalogado como un desafío a la seguridad, con la criminalización masiva de los usuarios y delincuentes menores. Segundo: se decidió prohibir el uso de sustancias psicoactivas cuando el objetivo más realista era su regulación; si el Estado no asume esta tarea, los crimina-

les saben cómo hacerlo. Tercero, la respuesta del Estado ha sido dura con los débiles y débil con los duros. Se ha avanzado poco en hostigar las finanzas de quienes se lucran con este negocio. Cuarto, el punto de partida fue que el narcotráfico era la causa y no el resultado de la debilidad institucional y el débil apego a la legalidad.

En el caso de Colombia, la estrategia antinarcóticos ha gravitado entre el garrote y la zanahoria -más bien lo primero que lo segundo-. Se han enfocado los resultados hacia la destrucción de cultivos, la desarticulación de organizaciones criminales y la detención de cargamentos. Si bien se han obtenido resultados tácticos golpeando las estructuras de los narcotraficantes, en el plano estratégico estos han sido menos positivos.

Los mercados criminales se reproducen y las deficiencias del Estado en los territorios permanecen. El país continúa siendo el primer productor de cocaína y las redes de distribución urbanas son un desafío para la seguridad. En la última década, en Colombia se produjeron más de un millón de capturas por delitos relacionados con las drogas, se fumigaron 1,5 millones de hectáreas y se

incautaron cientos de toneladas de estupefacientes. No obstante, las condiciones de vulnerabilidad y la débil presencia institucional en la periferia no han cambiado sustancialmente. En parte por el conflicto armado, pero también por la falta incentivos y voluntad.

Digámoslo claro: el problema de fondo no ha sido el narco, sino la falta de Estado. No un Estado que se defina y construya a partir de las amenazas, sino de la protección y bienestar de los ciudadanos. Esa es la lucha que hay que afrontar.

El problema de fondo no ha sido el narco, sino la falta de Estado

JUAN CARLOS GARZÓN,
Investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz y Global Fellow del Woodrow Wilson Center



¿ESTAMOS PREPARADOS PARA LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL?

PÍLDORA DE OPINIÓN

REVOLUCIÓN DIGITAL

El modelo de sociedad que tenemos hoy, todas sus normas, estructuras y patrones de productividad fueron modelados por –y son un resultado de– la Segunda Revolución Industrial. El marco que siguió a esta transformación disruptiva influyó en nuestro estilo de vida y estaba basado en unas estructuras formidables pero destinadas a volverse obsoletas, máquinas propulsadas por energías derivadas de combustibles fósiles, barreras a la producción (como costes marginales y recursos naturales limitados), y la forma exclusiva en que compartimos nuestros bienes y utilizamos los recursos como si fuesen ilimitados. La dinámica de la Segunda Revolución Industrial asignó la organización de las sociedades a las naciones-estado, que crearon las disponibilidades legales, físicas y emocionales para desarrollar la comunicación, la energía y el transporte desde los mercados locales a los nacionales.

Desde entonces, una de las fuerzas impulsoras de nuestra historia ha sido el esfuerzo por controlar los recursos limitados de la energía no renovable. La quema masiva de combustibles fósiles ha conllevado el crecimiento económico y demográfico, pero, como ahora sabemos, a un coste muy alto para el medio ambiente. Los eventos climáticos que antes tenían lugar al ritmo de uno cada mil años se están convirtiendo en algo normal; está cambiando el ciclo hidrológico y eso constituye un desafío a la vida humana en las próximas décadas. No tenemos la certeza de que este proceso masivo sea efectivamente revertido, pero deberíamos hacer todo lo posible para mitigar nuestro impacto sobre el clima. Necesitamos una nueva visión económica y un nuevo ideario ético si queremos sobrevivir.

En este sentido, el cambio a la Tercera Revolución Industrial será un disruptor enorme: la revolución digital y en la comunicación, la energía, el transporte e internet de las cosas nos permitirán, por primera vez y como sociedad global e interconectada, crear un cerebro global externo capaz de sentir, procesar, reflexionar y actuar a una escala global para hacer frente efectivamente a los retos globales, transnacionales, que nos depara el futuro.

La paradoja es que este incremento en empatía irá paralelo a un incremento proporcional en entropía. Las mismas tecnologías que nos permitirán ser más empáticos e interactuar nos desconectarán de nuestros vecinos más cercanos. La conciencia espacial y los patrones de la comunicación cambiarán espectacularmente, y esperemos que ello nos lleve a una biosfera de mayor conciencia y empatía con la raza humana. A la Tercera Revolución Industrial no le gustan las fronteras. Los estados-nación no desaparecerán, pero es evidente que la digitalización desafiará las estructuras físicas centralizadas; la emergencia de una red de regiones liberaría todo el potencial

de un agregado de intereses interconectados y espacialmente contiguos, mientras que el rol de los estados-nación será proporcionar códigos de regulación y normas.

Se supone que la revolución digital ha de ser distribuida, colaborativa, abierta y transparente. Así, el principal desafío será cómo desconectar a nuestras sociedades de las infraestructuras de la Segunda Revolución Industrial y reconectarlas a las de la Tercera. Los obstáculos serán, de lejos, más políticos que tecnológicos. Surgirán unos cuantos filtros decisivos destinados a modular la velocidad y el alcance de la revolución digital, que plantearán una serie de cuestiones: ¿Cómo protegeremos la neutralidad de la Red? ¿Cómo garantizaremos que los gobiernos no la utilicen para conseguir sus objetivos políticos? ¿Cómo garantizaremos que las empresas no la monopolicen para sus objetivos comerciales? ¿Cómo garantizaremos la privacidad? ¿Cómo garantizaremos la seguridad de los datos para prevenir el delito cibernético y el ciberterrorismo cuando todo el mundo esté conectado? Esta será la tarea política fundamental de las próximas tres generaciones.

Necesitamos una nueva visión económica y un nuevo ideario ético si queremos sobrevivir

Los millennials, los miembros de la generación que ha llegado a la edad adulta después del año 2000, serán actores importantes en este nuevo ideario ético. Ellos tienen concepciones diferentes de la libertad, el poder y la comunidad; se consideran a sí mismos como parte de una red interconectada globalmente, y tendrán un espíritu cooperativo mucho más fuerte. Se sienten emocionalmente menos ligados a unos estados-nación y pueden gestionar más fácilmente una identidad multifacética capaz de saltar de lo local a lo global. Las acciones individuales tendrán un impacto en el resto del planeta; necesitamos hacer una transición rápida al nuevo paradigma y aprovechar todo su potencial. Muchos se preguntan si ya es demasiado tarde. La respuesta es que no hay alternativa.

mente una identidad multifacética capaz de saltar de lo local a lo global. Las acciones individuales tendrán un impacto en el resto del planeta; necesitamos hacer una transición rápida al nuevo paradigma y aprovechar todo su potencial. Muchos se preguntan si ya es demasiado tarde. La respuesta es que no hay alternativa.

JEREMY RIFKIN

Presidente de la Foundation on Economic Trends



2016 fue un año crucial para el Tribunal Penal Internacional (TPI). Fue el año en que los países africanos empezaron a retirarse de esa corte en detrimento de la justicia internacional. Tres países africanos (Sudáfrica, Gambia y Burundi) pusieron en marcha el proceso para abandonar el Tribunal, y se cree que otros (entre ellos Uganda, Namibia y Kenya) se están moviendo en esta dirección. Esto es la culminación de un proceso de confrontación entre el Tribunal y los países africanos que empezó formalmente en 2009 cuando la Unión Africana (UA) empezó a promover que los países africanos no cooperasen con el Tribunal.

Esa estrategia respondió a que el papel del TPI en el continente africano se ha vuelto muy polémico, y acumula partidarios y detractores. Sin embargo, esta división entre los estados africanos no se dio cuando se creó el Tribunal. En aquel momento, muchos de esos países apoyaron con entusiasmo al TPI y en el Plan Estratégico de la UA para el período 2004-2007 uno de los cinco compromisos adoptados fue el de garantizar que todos los países ratificasen el Estatuto de Roma. El sentimiento anti-TPI en la UA ha ido en aumento, y se inició con la acusación del Tribunal contra el presidente del Sudán, y con la causa contra el presidente y el vicepresidente de Kenya. El enfrentamiento entre los países africanos y el TPI llegó a un punto crítico cuando el presidente al-Bashir de Sudán fue a Sudáfrica para asistir a la cumbre de la UA en 2015. Esto puso a prueba la determinación del país de colaborar con la justicia penal internacional: le detuvo, como era su obligación como miembro del Tribunal, pero también endureció la postura de la UA respecto al TPI.

El papel del TPI en el continente africano se ha vuelto muy polémico

Algunos de los que critican al Tribunal y el papel que desempeña lo hacen, al menos en parte, porque no creen en la justicia internacional. Creen que ese concepto en este contexto es inapropiada. Otros creen que son los estados los que han de tener discrecionalidad para decidir si han de acusar a alguien y cuándo hacerlo. Además, el hecho de que el TPI solo tenga causas africanas sobre la mesa proporciona munición a los que se oponen a su existencia. Para algunos, el hecho de que solamente hayan sido encausados estados africanos es un indicio de su falta de imparcialidad. Mahmood Mamdani ha argumentado que, a pesar de su nombre, el TPI se está convirtiendo rápidamente en un tribunal occidental que pretende juzgar (solo) crímenes africanos contra la humanidad. Como ha dicho Nicole Fritz, “la retórica de la repulsa según la cual el TPI es un instrumento del neocolonialismo o del neoimperialismo, es decir, un instrumento antiafricano, puede dañar a la institución hasta el punto de que sea finalmente abandonada.” Aunque la UA sostiene que el

proceso de dar competencia penal internacional al Tribunal Africano implica un compromiso con la responsabilidad, el hecho de que el Protocolo excluya el procesamiento de jefes de Estado niega en la práctica este compromiso. África ha fomentado una vez más la impunidad y ha menoscado la posibilidad de mejorar la promoción y la protección de los derechos humanos, y el Tribunal está en una encrucijada; necesita encontrar formas de mejorar su

papel y su reputación. Si no lo hace, lo abandonarán más países, sus víctimas sufrirán incluso más, y la impunidad será un problema aún mayor en el continente de lo que lo es actualmente.

JEREMY SARKIN,

Abogado en Sudáfrica y en Nueva York; profesor de Derecho en la Universidad de Sudáfrica, y profesor visitante de Derecho y miembro del CEDIS

NEGOCIAR CON "TERRORISTAS": LECCIONES DE COLOMBIA

PÍLDORA DE OPINIÓN

CONFLICTO

De Siria a Sudán vemos a diario cómo conflictos armados se perpetúan bajo una retórica política envenenada con discursos divisivos y populistas. Un elemento clave en esta retórica de guerra es la tendencia a calificar a ciertos actores involucrados como "terroristas" o "extremistas", descalificándolos automáticamente como interlocutores legítimos para negociar la paz.

Como justificación se invocan argumentos morales en contra de dialogar con estos actores, en los que se alega que cualquier contacto con ellos pueda legitimizar su existencia y ciertas modalidades de violencia. Pero más a menudo el discurso antiterrorista busca, simplemente, apaciguar las ansias del público, proyectando una posición de fuerza al resistir la idea de dialogar con actores que no siguen "las reglas del juego".

No obstante, en Colombia vimos cómo en 2016, a pesar de una coyuntura política altamente divisiva, se logró poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado con las FARC-EP a través de un proceso de diálogo y negociación reconocido internacionalmente como ejemplar.

La apuesta del presidente Santos por abrir un espacio de diálogo con un grupo considerado por una gran parte de la sociedad colombiana –y de la comunidad internacional– como "narcoterrorista" implicó un riesgo político que no debe ser subestimado. Desafiando el discurso inflamatorio liderado por el expresidente Uribe, el gobierno colombiano optó por reconocer que a un conflicto armado solo se le puede dar fin mediante un proceso que aborde directamente las causas subyacentes del conflicto, y no a través de una improbable derrota militar absoluta. Finalmente, Santos logró el acuerdo con las FARC-EP pero perdió el referéndum por 54.000 votos de diferencia.

El rechazo de las FARC-EP como actor legítimo para negociar la paz no se ha limitado al ámbito doméstico: a nivel internacional, las FARC-EP son formalmente consideradas como grupo terrorista en las "listas negras" de países y entidades como EEUU y, hasta septiembre de 2016, por la Unión Europea (UE).

Preguntado por las razones por las que Cuba y Noruega –los países designados garantes del proceso– jugaron papeles clave en el proceso de paz con las FARC-EP, el Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano, Sergio Jaramillo, no duda en señalar un aspecto tan crítico como poco conocido. Tanto Cuba como Noruega (país europeo no miembro de la UE) no están sujetos a las restricciones que conllevan la inclusión de las FARC-EP en las "listas negras", lo cual permitió que miembros de dicha organización pudiesen viajar a esos

países para negociar la paz cara a cara con representantes del gobierno colombiano.

El rol poco conocido de países como Cuba y Noruega en el caso de Colombia, Qatar como anfitrión de la "oficina política" de los talibanes afganos u Omán como facilitador de las negociaciones entre la Administración de Obama y el gobierno iraní, es esencial para estas aperturas de espacios de diálogo con grupos o países que algunos descalifican como "terroristas". Sin países o entidades terceras que contrarrestan el status quo internacional y facilitan la creación de espacios de encuentro con actores clave normalmente excluidos de procesos de diálogo, se perdería la oportunidad de intentar asentar las bases para llegar a acuerdos de alto nivel en la política internacional.

El comienzo de la presidencia de Donald Trump en EEUU ofrece un preocupante contexto para este tipo de espacios de negociación de la paz. La populista retórica del presidente y la amenaza de designar a la organización de los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista auguran un retroceso preocupante que podría incluso incluir represalias políticas y legales contra estados u organizaciones que participen en este tipo de iniciativas. El proceso de paz colombiano debería servir como ejemplo de lo que es posible si se

deja una puerta abierta a iniciativas y espacios para resolver conflictos a través del diálogo, por muy controvertidos que sean sus interlocutores.

Colombia debería servir como ejemplo de lo posible si se deja una puerta abierta a iniciativas para resolver conflictos a través del diálogo



JUAN GARRIGUES,
Investigador sénior asociado, CIDOB

SEBASTIAN WEINMANN,
Asistente de programas, Dialogue Advisory Group

MUJERES Y CONFLICTO EN COLOMBIA: ALZANDO LA VOZ CONTRA EL SILENCIO Y LA IMPUNIDAD

PÍLDORA DE OPINIÓN

MUJER

Las víctimas aprendimos en Colombia que se mata más con las palabras o con la ausencia de ellas, que con las mismas balas. Sobre todo las víctimas mujeres. Durante décadas, podría asegurar que durante siglos, la violencia que han sufrido millones de niñas y mujeres en todas las guerras que ha vivido el país estuvo oculta en las casas; escondida en las celdas de los perpetradores y en las calles donde habitan quienes se cobijan con la impunidad; se quedó enredada en el silencio de los diarios y los noticieros; en la negligencia e inoperancia de los estrados judiciales.

Esa violencia se enquistó en la sociedad, que con su mutismo permitió que los grupos armados, fueran guerrilleros, paramilitares o agentes del Estado, convirtieran los cuerpos de las mujeres en un arma de guerra a través de la violencia sexual, la esclavitud o la mutilación.

Los organismos internacionales siempre nos han hablado de los horrores que padecían las mujeres en Congo, Burundi o Rwanda, pero desconocían por completo lo que pasaba en Colombia. En 2011 se logró establecer, en un primer informe promovido por OXFAM, que tan solo entre 2001 y 2009 cerca de medio millón de mujeres habían afrontado la violencia sexual en el marco del conflicto armado en el país. Pero el subregistro podría triplicar la cifra.

A medida que la guerra iba destrozando al país y a su tejido social, las más afectadas, como en toda confrontación, eran las mujeres. Fuimos las mujeres. La doble y a veces triple condición social llevaron a otra condición más "evolucionada" de

violencia desmedida. Ser mujer, negra, indígena o campesina y además pobre, puso la vulnerabilidad y los ojos de los victimarios sobre ellas.

Efectivamente fueron ellas quienes enterraron a sus muertos (hijos, padres, esposos y hermanos), fueron desplazadas de sus tierras, afrontaron hasta cuatro violaciones en sus recorridos y aun así lo dieron todo para sacar a sus familias adelante. Ese fue el mayor argumento para que el proceso de paz acordado en La Habana, entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno de Colombia tuviera un enfoque integral de género.

La guerra y el modelo patriarcal de América Latina nos llevaron a ver la agresión como algo natural, por nuestra simple condición de mujeres

En Colombia, cada día 245 mujeres sufren algún tipo de violencia y el 86% de ellas no lo denuncia por temor, vergüenza o falta de confianza en la justicia. La guerra y el modelo patriarcal que subsiste en América Latina nos llevaron a ver la agresión como algo natural, por nuestra simple condición de mujeres.

La buena noticia en medio de tanta desolación es que ahora por fin se habla de la violencia que hemos padecido millones de colombianas. Algunas decidimos hablar y hacer de nuestro profundo dolor una esperanza, un camino que nos lleve a la no repetición. Un grito de auxilio, porque pese al acuerdo de paz, nos falta mucho para sacar a las mujeres de la guerra. No solo la de las balas. La guerra del silencio y la impunidad sigue más viva que nunca. Así que el llamado no puede ser otro: No Es Hora De Callar.



JINETH BEDOYA LIMA

Subeditora de *El tiempo*, Colombia

La “Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible”, más conocida como Habitat III, concluyó sus sesiones en Quito en octubre de 2016 aprobando un documento de cerca de cuarenta páginas y doscientos epígrafes, que quiere ser la nueva agenda urbana para los próximos veinte años. Los precedentes de Vancouver en 1976 y de Estambul en 1996, nos indican que tal denominación es más pomposa y formal que efectiva y real. A pesar de ello, en Quito se demostró la creciente significación de las ciudades, que en pleno proceso de globalización económica, cultural y social, muestran que, a pesar de que la era digital ha hecho el mundo más pequeño y aparentemente más similar, el lugar sigue importando. El sitio en el que uno vive, trabaja y se alimenta sigue siendo muy significativo. La gente se mueve más que nunca, cualquier información llega a todas partes, y se generalizan pautas y productos de consumo cultural, pero no es lo mismo vivir en un sitio que en otro.

Las ciudades son pues espacios en los que se combinan distintas oportunidades y riesgos vitales. Por un lado, son lugares privilegiados para vivir, ya que ofrecen todo tipo de servicios y amplían el abanico de relaciones y oportunidades, pero al mismo tiempo acumulan conflictos, riesgos y tensiones. No es casualidad que las ciudades hayan sido desde hace siglos lugares destacados por su capacidad de convertirse en espacios de vecindad entre todo tipo de opciones vitales.

Esa cualidad histórica de los entornos urbanos de constituirse en refugio de prófugos, discrepantes y rebeldes, está hoy puesta en cuestión por dinámicas económicas y por opciones políticas que tratan de reducir o evitar tal trayectoria. Lo vemos en la crisis de los refugiados, también en el tema de la diversidad o en el miedo que produce a algunas élites que las ciudades, por su propia naturaleza, sean lugares en los que la calidad democrática se mide por la capacidad de contener conflicto y discrepancia. No hay una sola mención al término democracia en la declaración final de Quito, ni tampoco se logró la incorporación del reconocimiento de los colectivos LGTBI, en esa lógica de vetos cruzados típica de las declaraciones internacionales tan amplias como la congregada en la conferencia. Pero, sin duda, lo que generó más preocupación entre algunas autoridades locales, académicos y activistas urbanos es la creciente capacidad de los fondos de inversión internacional de violentar las dinámicas urbanas, la construcción de una ciudad para todos. La lógica agresiva del capitalismo financiero y especulativo, busca en la compra de suelo y de complejos inmobiliarios (ocupados o no), las bases materiales sobre las que apuntalar

productos y derivados financieros. Y frente a eso y la inacción de las autoridades estatales, las capacidades de los gobiernos locales no son suficientes.

Otro punto negativo a destacar de la declaración final, es la ausencia de perspectiva crítica sobre la intrusión tecnológica en el funcionamiento de las ciudades. La dinámica de las “Smart cities” se incorpora como una oportunidad, sin advertencia alguna de lo que implica desde el punto de vista de pérdida de soberanía y de dependencia tecnológica. Y es aún más grave la adhesión a lo que serían las ventajas del “big data” para gestionar las ciudades, sin que tampoco se advierta en el texto prevención alguna sobre el control de esos datos y de la necesidad de democratizar y politizar (quién gana y quién pierde) el uso de información que los ciudadanos y las ciudades que la alberga producen sin cesar. Por mucho que celebremos la esforzada incorporación del concepto “derecho a la ciudad” en la declaración, tras la presión de la coalición internacional que lleva años defendiendo esa expresión como síntesis de ciudades justas, equitativas, democráticas y sostenibles, lo cierto es que el balance final resulta ambivalente. Las ciudades son cada vez más importantes en la vida de la humanidad, pero esa misma relevancia acumula riesgos y amenazas que solo la confluencia de gobiernos locales comprometidos y de ciudadanía movilizadas pueden tratar de encarar y reducir.

Lo que generó más preocupación entre autoridades locales, académicos y activistas urbanos es la capacidad de los fondos de inversión internacional de violentar las dinámicas urbanas

JOAN SUBIRATS

Investigador sénior asociado de CIDOB y director del Programa de Doctorado del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universitat Autònoma de Barcelona

ABORDAR CONSTRUCTIVAMENTE LOS CONFLICTOS ACTUALES

El reto principal a la paz global en la actualidad es hacer de los Estados Unidos de América una nación con buenas relaciones con la comunidad internacional. Además, muchos de los conflictos más graves están bloqueados y requieren enfoques nuevos, más constructivos. Brevemente, plantearemos algunas colisiones internacionales, primero desde un enfoque positivo y, seguidamente, con sus alternativas negativo-destructivas.

En relación a la crisis financiera, un enfoque positivo alentaría las cajas de ahorro locales y la lucha contra la especulación tributaria. También un control más democrático del Banco Central y de los bancos estatales y privados, y una cesta de divisas variada. Por el contrario, el enfoque negativo priorizaría el crecimiento financiero sobre el real y a la moneda sobre el valor; mantendría la globalización regida por bancos centrales, con la hegemonía del dólar.

En cuanto al terrorismo, en positivo, trataríamos de entender las causas y que conducen a los atentados e investigaríamos quiénes son sus instigadores; en negativo, seguimos afeerrados a las soluciones militares: ejecuciones extrajudiciales, uso de drones y la guerra encubierta.

Una solución positiva del conflicto entre EEUU-Israel y el mundo árabe sería adoptar la solución de dos estados, reconociendo a Palestina, y crear una Comunidad de Oriente Medio (COM) con Israel y sus cinco vecinos árabes. La visión opuesta mantendría la presión israelí en Washington a través de *lobbies* y podría alimentar el antisemitismo extremista en EEUU.

En Libia, una solución positiva vería la autodeterminación de los contendientes y la creación de una democracia federal. Lo contrario sería conservar la ilusión de un "Estado unitario", más bien una anarquía caótica. Una solución similar debería adoptarse en Siria, y en Irak, donde se suma el reto de satisfacer las demandas kurdas de autogobierno. La respuesta negativa sería retirarse del país sin reconstrucción, ni compensación.

La dinámica positiva con Irán reconocería el golpe de Estado de la CIA en 1953 y promovería una Zona Libre de Armas Nucleares. Un enfoque negativo contempla una intervención

PÍLDORA DE OPINIÓN

PAZ Y CONFLICTOS

militar o un veto indefinido el programa nuclear sin otras acciones paralelas. Naturalmente, el apetito de las grandes potencias por el petróleo iraní debería quedar fuera de la ecuación.

En Pakistán, debería concederse la autodeterminación a Cachemira, y la de los pashtunes, dejando atrás la ficción de una frontera trazada por la Línea Durand. Lo opuesto sería construir una "barrera física" misma Línea Durand y mantener los drones y los asesinatos extrajudiciales.

Una solución para Afganistán vería el surgimiento de una Comunidad de Asia Central, como marco de un Estado Federado de Autonomías Locales de nueva creación, cuya seguridad recaería en fuerzas de la ONU y de la Organización de los Países Islámicos (OIC). Debería seguir siendo un país no alineado y sin bases militares extranjeras. Lo negativo sería una retirada sin reconstrucción ni compensación, manteniendo indefinidamente las bases.

Asia Oriental requiere de mayor regionalización y de una Comunidad de Asia Oriental para el diálogo multilateral y permanente entre Japón, China y Corea. EEUU firmaría la paz con Corea del Norte y saldría de Okinawa. La península coreana devendría Zona Libre de Armas Nucleares. El enfoque negativo, el militarismo y el aislamiento: marginación de Corea del Norte, acorralamiento de China, relación clientelar con Japón, que subvertiría el Artículo 9 de su Constitución.

En África y América Latina debería avanzar la regionalización, tanto con la Unidad Africana como con la CELAC (la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe). El enfoque negativo contaría con la supervisión militar de EEUU (mediante la AFRICOM) y la microgestión de la CIA. Un hito positivo sería la normalización de las relaciones Estados Unidos-Cuba.

A nivel global, deberían cumplirse todas las convenciones de derechos humanos y garantizar la autodeterminación. Deberían fomentarse la Alianza de Civilizaciones y acercar a Naciones Unidas al rol de Parlamento Mundial. La visión opuesta promueve derechos civiles y políticos pero ignora todos los demás, y mantiene la paradoja del "universalismo occidental" y el excepcionalismo estadounidense.

El enfoque más negativo-destructivo es tristemente familiar, y cuenta con multitud de ejemplos. Pero el más positivo-constructivo también es amargo, ya que algunas soluciones podrían hacerse realidad con un simple bolígrafo. ¿Y si EEUU tratase de ganarse afectos con acciones más positivas?

JOHAN GALTUNG

matemático y sociólogo, fundador de la red TRASCEND y del Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Paz (SIPRI)



EL SÍNDROME SYKES-PICOT, O POR QUÉ EUROPA SIEMPRE LO EXPLICA TODO

PÍLDORA DE OPINIÓN

ORIENTE MEDIO

La Segunda Guerra Mundial y El-Alamein. La creación de Israel. Nasser y el panarabismo. Las guerras árabe-israelíes de 1956, 1967 y 1973. Las guerras de Yemen. La revolución iraní y la guerra entre Bagdad y Teherán. La guerra civil libanesa. Los Acuerdos de Camp David. La llegada de los petrodólares al Golfo. Las dos intifadas. La invasión de Kuwait. Madrid y Oslo. El asesinato de Sadat, de Rabin, de Hariri. La invasión de Irak. Tahrir, Taksim. Pero parece que todo esto no cuenta: lo que realmente importa para entender Oriente Medio hoy en día es el acuerdo de Sykes-Picot de 1916.

Se cumple ahora el centenario de la rúbrica de estos acuerdos secretos entre británicos y franceses firmados en plena Primera Guerra Mundial. Junto con los tratados de Sèvres –que nunca llegarían a entrar en vigor– y Lausana, las potencias europeas fijaban las bases de la organización territorial de Oriente Medio tras la caída del Imperio Otomano. Más allá de la creación de las zonas de control y las áreas de influencia de Francia y el Reino Unido, la tríada de acuerdos estableció las fronteras entre algunos de los estados de la región, como por ejemplo los lindes entre Siria e Irak. Además, establecieron la “administración internacional” para Palestina que, según algunas voces, se encuentra en el origen del conflicto entre árabes e israelíes.

Pese a que han pasado ya cien años y han tenido lugar innumerables acontecimientos que han alterado la realidad política, económica, cultural e incluso territorial de la región, se sigue recurriendo frecuentemente a Sykes-Picot para interpretar muchos de los sucesos en Oriente Medio. Curiosamente, descartamos alternativas más veraces para situarnos a nosotros mismos en el centro de cualquier explicación.

El acontecimiento que mejor lo explica todo es uno de los últimos grandes actos del colonialismo europeo en la región. Después de Europa, todo lo que pasó es secundario, prescindible.

El síndrome eurocéntrico de Sykes-Picot no es más que el corolario de un problema mayor: el historicismo occidental en el estudio de la región. Analistas y medios de comunicación sobredimensionan de forma recurrente la importancia de los factores históricos en sus análisis de la realidad contemporánea. El “peso de la historia” por encima de cualquier otra explicación. El conflicto entre Arabia Saudí e Irán se explica mejor recurriendo al cisma entre suníes y chiíes del siglo VI d.C. que prestando atención a la sensación de agravio iraní frente a un orden regional que percibe como injusto. Para entender el terrorismo de la organización Estado Islámico (EI) hay que fijarse en Balduino I y las Cruzadas. La Turquía actual de Erdogan no se comprende sin la época del imperio y los sultanes.

**Es hora de liberarse
ya de un síndrome
con cien años de
historia**

Los análisis segados por el historicismo suele encontrarse detrás de ciertas decisiones políticas de Europa –y también de EEUU– frente a la región, desligadas en exceso de la realidad. La historia puede y debe ayudarnos a entender mejor la realidad contemporánea, pero su uso

debe ser justo y proporcionado: no vale sobredimensionar casi arbitrariamente ciertos acontecimientos excluyendo otros según el peso que nosotros tuvimos en ellos. Es responsabilidad de todos los que se dedican al estudio de la complejidad de Oriente Medio no caer en un reduccionismo ramplón. Es hora de liberarse ya de un síndrome con cien años de historia. Dejemos morir a Sykes-Picot.



JORDI QUERO ARIAS

Investigador, CIDOB

La elección de Donald Trump como presidente de EEUU cambiará muchas cosas en la relación México-Estados Unidos; sin embargo, un aspecto que no variará es la vecindad y creciente integración entre ambos países. Por esta razón, los cambios en la era Trump serán más de forma que de fondo. Es por ello que, a pesar de los sobresaltos mediáticos y los enfrentamientos diplomáticos iniciales, las directrices generales de la relación bilateral conocerán pocas modificaciones en los próximos años.

Históricamente, y como resultado de la asimetría de poder con Estados Unidos, la máxima prioridad de la política exterior mexicana ha sido siempre contener, en lo posible, la hegemonía estadounidense, para maximizar su soberanía nacional; México ha entendido su soberanía como la defensa de la integridad territorial y la definición libre, autónoma e independiente, sin injerencia externa, de su forma de gobierno, de las políticas públicas domésticas, y de la política exterior con otros estados y actores internacionales.

Desde hace casi un siglo, la prioridad de la política estadounidense hacia México ha sido, y hasta hoy, mantener la estabilidad y seguridad en su frontera sur, mediante: el establecimiento de un régimen político relativamente estable en México; el desinterés de EEUU en desplazar territorialmente su frontera hacia el sur; y el creciente costo de una intervención directa en suelo mexicano.

Así pues, existe un espacio de intersección entre las prioridades de las políticas exteriores de ambos países: un Estado mexicano con márgenes de autonomía, pero que garantice la estabilidad interna y la seguridad de la frontera sur de Estados Unidos. Por lo tanto, cuanto mayor sea la capacidad de México para satisfacer ese objetivo, mayores serán sus márgenes de autonomía. Por contra, si no cumple, Estados Unidos le presionará para que modifique sus políticas y se reduzcan así esos niveles de autonomía.

En sus primeras semanas en la Casa Blanca Trump ha dejado claro que las líneas de su política exterior hacia México serán las mismas que promovió durante la campaña electoral: construcción de un muro —que supuestamente debe pagar México—, deportación masiva de inmigrantes indocumentados, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En los dos primeros casos, estas políticas no son novedosas ni generaron en el pasado enfrentamientos bilaterales de importancia: en los últimos lustros se han construido ya más de 1.000 km de muro en la frontera

común (un tercio de la linde compartida), y en cuanto a las deportaciones de mexicanos, fueron de más de 2,8 millones de personas durante los ocho años de presidencia de Obama. Finalmente, también la renegociación del TLCAN era previsible, dado que formaba parte de las propuestas electorales tanto de Trump como de Hillary Clinton.

Así pues, las presiones diplomáticas de Trump a México responden a la percepción de que México no está garantizando plenamente la seguridad y estabilidad en la frontera. El conflicto viene más por la forma como Trump ha manifestado sus posiciones (a través de twitter, entrevistas o conferencias de prensa, en vez de usar los canales diplomáticos), que por el fondo de las mismas.

Existe un espacio de intersección entre las prioridades de las políticas exteriores de ambos países: un Estado mexicano con márgenes de autonomía, pero que garantice la estabilidad interna y la seguridad de la frontera sur de EEUU

En suma, con la administración Trump se mantendrán las mismas prioridades de política exterior en los dos países, aunque se expresarán con mayor intensidad. La integración silenciosa seguirá institucionalizándose y habrá cooperación cuando exista consenso para ello. En paralelo, habrá colaboración discreta en aquellos asuntos polémicos —pero trascendentes para Estados Unidos— en la dimensión de la seguridad, como los tres arriba mencionados. Esto se acompañará de sobresaltos públicos y mediáticos (si el tono y la forma de las declaraciones de Trump no cambian). Pero eso no privará de una cooperación, aunque discreta, una vez que se ratifiquen los nombramientos burocráticos de la nueva Administración. Así, no se esperan cambios profundos

de paradigma: mayor será la autonomía soberana mexicana cuanto mayor sea la estabilidad y la seguridad fronteriza. Y aunque resulte difícil de imaginar en un contexto tenso como el actual, es posible que esto perdure durante años, sin importar el nombre, el color político o la personalidad del presidente de México o de Estados Unidos.

JORGE A. SCHIAVON,
Profesor investigador
del CIDE



ASIA CENTRAL: ¿ISLA DE ESTABILIDAD EN UN MAR TURBULENTO?

PÍLDORA DE OPINIÓN

ASIA CENTRAL

Los artículos sobre Asia Central a menudo subrayan la inseguridad e inestabilidad potencial de la región, no sin motivo. En diferente medida, los países -stans de Asia Central (cuyo nombre acaba en “-stán”) son autoritarios, en ellos abunda la corrupción y los derechos humanos son ignorados. Son países enemistados y que litigian por las fronteras y los recursos naturales. Sus poblaciones cada vez más jóvenes y con más desempleados, han de conformarse en su mayor parte con una sanidad, una educación y unos servicios sociales paupérrimos. Y se dice que la región es vulnerable a los ataques terroristas, al tiempo que ella misma es fuente de reclutamiento de combatientes de la organización Estado Islámico (EI). De todos modos, las cosas han estado bastante tranquilas en Asia Central, comparadas con la convulsión general: de Estados Unidos solo podemos especular qué camino tomará en política internacional; Rusia mantiene una actitud enérgica y agresiva mientras aumentan sus dificultades económicas; y la Unión Europea está debilitada desde dentro por los movimientos populistas nacionales y por la cuestión de la emigración.

Kirguistán sufrió en 2010 los efectos de un cambio de régimen, con la subsiguiente violencia étnica en el sur del país. Desde entonces, Asia Central ha vivido solo tumultos ocasionales: protestas contra las reformas laborales y agrícolas en Kazajistán, unos cuantos conflictos violentos en Tayikistán y algún que otro atentado terrorista en Kazajistán y en Kirguistán. Pero los colapsos gubernamentales, las protestas masivas y la violencia han brillado por su ausencia. Así, aunque la situación de las economías de Asia Central es caótica; los productores de gas y petróleo Kazajistán y Turkmenistán ven disminuir sus ingresos –y sus gobiernos ven como la obediencia de la población flaquea–; y Uzbekistán y especialmente Kirguistán y Tayikistán asisten al regreso de muchos de los nacionales que estaban trabajando en Rusia sin muchas perspectivas de encontrar trabajo en sus países, la situación parece mantenerse estable. Algunos habían esperado que la muerte de los dos veteranos líderes de los países más grandes de Asia Central, Kazajistán y Uzbekistán, provocaría inestabilidad, lo cierto es que Uzbekistán se mantuvo estable desde el fallecimiento de Islam Karimov, hasta la subida al poder en tres meses después de un nuevo “hombre fuerte” representante del aparato de seguridad y de los intereses económicos. Esto no garantiza, por supuesto, que Kazajistán viva una transición tranquila si el presidente Nursultán Nazarbayev no es capaz de gobernar, pero sí muestra que los regímenes de

Asia Central son muy resilientes respecto a las privaciones económicas causadas desde el exterior y respecto al desencanto de la población.

¿Qué significa esto para los vínculos de Europa con Asia Central? La UE sigue cooperando con los regímenes de Asia Central, desde la “seguridad blanda” al imperio de la ley, y desde el comercio a la educación; hasta ahora, con efectos como mucho modestos. Bruselas tendrá que tomar medidas para que esta cooperación tenga un impacto positivo en el desarrollo de la región, también en beneficio de la estabilidad de las fronteras de Europa. A corto plazo esto se podría concretar con la potenciación del comercio con las renqueantes economías de Asia Central, y a largo plazo, en el campo de la educación, abriendo las puertas a los estudiantes de Asia Central. Pero la atención está garantizada porque los regímenes autoritarios de la región son proclives a dar por sentada la ayuda de Europa ignorando al mismo tiempo las voces de la oposición y los derechos humanos. Preconizar la democracia y ayudar a la buena gobernanza no será fácil para Europa porque el concepto se debate en la propia UE. Es, sin embargo, por ello que la democracia de estar abierta a las voces divergentes y a la evolución de las prácticas políticas por lo que vale la pena animar a los países de

Asia Central que han de desarrollar sus propias democracias, pero siempre basadas en elecciones limpias y libres, en el imperio de la ley, la buena gobernanza y el respeto a los derechos humanos. Puede que Asia Central goce actualmente de una cierta tranquilidad, pero sigue siendo vulnerable a presiones internas y externas que sus regímenes autoritarios no podrán rehuir indefinidamente.

Los regímenes autoritarios de la región son proclives a dar por sentada la ayuda de Europa ignorando al mismo tiempo las voces de la oposición y los derechos humanos

JOS BOONSTRA,

Coordinador de la iniciativa EUCAM (www.eucentralasia.eu) en el Centre for European Security Studies, de Holanda



“SMELLS LIKE
CITY SPIRIT”

PÍLDORA DE OPINIÓN

CIUDADES

El 2016 fue un año de ciudades. Cuarenta años después de la primera conferencia, celebrada en Vancouver, Quito albergó la 3ª conferencia de ONU-Habitat sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Por primera vez esta convención tuvo lugar en un momento en el que la población mundial ya habita mayoritariamente en ciudades. Estamos inmersos en un proceso de urbanización imparable, que evoluciona paralelamente al son de la globalización y el cambio tecnológico. El resultado de la conferencia fue el acuerdo histórico materializado en forma de la primera Agenda Global Urbana, circunscrita en el marco de la Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Más allá de discutir sobre el contenido del manifiesto, una oda políticamente correcta sobre la ciudades, el desarrollo del evento estuvo marcado por dos grandes cambios de paradigma. En primer lugar, reflejó un cambio generacional; los asistentes eran jóvenes e idealistas. Y es que los *millennials* reflejan un espíritu urbano regenerado. Son urbanitas y cosmopolitas, y ven el mundo con ojos renovados. Rechazan la visión derrotista hacia las ciudades y la vida urbana que caracterizó las dos conferencias anteriores, abrumadas por la magnitud de la tragedia. Derrochan optimismo, pero lejos de la ingenuidad; son conscientes de los retos titánicos globales del cambio climático, la pobreza y la desigualdad, el terrorismo y la resurgencia de los populismos, entre otros. Pero en lugar de afrontarlos con miedo, ven en ellos la oportunidad para cambiar. Y ambicionan las ciudades como la gran herramienta de transformación de su

Las ciudades fusionan lo local y lo global en espacios que agrupan intereses compartidos y trascienden la jerarquía política

generación. Las ciudades pasan de ser un problema a una solución. Las ciudades se han convertido en protagonistas del crecimiento económico sostenible, el desarrollo y la prosperidad. Abrazan ecosistemas abiertos de innovación y concentran el consumo y la inversión a lo largo y ancho del globo. Este cambio de enfoque conlleva profundas implicaciones en la gestión de espacios urbanos en materias de energía, gobernanza, seguridad alimentaria y progreso humano. A pesar del efecto positivizador del cambio, una mala planificación y gestión urbana pueden revertir este proceso y generar desorden económico, congestión, contaminación y estrés civil.

El segundo cambio de paradigma se enmarca en que se contrarresta el peligro de la excesiva centralización de la gestión urbana; es la era del empoderamiento ciudadano. Este cambio de liderazgo está en sintonía con la energía transformadora del cambio generacional. La activación de los ciudadanos es una respuesta a la crisis política de una democracia cansada por las falsas promesas, la corrupción y la falacia de la meritocracia. Las ciudades tienen el atractivo de fusionar lo local y lo global en espacios tangibles que agrupan intereses compartidos y trascienden la jerarquía política. El *ethos* de este cambio integra la ética y la economía, lo que hasta ahora era un *oxímoron*. Ensalza la horizontalidad, el intercambio, la conciencia medioambiental

y el espíritu emprendedor como factores que coexisten y se retroalimentan en el proceso de desarrollo urbano. Los huertos urbanos, los *fab labs*, las nuevas economías colaborativas y circulares, las cooperativas de crédito, el vehículo eléctrico, la "bicificación", la conectividad ubicua, la inteligencia artificial y la robotización tienen lugar en espacios urbanos de gran densidad creativa. La experimentación cruzada es la gran señal de identidad del post-capitalismo, y parece que las ciudades son su laboratorio vivo. Veremos por dónde acaban las prácticas. Pero en cualquier caso, como diría el filósofo Vaclav Havel, "la esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo va a salir bien, sino la seguridad de que algo tiene sentido, sin importar su desenlace".

JOSEP MARIA COLL

Investigador sénior asociado, CIDOB



HACIA UN DESENLACE INCÓMODO EN SIRIA: AL-ASSAD AL FRENTE DE UN PAÍS ARRASADO

PÍLDORA DE OPINIÓN

SIRIA

Tras casi seis años de conflicto brutal, el final del 2016 podría muy bien representar un importante punto de inflexión en la guerra civil siria. Si bien falta mucho para que se pueda hablar realmente de paz, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y el avance del ejército sirio en las áreas de Alepo controladas por los rebeldes, hacen plausible que Bashar al-Assad no solo logre sobrevivir al levantamiento en su contra –frustrando las aspiraciones occidentales y de la oposición de una transición hacia un nuevo orden–, sino que finalmente se haga con la victoria, aunque sea al precio de recobrar las riendas de un país profundamente roto.

Con las esperanzas de la oposición siria, sus promotores regionales y de buena parte de los dirigentes políticos europeos depositadas en una victoria de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales norteamericanas de noviembre, a la que presumiblemente seguiría la largo tiempo esperada reafirmación de la fuerza militar norteamericana en favor de los rebeldes, ahora quedan muy pocas opciones viables –si es que queda alguna–, de impedir la consolidación del régimen de al-Assad. Donald Trump ha declarado que no seguirá proporcionando respaldo militar a los rebeldes y los principales promotores regionales de la oposición –en este caso Turquía y Arabia Saudí–, están cada vez más sumidos en desafíos domésticos que progresivamente están dejando a la oposición sin la ayuda exterior que ha sostenido sus esfuerzos hasta la fecha.

El brutal avance gubernamental, respaldado por rusos e iraníes, hacia el este de Alepo ha producido una catástrofe humanitaria realmente devastadora, que ha puesto de manifiesto de forma más evidente que nunca la impotencia de la comunidad internacional.

Si bien está todavía por ver si el presidente Trump podría llegar a cerrar un trato con el presidente ruso Vladimir Putin que implique realmente colaborar con al-Assad en un frente común contra el Estado Islámico, algo que algunos sugieren que podría suceder, lo cierto es que el régimen ha consolidado su dominio estratégico del conflicto. Aun cuando el país tiene por delante un largo período de insurgencia, con una oposición cada vez más radicalizada (y también más presionada), al-Assad está realmente cerca de una victoria efectiva –su propia supervivencia– y poner bajo control del gobierno el centro de Siria, un objetivo que durante largo tiempo fue visto como imposible. En ese contexto, al-Assad gobernará un auténtico páramo, con una población que se posicionó mayoritariamente en contra, pero que a estas alturas está desolada y exhausta como para seguir luchando.

La comunidad internacional tendrá que iniciar –más por obligación que por gusto– una lenta interiorización de una nueva realidad: el reto de cómo gestionar la supervivencia de al-Assad, un resultado para el que nadie está preparado. Cualquier compromiso con el régimen de al-Assad será anatema en la mayoría de potencias occidentales, conscientes de los crímenes aberrantes cometidos por las fuerzas de al-Assad durante el conflicto, e irá de la mano con la convicción claramente compartida de que Rusia deberá corresponsabilizarse del caos que ha contribuido a crear. Es probable que la reacción instintiva

sea la de estrechar el cerco, imponiendo nuevas sanciones y tratando de hacer la vida imposible a un régimen de al-Assad prolongado. Si bien esto podría parecer lo moralmente razonable, también conllevaría un mayor riesgo de vaciado del estado sirio, lo que agravaría la desesperación de su población.

**Cualquier
compromiso
con el régimen
de al-Assad
será anatema
en la mayoría
de potencias
occidentales**

JULIEN BARNES-DACEY

Investigador sénior del programa sobre Norte de África y Oriente Medio en el European Council of Foreign Relations (ECFR)



La relación entre Puerto Rico y EEUU tiene 118 años, y en 2017 se cumplirán 100 de la extensión de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, mediante la Ley Jones-Shafroth. El caso colonial de Puerto Rico es el más antiguo en la región latinoamericana y caribeña, y en el sistema internacional. Incluso, de la resolución del emblemático caso se vincula en gran medida la posibilidad de una comunidad internacional axiológica y normativa. Aunque es uno de los casos históricos del derecho internacional por las resoluciones 748 (VIII) de 1952 y 1.514 (XV) de la Asamblea General de las NNUU, EEUU ha defendido históricamente que el tema es doméstico, por ser Puerto Rico un territorio no incorporado dentro de la Cláusula de Territorios de su Constitución. Como veremos, se trata de una relación colonial de legalidad dúctil que se ha definido y negociado en Washington según sus intereses y la correlación de fuerzas políticas del momento en San Juan y en Washington.

La confusión respecto a los límites del autogobierno en el llamado Estado Libre Asociado surge de la Resolución 748 (VIII), liderada por EEUU y que sacó a Puerto Rico de la lista de colonias. La resolución habla de un “estatus internacional y constitucional alcanzado entre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los EEUU de América” e indica que “mediante el pacto acordado entre los EEUU y el pueblo de Puerto Rico se le ha investido de soberanía política que claramente identifica el estatus de gobierno propio alcanzado por Puerto Rico como entidad política autónoma”.

El último episodio de esta relación territorial sucedió el 13 de enero de 2016. La Corte Suprema de EEUU celebró una vista para escuchar las opiniones de las partes interesadas en el caso Estado Libre Asociado de Puerto Rico vs. Sánchez-Valle respecto al tipo de soberanía que tiene Puerto Rico para acusar a personas ya enjuiciadas a nivel federal, la llamada “doble exposición”. La opinión de la Corte Suprema sobre el caso Sánchez-Valle concluyó que Puerto Rico nunca ha poseído una soberanía originaria como para encausar personas ya acusadas a nivel federal. Ese mismo día el Congreso aprobó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico, que impuso una junta de supervisión y control fiscal compuesta por miembros nombrados por el presidente de EEUU y que tomará decisiones que tendrán primacía por encima de cualquier decisión del ejecutivo y los cuerpos legislativos puertorriqueños. La deuda de Puerto Rico asciende a 73.000 millones de dólares y, al igual que Argentina y Grecia, su gobierno ha estado bajo la presión de fondos buitres para forzarlo a pagar la totalidad de la deuda.

Así, la quiebra política y financiera del modelo ha devuelto el tema de Puerto Rico a las agendas de instituciones regionales e internacionales, ante la falta de interés de EEUU de encausar la restauración económica de Puerto Rico y garantizar un proceso de libre determinación. En 2014 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ordenó a su troika+1 ejecutar esfuerzos para adelantar las decisiones del Comité de Descolonización después de 34 resoluciones que aplican la Resolución 1.514 (XV). En el Comité de Descolonización de NNUU se estableció un grupo de trabajo al que se sumaron al cabo de unas semanas Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, San Vicente y las Granadinas, Indonesia y Tanzania para fomentar el diálogo político entre EEUU y Puerto Rico. El 21 de octubre pasado la Cuarta Comisión de Políticas Especiales y Descolonización la Unión de Naciones Sudamericanas se expresó a favor de la descolonización de Puerto Rico.

De modo que el caso de Puerto Rico ha retomado su protagonismo político en el multilateralismo interamericano, latinoamericano y caribeño y en el marco de las NNUU por su crisis humanitaria y colonial actual. Corresponde a las fuerzas sociales puertorriqueñas, las élites políticas y el sistema multilateral encauzar los emergentes consensos políticos amplios en gestación para trascender el anquilosado régimen de relaciones coloniales.

El caso de Puerto Rico ha retomado su protagonismo político en el multilateralismo interamericano, latinoamericano y caribeño y en el marco de las NNUU

JULIO ORTIZ-LUQUIS,

Profesor asistente adjunto en el Brooklyn College y Borough of Manhattan College (City University de Nueva York)



Una dimensión del centro-derecha en política ha sido argumentar, desde su óptica conservadora, que el pasado debe preservarse. A veces, hay quien va aún más lejos y argumenta que hemos de volver a los “buenos viejos tiempos” o hacer que una potencia “vuelva a ser grande”. Si bien muchos aspectos del pasado son dignos de ser preservados, y si bien todos sentimos apego por nuestra lengua, nuestro arte, nuestra literatura, y por nuestros hábitos regionales o nacionales, y por muchos otros aspectos de nuestra historia, el centro-izquierda puede sentirse legítimamente orgulloso de haber estado a favor de los grandes progresos sociales de los últimos siglos. La socialdemocracia en Europa ha jugado un papel esencial en la construcción de la seguridad social, la protección del empleo, el seguro de desempleo, el progreso en la igualdad de género, el acceso a la asistencia sanitaria y a la educación para todos. Y fueron estos logros los que llevaron al gran éxito electoral de la socialdemocracia y a la derrota ideológica del modelo autoritario soviético.

Pero estos son logros del pasado, y si lo único que hacen los socialdemócratas es tratar de preservarlos tal como están, difícilmente recuperarán la fuerza de antaño. De hecho, se volverían “conservadores”. Así pues, aquí les brindo algunas recomendaciones.

Definirse como “reformadores progresistas”. Este término resulta más atractivo para los jóvenes que el de socialdemocracia, que perciben del pasado siglo XX -a los 68 años puedo sentir mucho apego por la socialdemocracia como identidad, pero ¿puedo pedirle lo mismo a un joven de 18 años?-.

Todos los beneficios sociales ya mencionados deben consolidarse y hacerse más asequibles, adaptándolos al nuevo entorno económico y tecnológico. De manera sucinta: los modos de producción económica, el modelo educativo e incluso el de asistencia sanitaria necesitan ser renovados. Más capacidad de elección, una vida laboral más larga, un aprendizaje continuado, una asistencia sanitaria más preventiva, pueden ser compatibles con un modelo de beneficios sociales transferible (de empleo a empleo), un promedio de semana laboral más corto (sí, como proyectaba Keynes), y una igualdad de oportunidades y de resultados generalizada, así como una mayor sostenibilidad medioambiental.

El principio de subsidiariedad tiene que implementarse de un modo más eficaz. Hemos de asignar políticas públicas al nivel más cercano a la gente posible: comunal, urbano,

regional, nacional, europeo y global. No es fácil, pero el principio tiene que ser firme y visible. Europa debe ser reconstruida sobre esta base y, luego, ha de ser reforzada. La base sociológica del reformismo progresista abarca hoy desde el trabajador preocupado por el empleo y el salario, los profesionales cualificados como médicos y maestros, que son conscientes de que su modelo de provisión de servicios ha de ser sostenible, hasta los pequeños empresarios que necesitan poder acceder a los recursos. Y, más allá, también todos los que pueden ver los peligros del hiperpopulismo y de las formas de nacionalismo extremo que provocaron la catástrofe de la primera mitad del siglo XX. Este cambio en la habilidad para dirigirse a una parte mucho más amplia de la sociedad es la mayor ruptura respecto a la sociología marxista que requiere el siglo XXI. El viejo modelo de clase post-industrial ya no refleja la realidad, al menos en las economías avanzadas.

Finalmente, la cuestión más difícil para los reformadores

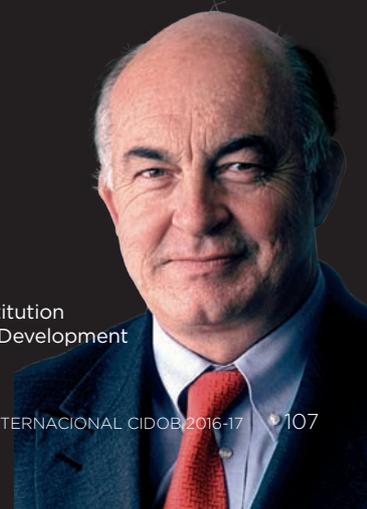
progresistas es encontrar el equilibrio adecuado entre la inmigración legal sobrevenida que será inevitable para la economía global y por razones demográficas, el derecho humano a ser protegido como refugiado así como el reconocimiento de la diversidad, y la capacidad limitada de absorción de migrantes en sus sociedades. Ciertamente no puedo afirmar que tenga la respuesta en todos los contextos. Pero esta debe contener un relato simple y factual del problema, un compromiso firme con los derechos humanos y con los de la ciudadanía, sin distinción de raza o de religión, así como un reconocimiento claro de que hay límites que deben asumirse respecto a la cantidad de migración, que variarán en función del país y de la situación económica. Esto será difícil pero es esencial,

debe dejarse a la derecha populista que lo explote a su favor.

Lo más difícil para los reformadores progresistas es encontrar el equilibrio entre la inmigración legal y la capacidad limitada de absorción de migrantes

KEMAL DERSIS,

Vicepresidente de la Brookings Institution y director de Global Economy and Development



EL SUEÑO ESTRATÉGICO DE CHINA: LA INICIATIVA “BELT AND ROAD”

PÍLDORA DE OPINIÓN

CHINA

En mayo de 2017 China tiene previsto celebrar una reunión cumbre de la iniciativa “Belt and Road” en la que invitará a líderes de más de 60 naciones. El presidente Xi Jinping lanzó este proyecto en 2013 con el nombre de “One Belt and One Road” (OBOR, “Un cinturón, una ruta”), que ahora se denomina oficialmente “Belt and Road Initiative” (BAR). Se trata de una iniciativa de inversión transnacional en infraestructuras. Aunque el gobierno chino evita toda connotación geopolítica y lo describe como un proyecto de cooperación económica, el hecho es que esta gran iniciativa tiene implicaciones geoestratégicas para la política mundial. Podemos calificarla como “una geoestrategia para la paz”.

No obstante, el intento de China de conseguir un equilibrio estratégico entre Eurasia y el Pacífico es un objetivo explícito, no una conspiración. Las raíces del BAR se remontan a la división transatlántica motivada por la Guerra de Irak y la emergencia en 2003 de una entente diplomática entre Francia, Alemania, Rusia y China contra la guerra. Se elige Eurasia porque, por primera vez en la historia, no hay en esta región ninguna perspectiva bélica importante. Esto contrasta claramente con la estrategia central de Estados Unidos, el “Pivot to Asia”.

China se vio arrastrada a una orientación “continental”, pues su gran estrategia de “repunte de la paz”, que todavía no resulta convincente en Asia-Pacífico, goza de potencial para concretarse en el continente euroasiático. Por consiguiente, el liderazgo chino ha aprovechado esta oportunidad histórica para lanzar una estrategia audaz

Aunque China evita toda connotación geopolítica, esta iniciativa tiene implicaciones geoestratégicas para la política mundial

para ayudar a China a reducir la enorme presión de la región Asia-Pacífico. Orientar el “pivote” hacia la Unión Europea, Rusia y Asia Central ha tenido como resultado una buena relación con Rusia y Asia Central, firmemente apoyada en un marco regional, la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).

El crecimiento económico chino ha sido impulsado por el éxito que ha tenido el país en la promoción del comercio, atrayendo inversión exterior directa y, más recientemente, adoptando una estrategia de salir a invertir en países extranjeros. La Iniciativa “Belt and Road” pretende utilizar los importantes recursos financieros de China para reforzar e incrementar su presencia en Asia y en Europa; ambos ofrecen a China mercados importantes y también socios potenciales para contrarrestar la influencia geopolítica de Estados Unidos en esos territorios.

El “cinturón” terrestre ha de ser un corredor comercial y económico que se extienda desde el oeste de China y que, atravesando Asia Central, llegue finalmente a Europa. Requiere la integración de la masa continental euroasiática en un área económica cohesionada. En cuanto a la “ruta” marítima, China desea ser capaz de comprar y construir instalaciones portuarias y zonas económicas asociadas pensadas para proporcionar a China acceso marítimo al comercio y a la inversión.

Exportar tecnología infraestructural e invertir en estos proyectos ayudará a resolver el problema de la sobrecapacidad de China en infraestructura acumulada durante las últimas décadas, pero también contribuirá a crear más mercados extranjeros mejorando los servicios de transporte. Sin embargo, la iniciativa BAR también tiene que hacer frente a muchos retos. Ante todo, China no tiene experiencia en esta actividad. De hecho, desde los canales de Suez y Panamá, pasando por el transiberiano ruso, hasta el ferrocarril Berlín-Bagdad, fue Europa quién tubo la iniciativa de construcción de grandes proyectos de inversión en infraestructuras a finales del siglo XIX. En este sentido, China aún debe perfeccionar las técnicas de apoyo financiero para la puesta en marcha de grandes proyectos infraestructurales en el extranjero.

LANXIN XIANG

Director, Centre of One Belt and One Road Studies, China National Institute for SCO International Exchange and Judicial Cooperation



AZERBAIYÁN: EVITANDO RIESGOS AL STATU QUO POLÍTICO

PÍLDORA DE OPINIÓN

AZERBAIYÁN

Durante las últimas dos décadas las autoridades azeríes han usado sus recursos energéticos y su ubicación geográfica como su principal activo, tanto en sus relaciones internacionales como a nivel nacional. Debido al papel cada vez más importante que desempeña en la seguridad energética de la UE y de EEUU, se ha movido hábilmente por la compleja red de intereses no coincidentes de las potencias regionales y extrarregionales; el autoritarismo creciente del líder Ilham Aliyev, alimentado por el dinero del petróleo, ha sido justificado por la necesidad de preservar la estabilidad política en una región muy volátil. Azerbaiyán es, en efecto, el único país de la región que tiene frontera con las tres principales potencias regionales: Rusia, Turquía e Irán, y hasta ahora ha sobrevivido a las presiones derivadas de su papel clave como proveedor de energía desde el Caspio a los mercados occidentales evitando el paso por Rusia.

Sin embargo, últimamente estos dos activos han empezado a menguar. La producción de petróleo empezó a caer después de alcanzar su punto máximo en 2012, y además en 2014 el precio del petróleo cayó en picado. El relajamiento de las relaciones EEUU-Irán tuvo un doble significado para el país: por un lado, representó el retorno de Irán como actor en la seguridad energética de Occidente, con lo que disminuyó la importancia de Azerbaiyán; por otro lado, abrió nuevas oportunidades para maniobrar y cooperar con sus vecinos, oportunidades que Azerbaidzhán aprovechó para firmar importantes acuerdos económicos con Irán.

Pero la economía no es el único problema del país: en los 22 años de negociaciones para la resolución del conflicto de Nagorno Karabaj, la parte de Azerbaiyán ocupada por la vecina Armenia, no se han producido ningún progreso. Además, en julio de 2016 se produjo la violación más grave del alto el fuego desde la firma del mismo en 1994, y puso de manifiesto la fragilidad del statu quo, así como los múltiples intereses que influyen en el conflicto. El más relevante, el de Rusia, que inmediatamente declaró su disposición a mediar en un nuevo alto el fuego.

Las ambiciones del país para integrarse en la UE también han disminuido durante estos últimos años y han sido sustituidas por un intento de “cooperación estratégica”. Los intereses energéticos de la UE, por un lado, y las peculiaridades de la élite gobernante rentista de Azerbaiyán, por otro -que se resiste al proceso de reformas- ha acabado finalmente con el abandono del Acuerdo de Asociación y con la búsqueda de un nuevo modo de relación.

Los dirigentes de Azerbaiyán confían en el dinero del petróleo para mantener sus privilegios y protegerles de las consecuencias de la violación de derechos humanos

La evolución interna del país sigue alejándolo cada vez más de Occidente. El poder político azerí, afianzado hasta ahora en el dinero del petróleo y en la importancia geoestratégica más que en la legitimidad popular ha intensificado la represión de todas las formas de disidencia, persistentes en respuesta a la actitud cleptocrática y no democrática del régimen. La política del país se ha ido desviando claramente del modelo del Estado-nación establecido hace un siglo, cuando fue el primer y único ejemplo de modernización democrática y liberal en el mundo musulmán. Aun así, los dirigentes postcomunistas de Azerbaiyán siguen confiando en que el dinero del petróleo pueda mantener sus privilegios y protegerles de las consecuencias de la violación de los derechos humanos.

En este sentido, la liberación del pasado verano de periodistas y de destacados defensores de los derechos humanos que habían sido arrestados en 2014 con acusaciones falsas durante una gran campaña represiva contra la sociedad civil parece ser una maniobra para disimular la naturaleza inmutable del régimen. Las enmiendas constitucionales de carácter reaccionario destinadas a imponer más centralización del poder, adoptadas mediante un referéndum controlado, y que fueron acompañadas de detenciones de activistas, no dejaron ninguna duda acerca de los métodos elegidos por el presidente para responder a la crisis. La reciente sentencia condenando a diez años de cárcel a Giyas Ibrahimov, autor de graffitis políticos en el monumento del expresidente Heydar Aliyev, es una muestra de que la naturaleza y

las intenciones del régimen siguen sin cambiar.

La reciente visita de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, parece más lógica, pues pone de manifiesto similitudes en los puntos de vista y en los retos a los que tienen que hacer frente los líderes autocráticos de unos estados ricos en petróleo.

LEILA ALIEVA

Fundadora y presidenta del Centro de Estudios Nacionales e Internacionales



Sabemos quién es Donald Trump pero no sabemos qué será la presidencia de Trump. Los indicios disponibles nos dibujan un horizonte tenebroso, para qué ocultarlo. El personaje es de una ignorancia enciclopédica sobre cualquier asunto político interior o internacional, acompañado de una desbordante soberbia narcisista, que constituye su única guía moral e ideológica.

Trump es ante todo un hombre rico y poderoso –arbitrario y voluble como solo pueden serlo los ricos y poderosos–, que usa su dinero y su influencia para darse gusto y encaramarse algo más en el pedestal que se ha construido para él. Desde esa altura, que es ahora la del hombre más poderoso del mundo, se dirige con un lenguaje soez y despreciativo hacia quienes le critican o sencillamente no les gusta. Como personaje público capaz de ganar elecciones, el nuevo presidente es un producto manufacturado en los reality shows y en las redes sociales, que maneja con capacidad provocadora e inigualable. El hombre recién llegado a la Casa Blanca mantiene mucho del empresario despótico que seleccionaba y despedía personal en el concurso “El Aprendiz”, producido por la NBC y en emisión desde 2004.

Trump se mueve como pez en el agua en el esquematismo de los 140 caracteres de twitter, la polarización entre ideas maniqueas, el impropio, el insulto y, directamente, la falsificación. Su presidencia no empezó el 20 de enero sino semanas antes, cuando consiguió a golpe de tuit cambiar los planes de inversiones de la industria automovilística, debilitar el peso mexicano o sembrar el desconcierto diplomático respecto a China.

Arranca con Trump una presidencia muy conflictiva. No solo por las decisiones políticas que ha tomado desde el mismo día de la victoria electoral, sino por su personalidad, llena de flancos débiles que fácilmente pueden conducirle a un *impeachment* o destitución parlamentaria, para el que se necesitaría el apoyo del Partido Republicano, mayoritario en las dos cámaras.

El primer problema que se le plantea es el conflicto de intereses y el papel de los miembros de su familia en la actividad del gobierno y en la dirección de sus negocios. La fórmula societaria elegida para solventarlo, encargando a sus dos hijos la gestión de sus empresas, nada garantiza respecto a las expectativas de una presidencia en la que intereses públicos y privados fácilmente se mezclarán y confundirán. Trump no ha dado a conocer su declaración de la renta, exhibición que

considera una mera manía de los periodistas. Así, estarán bajo sospecha en los próximos cuatro años muchas de las decisiones presidenciales, especialmente las vinculadas con países donde Trump tiene intereses e inversiones.

Respecto al orden internacional, la elección de Trump, incluso antes de su toma de posesión, ha sido una patada en el hormiguero y ha empezado a resquebrajarse la compleja geometría multilateral construida por el liderazgo de Estados Unidos en el siglo XX a partir de las dos victorias, primero sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial y luego sobre la Unión Soviética en la Guerra Fría. La grieta es especialmente sensible en el multilateralismo comercial, condenado por Trump a causa de su preferencia americana. Pero también afecta a las alianzas estratégicas, sometidas a partir de ahora a una nueva geometría, en la que Rusia ocupa un lugar especial para el magnate americano. Preocupa sobre todo una actitud apaciguadora respecto a las ambiciones de hegemonía rusa sobre su pérdida de su zona de influencia. También sus declaraciones

provocadoras con China, que rompen una línea de conducta establecida por Nixon y Kissinger hace cuarenta años. En cuanto a Oriente Próximo, el anunciado traslado de la embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén, que ya ha anunciado, significaría de confirmarse la ignición de un virulento incendio en la región.

Con Donald Trump están en cuestión todas las políticas multilaterales sobre cambio climático, proliferación nuclear o liberalización comercial construidas pacientemente en las últimas décadas, por mor de un presidente dispuesto a lavarse ahora las manos sobre el futuro del planeta después de que su país lo ha liderado y modelado en conformidad con sus ideas y valores durante setenta años.

Con Donald Trump están en cuestión las políticas multilaterales sobre cambio climático, proliferación nuclear o liberalización comercial

LLUÍS BASSETS,

Columnista de política internacional en *El País*



CAMBIO CLIMÁTICO: ¿CÓMO PODEMOS HACER QUE LAS NACIONES "VUELVAN A SER GRANDES"?

PÍLDORA DE OPINIÓN

ENERGÍA RENOVABLE

Para controlar el calentamiento del planeta sin poner en peligro el desarrollo socioeconómico, el mundo tiene que hacer una transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono, resistente y sostenible, en la línea del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De acuerdo con dicha agenda de desarrollo, todos los países deben tener el propósito de garantizar el acceso de sus ciudadanos a los bienes y servicios básicos (agua, alimento, vivienda, electricidad, transporte, educación y atención sanitaria) y hacer que sus economías funcionen de forma sostenible.

El desarrollo socioeconómico está estrechamente ligado al acceso y a la utilización de la energía; no es pues ninguna sorpresa que en la actualidad sea el sector eléctrico el que emite mayor cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

De mantenerse la tendencia actual, British Petroleum prevé que las economías emergentes y en vías de desarrollo incrementen las emisiones globales en un 20% antes del 2035, debido principalmente al crecimiento de la población, el aumento de volumen de sus economías y al mayor consumo de energía. De promedio, la demanda de electricidad de las economías emergentes y en vías de desarrollo aumenta un 7-8% anual. Es por ello que las energías renovables puede contribuir a descarbonizar la capacidad existente de generación de energía y a cubrir la nueva demanda de electricidad mediante fuentes renovables, conectadas o no a la red, y de una manera consistente.

India, la economía de crecimiento más rápido y el tercer mayor emisor del mundo. Su población sigue creciendo y se calcula que antes del 2022 superará en habitantes a China, lo que plantea un desafío por lo que respecta al consumo eléctrico. Es más, el país acoge a un tercio de los 1.300 millones de personas que no tienen acceso a la energía. Mediante el desarrollo de energías renovables, el gobierno indio espera poder satisfacer la creciente demanda eléctrica de sus ciudadanos.

Según datos del Climate Policy Institute (CPI), el gobierno Modi planea implantar instalaciones para la producción de 60 GW de energía eólica, 10 GW de la incineración de residuos, 5 GW de energía hidroeléctrica a pequeña escala, y 100 GW de capacidad solar desplegada antes de 2022, más del doble de la actual capacidad fotovoltaica de China y Alemania, las dos naciones que mejor aprovechan la energía solar.

Aunque hoy nuestras pautas de producción, consumo y transporte dependen en gran medida de los combustibles fósiles, la economía global avanza cada vez más hacia la electrifi-

cación y la capacidad instalada de renovables sigue creciendo globalmente, incluso en tiempos de precios bajos del petróleo. Desde 2013, el mundo instala cada año más capacidad de generación de energías renovables que de carbón, gas natural y petróleo combinados.

Los avances tecnológicos han sido rápidos. Los módulos fotovoltaicos cuestan un 75% menos que en 2009, mientras que los precios de las turbinas eólicas se han reducido más de un 30% en el mismo período, y son cada vez más eficientes. Esto hace que la energía proveniente de las fuentes solar y eólica sea en algunos países, cada vez más competitiva en precio.

El sector de las renovables tiene muchos aspectos positivos, entre ellos, la creación de nuevos puestos de trabajo. En paralelo a una buena política industrial, las cadenas de valor local de la energía renovable pueden reducir los costes de financiación de proyectos en los países en vías de desarrollo. La planta termosolar marroquí Noor 1 es un ejemplo de cadena de valor local de la Energía Solar Térmica de Concentración (en inglés, CSP) competitiva en los mercados internacionales.

La eficiencia energética es la que encierra el mayor potencial. Las inversiones en este campo desde 1990 han reducido la factura global del gasto energético en 5,7 billones de dólares. Según cálculos de la Agencia Internacional de la Energía, gracias a las tecnologías de mayor eficiencia energética lograremos el 40% del toda la reducción de emisiones requerida antes de 2050, lo que evitará anualmente 12.800 millones de toneladas de dióxido de carbono menos en EEUU y China.

En conclusión, necesitamos apostar por las tecnologías con baja emisión de carbono si queremos que nuestras naciones "vuelvan a ser grandes".

La economía global avanza cada vez más hacia la electrificación y la capacidad instalada de renovables sigue creciendo globalmente, incluso en tiempos de precios bajos del petróleo

En conclusión, necesitamos apostar por las tecnologías con baja emisión de carbono si queremos que nuestras naciones "vuelvan a ser grandes".

LUIGI CARAFA

Investigador asociado y co-organizador del seminario Climate Futures, CIDOB



LA GOBERNANZA DE UN MUNDO GLOBALIZADO: LÍMITES DIFUMINADOS Y MULTIPLICACIÓN DE ACTORES

PÍLDORA DE OPINIÓN

GOBERNANZA

En el mundo que siguió al Tratado de Westfalia de 1648, los Estados devinieron el núcleo de gobierno de las sociedades europeas. Aún hoy, todos creemos que los Estados son los únicos actores soberanos, lo que significa que, en su territorio, son la única autoridad que tiene poder sobre sus ciudadanos. También son vistos como los proveedores de bienes públicos. La misma noción westfaliana de la soberanía, entiende que por encima del mismo Estado no existe otro poder que no sea el que el propio Estado concede, en base a un acuerdo intergubernamental. Este es el orden mundial que se da por sentado en el mundo en que vivimos.

Pero diversos condicionantes lo están poniendo en cuestión. El primero es que, debido a la presión de la globalización, los estados se están comprometiendo cada vez más en todo tipo de acuerdos supranacionales, que si bien limitan su soberanía, también conforman un sistema de gobernanza global supranacional. Dicho sistema, formado básicamente por Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods, surgió en el período subsiguiente a la Segunda Guerra Mundial, y aspira a ser un foro planetario para el diálogo y la cooperación entre estados. Pese a todos sus defectos y limitaciones, esto tiene un impacto enorme en el funcionamiento de dichos estados. Pensemos en las reglas comerciales, la ayuda al desarrollo, los derechos humanos y el imperio de la ley, pero también las políticas globales relativas al cambio climático, a los estándares sobre lo que es un trabajo decente, etcétera. Por supuesto, muchas de estas cosas tienen un carácter voluntario, y los estados pueden desentenderse de ellas si consideran que su "interés nacional" está en peligro. De todos modos, el sistema de Naciones Unidas tiene un impacto enorme en la provisión y regulación de bienes públicos.

Un segundo condicionante es la proliferación de planes de cooperación, por los que muchos estados vecinos ponen en común algunos de sus poderes soberanos. De lejos, el plan de integración regional más avanzado es el de la UE, pero hay otros muchos. Es interesante constatar que algunas de estas organizaciones regionales participan crecientemente además en el sistema de Naciones Unidas. La UE, por ejemplo, es miembro de la Asamblea General, un foro en el que tradicionalmente solo tenían escaño los estados.

En tercer lugar, muchos estados se enfrentan a presiones descentralizadoras, que hacen que las entidades subnacionales se apropien de competencias propias del Estado central. Incluso algunas grandes ciudades están desarrollando sus propias políticas de gobernanza, incluidas competencias de política exterior.

Estos avances están cambiando espectacularmente el orden mundial westfaliano, porque limitan la soberanía de los estados, y porque difuminan los de gobernanza. Ni las entidades de gobernanza supranacionales ni las subnacionales son estados, pero exhiben una serie de propiedades "casi estatales". A menudo pueden actuar como si fuesen estados, y en algunos casos pueden incluso aspirar a convertirse en uno de ellos.

Muchos estados se enfrentan a presiones descentralizadoras, que hacen que las entidades subnacionales se apropien de competencias propias del Estado

En síntesis, estamos asistiendo a una gobernanza de los bienes públicos cada vez más compleja, en virtud de la cual están en activo no solo los estados, sino también las entidades paraestatales. Esto plantea dos grandes problemas; el primero es cómo han de interactuar las diferentes entidades de gobernanza. Los principios de subsidiaridad o federalismo tienen que ser reinventados y adaptados a la actual realidad. El segundo problema es cómo reconciliar

la complejidad de la gobernanza con la democracia y la legitimidad. Sucesos recientes, como el *Brexit*, el auge de movimientos contrarios al libre comercio y las nuevas facetas del nacionalismo ponen de manifiesto una creciente desconfianza de la opinión pública hacia la gobernanza global y regional, o incluso hacia la política en general. De ahí que es preciso reflexionar sobre el futuro de la gobernanza en un mundo globalizado. Constreñirse a la soberanía del orden mundial westfaliano no es una opción. Sin embargo, la cristalización de un orden mundial postwestfaliano que garantice la prosperidad y la seguridad para todos, tampoco resulta evidente.

LUK VAN LANGENHOVE

Vrije Universiteit Brussel, Institute of European Studies



UE EN EL MEDITERRÁNEO: NAVEGANDO EN AGUAS REVUELTAS

PÍLDORA DE OPINIÓN MEDITERRÁNEO

Hace 21 años, la Unión Europea y casi todos los otros países de la cuenca mediterránea tenían un punto de vista común para la región basado en valores compartidos y en objetivos económicos, sociales y culturales conjuntos. Desde entonces, la región, y la política de la UE respecto a ella, se ha visto sacudida por el terrorismo, las revoluciones y las migraciones descontroladas. La UE está obligada a revisar su visión sobre el Mediterráneo a la luz de estos trascendentales acontecimientos y a hacerlo sin perder su esencia.

Hoy, la Asociación Euromediterránea, lanzada en noviembre de 1995 en Barcelona, parece un marco político muy distante. Este concepto idealista, respaldado entonces por los gobiernos a ambos lados del Mediterráneo, ha quedado hecho añicos por los acontecimientos: la oleada de ataques terroristas de Al Qaeda desde el 2001 en adelante; las revoluciones árabes iniciadas en 2011; el surgimiento del Estado Islámico en 2014, y el aumento de las migraciones desde el 2015.

Confrontada con estos importantes acontecimientos, la Unión Europea ha abandonado en parte sus compromisos de 1995. Después de septiembre de 2001, se ha dado una clara prioridad a la cooperación contra el terrorismo con países como Túnez, Egipto o Siria, lo que de hecho va en contra de los objetivos de defensa de la democracia y los derechos humanos apuntados en el Proceso de Barcelona.

Después de las revoluciones árabes y de la caída de regímenes dictatoriales en Túnez, Egipto y Libia, la Unión Europea trató de ajustar su política en la región diferenciando más entre países pero manteniendo el mismo conjunto de políticas orientadas a apoyar a las sociedades abiertas y a los sistemas económicos liberales. No está claro que este conjunto de políticas de la UE siga teniendo sentido en todos los casos; la UE fue incapaz de hacer valer su influencia en Egipto, Siria o Libia. En países como Jordania o el Líbano, la UE se ha limitado a dar su apoyo a los gobiernos en la gestión de la afluencia masiva de refugiados. Se apoyó con firmeza a Túnez, pues su revolución representaba la evolución política más compatible con los valores y principios de la UE.

Al mismo tiempo, desde enero de 2011 la UE ha introducido una nueva arquitectura de política exterior que supuestamente daría más consistencia a las políticas en toda la UE, pero que en la práctica ha dado mayor prominencia a los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros más grandes de la Unión.

En consecuencia, hoy, la política de la UE en la región mediterránea se basa más en los intereses que en los valores. También es más transaccional y guiada por los acontecimientos. Gestionar bien la relación con una región inmersa en una profunda agitación es mucho pedir, especialmente si tenemos en cuenta que la propia Europa está sujeta a una ola de terrorismo, a la influencia cada vez mayor de los partidos de extrema derecha y a un pujante sentimiento xenófobo.

Sin embargo, que la visión política que tenía la UE 21 años atrás se haya visto desbordada por los acontecimientos políticos no significa que sea totalmente obsoleta. Necesita una profunda revisión para ponerla a tono con las nuevas realidades políticas: unos regímenes autoritarios resistentes o en expansión; la fuerte presencia de Rusia y de Irán en Oriente

Medio; la masiva influencia de las redes criminales de tráfico de seres humanos (en Turquía, Libia y Egipto en particular); la persistencia de actividades terroristas tanto en los países mediterráneos como en la propia Europa.

Con ello, la UE debe mantener sus valores intactos y trabajar de un modo más intenso con los gobiernos más dispuestos a abrazar estos valores, e interviniendo de un modo más limitado en aquellos países que prefieran mantenerse al margen de estos valores. Y lo que es más im-

portante: la UE ha de esforzarse para forjar una política mediterránea respaldada por todos los gobiernos de sus Estados miembros.

Hoy la política de la UE en la región mediterránea se basa más en los intereses que en los valores

MARC PIERINI

Profesor visitante en Carnegie Europe, exembajador de la Unión Europea en Turquía, Túnez y Libia, Siria y Marruecos



VLADÍMIR PUTIN Y LOS DEMAGOGOS

PÍLDORA DE OPINIÓN

POPULISMO

El populismo es más un eslogan y un método que un concepto o una ideología. La atracción de la demagogia funciona como una adicción. Fomenta en el individuo una lectura dicotómica de la realidad –el bueno y el malo, todo o nada–, así como el rechazo a analizar las situaciones por uno mismo. En el mundo hiperconectado actual, los demagogos utilizan la fuerza de la palabra y de las imágenes, y lanzan la peonza de Internet para hacer girar, a toda velocidad, hechos y contraverdades, realidades y fantasías. Estas «informaciones» se difunden demasiado rápido para que puedan ser analizadas y contrastadas, y dejan siempre un rastro en el espíritu de la gente.

El ciudadano queda atrapado en el torbellino de las emociones y abandona su libre arbitrio. Persuadido de que el nuevo líder le dará voz, acepta un discurso reductor y métodos de gobierno restrictivos. Sin ser siempre consciente de ello, el elector de Trump o del Frente Nacional no vota por una estrategia definida, sino por una promesa de ruptura con lo establecido. Lo que ocurrirá después se le escapa, y acepta implícitamente dar carta blanca a la nueva élite. Se vuelve entonces a la casilla de salida: el pueblo vuelve a poner su destino en manos de un pequeño grupo dirigente, más arrogante y cerrado que el precedente. La contradicción es evidente. Así, la gran mayoría de los electores de Trump no quieren una revolución, ni siquiera un cambio social, sino simplemente «librarse» de las élites y de las referencias a un pasado multicultural y cosmopolita, y levantar barreras a los «extranjeros». La hostilidad hacia los refugiados que huyen de la guerra aumenta en los países de Europa directamente afectados por las oleadas de emigración.

Y desde hace más de 17 años Vladímir Putin ha consolidado su poder precisamente sobre la base del rechazo a los «migrantes», a los no rusos. Para suceder a Boris Yeltsin en 1999 tuvo que recurrir a la figura demonizada del “enemigo”, quien tras haber adoptado los rasgos del checheno, del georgiano, y del ucraniano, se personifica ahora en Occidente, el gran rival. El extranjero es el chivo expiatorio

clásico en la fábula del déspota. El presidente ruso también ha optado por inmiscuirse en la vida política de otros países: en el plano militar en Georgia, Ucrania, Siria; a través de la subversión y las redes en Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y en los Balcanes. Es importante señalar que Putin no cuenta con una fuerte legitimidad en las urnas; en 2016, su partido consiguió hacerse con tres cuartas partes de los escaños de la Duma con solo una quinta parte de los electores inscritos. Para conservar su autoridad necesita la represión, la propaganda y elecciones bajo control. Es más temido que respetado. En un régimen autoritario, los sondeos miden las emociones y no las opiniones.

Inicialmente desconfiado respecto a internet, Putin decidió convertirlo en un arma privilegiada. La subversión rusa es una ingeniería que busca ampliar la brecha entre la realidad y una «realidad» fantaseada. La subversión es el arma de un poder que ya no es atractivo y que busca un nuevo impulso en la desestabilización de los rivales. Esta ofensiva está demostrando su eficacia en Europa, donde redes prorrusas transmiten la influencia del Kremlin. A menudo, las personas y las organizaciones europeas que muestran su aprobación del régimen de Putin lo hacen de un modo utilitario, para cargar contra sus adversarios, oponerse a la Unión Europea, a la «dominación americana» y rechazar la acogida de inmigrantes de Oriente Medio. En todos los casos, de Donald Trump a Viktor Orban, de François Fillon a Theresa May, la doctrina es soberanista y proteccionista. Y estas orientaciones ríman con las del Kremlin. El rechazo del Otro se convierte en el medio utilizado para definir su pueblo.

Las autoridades rusas han adoptado la práctica de denigrar la democracia y de inmiscuirse en las políticas internas de los estados, en Europa y en América del Norte, en particular durante los períodos electorales. El objetivo es pretender que Rusia no es menos democrática que sus vecinos occidentales, que las elecciones son aproximativas en todas las sociedades y que el «business» debe prevalecer sobre las consideraciones políticas o de seguridad. Para ello, Moscú utiliza los eslabones débiles y apoya a los demagogos y a los radicales. A los demócratas solo les queda una respuesta posible: denunciar la maniobra, insistir en los hechos, contrarrestar la propaganda... Y proponer políticas nuevas y convincentes.

MARIE MENDRAS

Politóloga en el CNRS, Profesora en el Instituto de Estudios Políticos de París



DE LA EXTRACCIÓN A LA (RE)GENERACIÓN

PÍLDORA DE OPINIÓN

P2P

Nuestro mundo se ha lanzado una vez más a un cambio fundamental en el régimen de valor, en el que el sistema extractivo actual se enfrenta a una serie de crisis estructurales. Pero al mismo tiempo que el viejo mundo se disloca, también se siembran las semillas de un mundo nuevo. Este nuevo régimen de valor emergente, que ya está aquí aunque aún no “uniformemente distribuido”, se basa en el formato emergente de la producción paritaria (*peer-production*) de bienes comunes, descrita por vez primera por Yochai Benkler en *The Wealth of Networks* (“La riqueza de las redes”). Combina comunidades productivas translocales creando bienes comunes de conocimiento, *software* y diseño que, en combinación con las tecnologías manufactureras locales está produciendo una nueva visión de la producción cosmo-local. Esta visión sigue la lógica según la cual lo no-rival se convierte en global (es decir, bienes comunes globales de conocimiento, diseño y *software*), y aquello que es rival (por ejemplo, el *hardware*) es local.

Una de las “armas” fundamentales en esta batalla es la tecnología, es decir, las tecnologías paritarias (*peer-to-peer*) que permiten a la gente conectarse sin tener que pedir permiso, auto-organizarse, co-crear y distribuir valor. En la que se produce una batalla fundamental por la supremacía tecnológica. En este escenario, se enfrentan cuatro ecosistemas tecnológicos diferentes, y donde cada modelo representa también una cosmovisión para el futuro.

En el primer modelo, también conocido como “capitalismo red-árquico” (*netarchical capitalism*), solamente el interfaz de usuario o *front-end* de la estructura tecnológica es *peer-to-peer*, como vemos por ejemplo en *Facebook* o *Google*, mientras que toda la infraestructura de soporte (*back-end systems*) sigue estando bajo el control estricto de propietarios privados, los cuales se apropian en exclusiva de la renta que producen estos nuevos tipos de cooperación humana. Este es un mundo de una vigilancia completa, en el que nuestros comportamientos son rastrea-

Este nuevo régimen de valor emergente se basa en el formato de la producción paritaria (*peer-production*) de bienes comunes

dos y manipulados, y se vuelven cada vez más precarios, pues el nuevo capitalismo ya no paga a sus trabajadores ni a sus creadores de valor.

El segundo modelo es el modelo *bitcoin* y representa el sueño del “anarco-capitalismo”. En estos sistemas, no existe la confianza en la gobernanza humana, no existe la sociedad. Se asume que unos individuos aislados y atomizados entran en contacto unos con otros y son dirigidos por algoritmos y máquinas. Un símil ilustrativo podría ser el de una partida de *Monopoly*, en el que se supone que todos empezamos como negociantes iguales y acabamos en sistemas del tipo “el que gana se lo lleva todo” (*winner-take-all-systems*). Es neoliberalismo con esteroides, un mundo-mercado totalitario.

El tercer modelo es el modelo de relocalización en pos de la comunidad, que ha entrado presumiblemente en una era de crecimiento exponencial. Es una característica del renacimiento de la sociedad civil en todo el Norte Global, aunque también puede verse en las ciudades de América Latina y África del Sur. De todos modos, si bien la relocalización de la producción es una necesidad vital, no es suficiente para alterar el equilibrio global de poder.

Abogamos, en consecuencia, por un cuarto modelo, el de los bienes comunes globales. En este modelo, comunidades productivas abiertas, que mutualizan conocimiento productivo a escala global, se alían con coaliciones empresariales éticas y generativas como

Enspiral, Sensorica, Las Indias, Ethos VO, etcétera, que también operan a nivel global y construyen alternativas translocales y transnacionales para el decadente imperio mundial.

Dado que no podemos continuar con los viejos métodos extractivos, esta es la única alternativa viable para salvar al planeta y a sus comunidades. Seamos (re)generativos con el mundo natural y con las comunidades que dependen de él. Produzcamos e intercambiamos de una forma viable, y construyamos las instituciones que habrán de sustentar la transición.

MICHEL BAUWENS

Fundador de la P2P Foundation

VASILISI KOSTAKIS

Investigador principal asociado en el Departamento de Innovación de la Gobernanza de la Universidad Tecnológica de Tallin



DESIGUALDAD: EL RETO QUE ÁFRICA NO PUEDE IGNORAR

PÍLDORA DE OPINIÓN

POBREZA

Una de las imágenes más llamativas que vi en 2016 fue una fotografía aérea en la que, a un lado, se ve un conjunto de viviendas en un barrio residencial de clase alta en Nairobi, Kenya. Una imagen aparentemente normal, salvo que la otra mitad de la fotografía mostraba otro conjunto de viviendas, esta vez a base de chozas o casuchas hechas con trozos de hojalata, ramas y barro. Los pulcros y bien pintados tejados de las casas de la urbanización elegante solo estaban separados de los herrumbrosos tejados de hojalata de la otra mitad por una autopista.

El contraste visible en aquella fotografía es en gran parte simbólico de la desigualdad global, un problema que se da de forma más pronunciada en el continente africano.

Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas, cada país de África es hoy menos igualitario de lo que lo era en el año 2010. Los beneficios del crecimiento económico, llegados en cuentagotas, han sido muy escasos para la mayoría de las poblaciones africanas; la brecha entre ricos y pobres solo es mayor en América Latina.

En África, el número de multimillonarios africanos se ha doblado desde el 2010, mientras que el de personas que viven en la pobreza ha aumentado en unos 50 millones desde 1990. Existe una percepción cada vez mayor de que el crecimiento económico no se traduce automáticamente en una reducción de la pobreza. Tómese, por ejemplo, Etiopía, que ha registrado un crecimiento medio anual de más del 10% durante la última década. Millones de etíopes son víctimas de la hambruna o tienen problemas de desnutrición, mientras el país se centra en las prácticas agrícolas industriales de alto rendimiento y canaliza sus recursos hacia la industria manufacturera. En 2016 se produjo un vuelco cuando el índice de crecimiento cayó por debajo del 5%, hubo muy malas cosechas y la subida de precios tuvo un efecto desproporcionado y angustiante en los salarios de los trabajadores agrícolas. Esto a su vez alimentó las protestas en Etiopía, con cierre de fábricas y paralización de la inversión extranjera.

Se supone que el crecimiento económico genera oportunidades y estimula el empoderamiento, reduciendo en consecuencia las tensiones sociales. Pero el modelo de crecimiento africano, en gran parte impulsado por un auge de las materias primas, proporciona muy pocas oportunidades de empleo y de progreso económico de gran alcance. Enriquece a las naciones pero cambia muy poco la vida de los ciudadanos. Y allí donde crece la desigualdad, se cuece el conflicto. Los

ha habido en 2016 en la República Centroafricana, en Sudán del Sur, en la República Democrática del Congo y en Burundi. Aunque estos conflictos tienen diversas causas, una de ellas es el problema creciente de la desposesión y la marginación.

El año 2017 es de cita electoral en muchos países africanos, entre otros Angola, Argelia, Kenya, Rwanda y Sierra Leona. Cada país se enfrenta a múltiples problemas y la caída del precio de las materias primas no es la menor de ellas. La presión para garantizar que las corrientes económicas favorables impulsen a todas las embarcaciones es intensa: los acontecimientos en Etiopía, Estados Unidos y Europa han mostrado a muchos gobiernos africanos que el precio de las divisiones internas puede ser muy elevado. Cuando la gente se siente excluida, lucha por hacer oír su voz.

Y no es solo por la desigualdad económica; un informe de las Naciones Unidas del 2016 constata que el África Subsahariana pierde unos 95.000 millones de dólares al año debido a la desigualdad de género, haciendo peligrar todavía más los esfuerzos del continente en pro del crecimiento económico. Pero hubo también un ejemplo esperanzador: Rwanda ha visto aumentar su esperanza de vida, su educación y sus ingresos per cápita tendiendo puentes para salvar la línea divisoria entre géneros. Es el país más igualitario de África en este aspecto, y el sexto de 145, un pionero para el continente.

La paradoja de un elevado crecimiento y un alto índice de pobreza –que hace crecer la desigualdad en todo el continente– se ha puesto de manifiesto en países africanos muy diferentes. Una de las principales lecciones a sacar del 2016 es la recomendación de que no hay que luchar solo contra la pobreza; también contra la desigualdad.

El número de multimillonarios africanos se ha doblado desde 2010, mientras que los pobres han aumentado en unos 50 millones desde 1990

NANCY KACUNGIRA,
Periodista, *BBC África*



JAPÓN EN LA ERA DE LOS MUROS: POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD FUTURAS

PÍLDORA DE OPINIÓN

JAPÓN

Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, ha declarado que “construirá un gran muro” a lo largo de la frontera con México. Y no es el único. Otros amigos de los muros están ganando influencia también en Europa, tratando de bloquear la entrada de refugiados de Oriente Medio y de África. También con el Brexit, los británicos optan por salir de la UE interponiendo el Canal de la Mancha entre ellos y el continente. Estos pasos en Occidente coinciden con la edificación por parte de Putin de un nuevo “telón de acero”, y con el intento, por parte de Xi Jinping, de levantar un muro virtual que evite la entrada de la democracia en China, al tiempo que erige barreras tangibles en los mares del Este y del Sur de China. Nuevos muros separan a los judíos de los palestinos en Israel. Estamos pues, en una nueva “era de los muros”.

Tras la Segunda Guerra Mundial, las democracias occidentales apostaron por una política de “puertas abiertas”. El FMI, la OMC, la UE y varios acuerdos de libre comercio (además de la ONU) promovieron la libre circulación de bienes, personas, ideas... Hace 30 años Ronald Reagan declaró en Berlín: “Señor Gorbachev, iderribe este muro!”. Y el muro efectivamente cayó pocos años después, seguido por el hundimiento de todo el “telón de acero”. Hoy sin embargo avanzamos en el sentido contrario. En este contexto, resulta alentador que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, sea uno de los líderes mundiales más enemigo de los muros y partidario de la política de puertas abiertas: Ha visitado más de cien países; ha apoyado el TPP y el Acuerdo de París; cree firmemente en la alianza con EEUU y sus aliados militares. También aspira a un rol mayor de las Fuerzas de Autodefensa en las operaciones de mantenimiento de la paz; y ha anunciado un plan para aceptar aproximadamente 200.000 inmigrantes al año. También propone revisar la constitución japonesa para hacer de Japón un país más abierto y con menos muros. No es sorprendente, ya que la economía depende del libre flujo de entrada y salida de bienes, energía y dinero; también su menguante población reclama la entrada de más inmigrantes.

Sin embargo, Japón cuenta con su cuota de defensores de los muros. Históricamente, el país permaneció cerrado hasta tiempos recientes —en que los EEUU forzaron su apertura— y desde entonces ha adoptado una política selectiva de puertas abiertas, que aún mantiene. La apertura trajo consigo la exposición a los conflictos internacionales, el aventurerismo militar de Japón y sus horribles consecuencias, incluyendo la devastación del país. Este es el motivo por el cual existe una fuerte oposición popular a la revisión del Artículo 9 de la Constitución —aún bajo restricciones muy rígi-

das— por parte de colectivos que se definen como pacifistas, pero que quizá sean pasivistas: no quieren que ningún japonés muera en combate en el extranjero y les preocupa relativamente poco las personas asesinadas en otros países. Son amigos de los muros, que desde la derecha y desde la izquierda, se oponen a las políticas de Abe y de una forma tangencial e inesperada, se apoyan en Trump para sugerir que Japón debería restringir la inmigración o salir del TPP, por ejemplo.

Ciertamente, Trump ha reavivado el debate nacional acerca del futuro la política exterior y de seguridad japonesa. ¿Debe seguir sustentada en la alianza con EEUU? ¿O es momento de reducir esa dependencia? En cualquier caso, ¿cómo garantizará el Japón su paz y su prosperidad? Los japoneses tienen que preguntarse cuál es la mejor forma de sobrevivir en este mundo cambiante y cada vez más violento. Los debates actuales sobre la revisión de la Constitución deberían centrarse también en este punto, de forma realista y honestamente egoísta, pero sin olvidar que, como dice Robert Frost en su poema *Mending Wall*, “algo hay que no es amigo de los muros” y que acaba por derribarlos. Tal vez en el fruto de estos debates, resida la singular contribución que Japón puede hacer al mundo, en la era de los muros.

Japón ha anunciado un plan para aceptar aproximadamente 200.000 inmigrantes al año

NAOYUKI AGAWA,

Abogado y catedrático de la Universidad Keio



EL IMPACTO DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN LOS SISTEMAS

PÍLDORA DE OPINIÓN

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Las revoluciones industriales no afectan solo a la tecnología. A lo largo de la historia, estas han transformado sistemas enteros, económicos, políticos, sociales y medioambientales. La Cuarta Revolución Industrial no es diferente. Su impacto se está haciendo visible: las tecnologías emergentes crean nuevas formas de movernos, comunicar, crear valor y distribuir oportunidades. El reto más importante que todos tenemos que afrontar hoy es garantizar que estas oportunidades, así como las externalidades y riesgos que inevitablemente surgirán, se distribuyan de modo equitativo.

Todas las revoluciones industriales se han edificado sobre las anteriores. Las tecnologías que impulsan la Cuarta Revolución Industrial –desde los nuevos materiales y los nuevos enfoques a la edición genómica hasta la inteligencia artificial y las neurotecnologías– son inimaginables sin las comunicaciones digitales y la potencia de almacenamiento y procesamiento propias de la Tercera Revolución Industrial.

Durante las cinco últimas décadas, los avances tecnológicos en el campo digital han cambiado completamente la forma en que nos comunicamos, cómo comerciamos y cómo vemos el mundo. La Cuarta Revolución Industrial promete basarse en dichos avances para transformar aún más las industrias existentes, así como los modelos económicos y sociales.

Tómese como ejemplo la forma en que una combinación de conocimientos digitales y nuevas técnicas de edición de genes está comenzando a transformar la salud humana, la producción de alimentos y la producción química. El método CRISPR-Cas9 es el avance más reciente en las técnicas de edición de genes. El impacto de CRISPR en los sistemas se ve multiplicado por el hecho de que el coste de secuenciar un genoma humano completo ha pasado de mil millones de dólares en 2003 a menos de 1.000 dólares en 2016 y la previsión es que pronto sea de solo 100 dólares. Gracias a esta reducción en los costes, miles de laboratorios y emprendedores de todo el mundo están adoptando nuevos enfoques, y el reto será repensar los sistemas agrícolas, químicos, médicos y de seguros, y la oportunidad de crear nuevas industrias, modelos empresariales y valor para personas de todo el mundo.

Simultáneamente el mundo está asistiendo a una transformación de los sistemas de movilidad. Una combinación de sensores más pequeños, ligeros, baratos y eficientes, una conectividad ubicua, unos procesadores más potentes y unos algoritmos más inteligentes, significa que la próxima revolución en el transporte no es solo cuestión de quién está al volante. La posibilidad de unos vehículos eléctricos, compar-

tidos y sin conductor promete reconfigurar espacios urbanos y patrones de movilidad.

La historia nos enseña que todas las revoluciones tienen ganadores y perdedores. Un deber urgente, por lo tanto, es garantizar que tantas personas como sea posible sean empoderadas y participen en un futuro guiado por unas tecnologías cada vez más sofisticadas, una tarea exigente si tenemos en cuenta que la inversión necesaria para entender las complejidades de las innovaciones es cada vez mayor.

La participación no es solo algo “bueno de por sí”, ni un mero guiño a los principios democráticos. Los sistemas tecnológicos no son *per se* neutros; expresan y reflejan la ética y las intenciones de sus diseñadores. Existen incluso algoritmos racistas y cuadricópteros militarizados. En un contexto político dividido, de baja confianza y desigualdad creciente, es esencial encontrar la forma de que cada vez más ciudadanos sean capaces de inventar juntos el futuro, en vez de arriesgarse a uno dominado por la tecnología que les vulnerabilice, excluya o imponga costes.

Garantizar que la Cuarta Revolución Industrial sea humano-céntrica significa que se deben diseñar sistemas basados en valores humanos compartidos

Por suerte, hoy existe una ventana de oportunidad para actuar. Los gobiernos de todo el mundo están actualizando sus políticas sobre el uso de la inteligencia artificial en la justicia criminal, y el uso civil de los *drones*. Mientras, los emprendedores y las grandes corporaciones están muy ocupados diseñando e invirtiendo en productos cuyo impacto acumulativo cambiará la forma en que nos vemos a nosotros mismos.

Garantizar que la Cuarta Revolución Industrial sea, primero y sobre todo, humano-céntrica significa que los decisores políticos, los líderes tecnológicos y los ciudadanos han de colaborar y codiseñar sistemas basados en valores humanos compartidos. Este es al mismo tiempo el reto decisivo y la gran oportunidad de nuestro tiempo: encontrar la forma de que los sistemas emergentes de la Cuarta Revolución Industrial puedan potenciar el bien común, preservar la dignidad humana y salvaguardar el entorno para las generaciones futuras.

NICHOLAS DAVIES

Director de “Sociedad e Innovación” del Foro Económico Mundial de Davos



LAS IDAS Y VENIDAS DEL GOBIERNO Y EL ELN

PÍLDORA DE OPINIÓN

PROCESO DE PAZ

El año 2016 fue sin lugar a dudas uno de los mejores años para el conflicto en Colombia. Si todo sale según lo acordado, la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP será uno de los hitos más importantes en la historia del país. Sin embargo, son múltiples los retos que hay que superar antes de declarar el fin del conflicto. Uno de ellos es asegurar el éxito del actual proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A pesar de las buenas intenciones que el gobierno colombiano y el ELN hayan podido tener, el 2016 pasará a ser recordado como el año de idas y venidas entre las partes. Por un lado, el 2016 abrió el capítulo del ELN con el anuncio de la publicación de la agenda de negociación y la voluntad de emprender una fase de conversaciones públicas en Ecuador, Chile, Venezuela y Cuba. Sin embargo, a medida que el año ha ido pasando, el acto de buena voluntad se fue diluyendo en una sucesión de secuestros, liberaciones y atentados por parte del ELN que puso en peligro en varias ocasiones el desarrollo del proceso y la evolución del proceso de paz con las FARC-EP en La Habana.

La agenda negociadora entre el gobierno de Colombia y el ELN se caracteriza por recuperar algunos de los puntos de la agenda con las FARC-EP en aras de asegurar una coordinación de las mesas pero también por claras diferencias. En concreto, los puntos sobre la participación política, el punto del fin del conflicto y de la implementación de lo acordado hacen referencia a las reformas estructurales que deberá emprender el país en términos económicos y políticos recuperando el enfoque territorial de lo acordado en La Habana. Ahora bien, el

punto sobre la “participación de la sociedad en la construcción de paz” establece la necesidad de hacer de esta negociación un proceso participativo en el que la sociedad colombiana —y las regiones en particular— sean un actor más en la mesa por medio de sus propuestas. El problema es que esta agenda no establece los mecanismos ni las metodologías a través de los cuales se llevará a cabo este proceso, generando ya algunas reticencias entre los expertos del país. Otra de las diferencias es que esta agenda establece es la dedicación de un punto al tema de la “pedagogía para la paz”. Un aspecto que fue crucial y que presentó debilidades durante el proceso con las FARC-EP.

2017 deja no solo el reto de la implementación de lo acordado con las FARC-EP sino el desarrollo de un nuevo proceso de paz con el ELN

Establecida la agenda, el inicio de las conversaciones se fue posponiendo durante todo el año. Para el gobierno colombiano, la práctica de los secuestros supuso la línea roja que evitó iniciar las conversaciones públicas. Para el ELN, los secuestros le servían erróneamente para aumentar su margen negociador. Aunque estos episodios de idas y venidas aún ponen en duda el futuro del proceso con el ELN, los avances de la mesa de negociaciones de las FARC-EP durante el 2016 también supusieron un parámetro de presión para ambas partes. Para el ELN el respeto

a lo acordado con las FARC-EP abría una ventana de oportunidad para iniciar una negociación en un momento de desventaja táctica. Para el gobierno, el reto estaba en la dificultad de asegurar y coordinar dos mesas de negociación paralelas.

Así pues, aunque durante el 2016 el gobierno y el ELN no dejaron de hacer anuncios de buena voluntad, el año cerró con una novedad, el nombramiento de los integrantes en la mesa negociadora y la reactivación de una mesa pública. Sin embargo, las dilataciones en el proceso con el ELN deja en 2017 no solo el reto de la implementación de lo acordado con las FARC-EP sino el desarrollo de un nuevo proceso de paz con el ELN en plena campaña electoral para las presidenciales, previstas para mayo de 2018.

PAULA DE CASTRO,

Investigadora y gestora de proyectos en CIDOB



¿ADIÓS A LA CRISIS? SÍ... PERO NO

PÍLDORA DE OPINIÓN

CRISIS INTERNACIONAL

Parece extenderse la opinión de que “estamos saliendo” de la crisis iniciada a finales de 2008. Incluso algunos expertos apuntan, a comienzos de 2017, que durante 2016 hemos dejado atrás la crisis. Habrá que ver si la tendencia se confirma. Pero hay un hecho de difícil refutación a escala europea e incluso internacional: aun admitiendo que se ha salido de la crisis, ello no significa que “volveremos a estar como antes (de la crisis)”. En absoluto; pues con el tiempo veremos que hemos asistido a un reajuste estructural de proporciones históricas, a escala global. En el momento actual convergen algunos indicadores de tipo macroeconómico que confirmarían el final de la crisis, pero, también, con una serie de indicadores de costes sociales de grandes proporciones, cuyo monto a largo plazo aún no estamos en condiciones de precisar.

Uno de los peores síntomas de esta deriva de desajuste social y desvanecimiento de lo político, es el de la fragmentación de los “campos de reacción y de protesta” protagonizados por la ciudadanía, la emergencia de un temible “populismo trasnacional” y las consecuencias de ello sobre la consistencia de nuestros sistemas democráticos, tal y como los hemos conocido en Europa occidental desde 1945.

En suma, el lado más oscuro de la presente crisis es haber instalado en el ambiente una turbia dinámica de acusaciones y sospechas de unos sectores sociales contra otros, pero añadiendo, muy sutilmente, la melodía de fondo: “de todas maneras, no se puede hacer nada”. Es decir, no se consigue ni establecer ni restablecer el mínimo de reacción social colectiva transversal para establecer contrapesos. ¿Dónde están los mercados? ¿De dónde viene su legitimidad? Médicos y profesores, parados y empleados, jóvenes (ien España, se llegó a alcanzar el 45% de paro entre los menores de 30 años!) piensan que la protesta debe ir contra el Gobierno, los gobiernos, pero, ¿es verdad?, ¿es

realista? ¿Es el Gobierno (o los gobiernos) el creador (o los creadores) de la crisis? Sí y no. Pero sobre todo, ¿pueden los gobiernos dominar la crisis y sobre todo sus efectos sociales? La crisis iniciada en 2008 es mundial, sus causas son globales, y durante años la indignación creciente, dispersa, fragmentada, frente a un fenómeno como el que está sucediendo debería ser global, internacional. Y hemos ido pasando del movimiento de los “indignados” del 15-M a las expresiones políticas del tipo Podemos o Syriza. Sin embargo, lo que ha acabado cristalizando al final son movimientos ultraconservadores, ultranacionalistas-estatalistas, que abonan el racismo, la xenofobia y que tienen una vigorosa base social que recuerda lo peor de los años treinta en Europa.

En última instancia, ¿han muerto las ideologías? ¿Seguro que no está ganando terreno solo lo peor de ellas? El problema es que las ideologías nunca mueren, siempre las ha habido y siempre las habrá, y como la energía (según las leyes de la física), ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Pero lo propio de toda sociedad moderna es

dotarse de instituciones, normas y formas de legitimidad social, y que las contradicciones sociales entre clases, grupos, facciones, etc, transcurran por cauces no destructivos. Y esto está siendo pulverizado por la crisis, y en concreto por las consecuencias que la crisis está teniendo sobre nuestros sistemas políticos y sociales, así como sobre nuestro “contrato social”. Hemos de repensar profundamente una de las mayores mutaciones de los últimos veinte o treinta años: la verdadera complejidad de nuestras sociedades contemporáneas, sus líneas de fractura, sus líneas de confrontación, la fragmentación de sus campos de

reivindicación, y sobre todo, cómo han cambiado sus múltiples modos de representación de intereses.

El lado más oscuro de la crisis es haber instalado en el ambiente una turbia dinámica de acusaciones y sospechas entre sectores sociales



PERE VILANOVA

Catedrático de Ciencia Política (UB) e investigador sénior asociado de CIDOB

GUERRAS PROLONGADAS Y CONTENDIENTES ASIMÉTRICOS: EL RETO DE LAS CRISIS HUMANITARIAS ACTUALES

PÍLDORA DE OPINIÓN

CRISIS HUMANITARIAS

Si observamos las crisis humanitarias que tienen lugar hoy –desde los horrores de Siria, Irak y el Yemen, hasta las masivas secuelas de la violencia en el norte de Nigeria o los perniciosos efectos del prolongado conflicto en Afganistán–, nos hacemos con un panorama sombrío, de violencia irrefrenable, sufrimiento humano desmedido y donde la respuesta humanitaria ha sido, tristemente, inadecuada.

Tampoco debemos sobreestimar la complejidad de las crisis que se derivan de estos conflictos, ni la escala épica de necesidades humanitarias que producen; al contrario, debemos recordar que muy pocos de los desafíos que enfrenta actualmente la acción humanitaria son genuinamente nuevos. En el tramo de los últimos cien años –que abarcan dos Guerras Mundiales, la descolonización y las guerras de liberación, la Guerra Fría y la fragmentación posterior, el 11-S y la “guerra global contra el terrorismo” y, recientemente, el ascenso del yihadismo radical y el relato del “contra-extremismo violento”–, la relevancia y la efectividad de la acción humanitaria han sido continuamente puestas a prueba. Masivas catástrofes humanitarias, que sobrepasan la capacidad de respuesta y los recursos disponibles, la politización de la ayuda humanitaria o la erosión de los principios humanitarios son solo dos de los problemas recurrentes.

La “novedad” de la guerra moderna y de sus consecuencias humanitarias reside principalmente en su particular combinación de factores como, quién lucha, cómo lo hace y por qué, y de resultados de ello, cuál es su catastrófico impacto sobre las poblaciones civiles. Redes complejas de contendientes asimétricos, muchos de ellos irrespetuosos con la legislación internacional humanitaria, libran hoy guerras más prolongadas, mortíferas, fragmentadas y urbanizadas que en ningún otro momento histórico.

Las consecuencias humanitarias de estos conflictos perdurarán durante generaciones, no solo por la pérdida de vidas humanas, medios de vida e infraestructuras, sino también por sus daños psicológicos, menos visibles. Asimismo, la violencia armada crónica en grandes ciudades –que a menudo va de la mano del crecimiento urbano y demográfico explosivo, las migraciones y desplazamientos masivos y las presiones socioeconómicas que conllevan– tienen también consecuencias humanitarias profundas, que pueden ser más letales y de mayor alcance que los propios conflictos armados. Nos referimos a masas de personas que huyen de la violencia y del conflicto armado, del cambio climático, de la escasez de alimentos o, en muchos casos, de una combinación de más de uno de esos factores.

En América Latina, la lista de estos problemas humanitarios complejos es larga. Colombia es un ejemplo; si bien el acuerdo de alto el fuego y las negociaciones de paz de 2016 son pasos adelante en pos del final del conflicto armado, la violencia armada persiste y sigue siendo un grave problema, así como las amenazas, los desaparecidos, la violencia sexual, o las minas antipersonales. De hecho, en varios lugares de América Latina el fenómeno de la violencia armada –vinculada a menudo al tráfico de drogas– provoca la muerte de miles de personas cada año. También el fenómeno de la emigración, particularmente en la ruta que transita por Centroamérica y México, es un serio problema humanitario.

Los retos que todo esto plantea a la respuesta humanitaria son múltiples. Para organizaciones como el CICR es indispensable adoptar un enfoque neutral, imparcial e independiente para poder aproximarse a las personas en medio de un conflicto armado, a fin de protegerlas mejor, y para ayudarlas comprometiendo a todas las partes implicadas. Más allá de salvar vidas y de satisfacer necesidades perentorias, es cada vez más necesario mantener las infraestructuras y los servicios básicos en entornos frágiles, proporcionar ayuda a diferentes tipos de comunidades y, a largo plazo, contribuir al desarrollo económico.

Si bien los principios son decisivos en los esfuerzos para llevar a cabo una acción humanitaria efectiva y relevante, con una gama cada vez más diversa de implicados tanto del sector público como del privado, solo mediante una colaboración inteligente podemos confiar en responder de un modo eficaz a la multitud de necesidades humanitarias que están surgiendo en los conflictos armados actuales y en otras situaciones de violencia.

Redes complejas de contendientes asimétricos, muchos de ellos irrespetuosos con la legislación internacional humanitaria, libran hoy guerras más prolongadas

PETER MAURER

Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

¿PUEDE RUSIA IMAGINAR UN FUTURO POST-COMBUSTIBLES FÓSILES?

PÍLDORA DE OPINIÓN

RUSIA

Nadie se imagina un futuro post-combustibles fósiles para Rusia y, mucho menos, los propios rusos. Los cleptócratas abandonan el país y esconden su botín en lugares seguros, países con la legalidad suficiente para evitar la confiscación y donde políticos maleables les brindan protección. Es precisamente la exportación de capitales y la compra de residencias y de activos fuera de Rusia lo que revela que gran parte de estas "élites económicas" no confían en retener el poder.

La era de la energía fósil sucumbirá y los "petroestados" llegarán a su ocaso. Los progresos en eficiencia energética, las energías renovables y los sistemas inteligentes de almacenamiento y gestión de la energía han hecho que el suministro de energía limpia, segura y sostenible, sea más barato que la energía fósil y nuclear. La rapidez de los avances tecnológicos sigue disminuyendo el coste de las nuevas energías, y expulsa del mercado al carbón, al petróleo y al gas metano fósil. El valor de las exportaciones rusas de combustibles fósiles caerá más deprisa que su volumen, dejando sin más botines a sus élites cleptócratas. Esto dificultará el sostenimiento de la actual estructura de poder, lo que puede empeorar la represión.

En 2016, Rusia declaró su voluntad de invertir en su futuro post-combustibles fósiles y promover la industria de la energía eólica. Pero sin un sistema de innovación civil y aun sirviéndose del talento que alimenta su industria aeroespacial, nadie espera que Rusia gane terreno hasta alcanzar a la industria eólica global, altamente competitiva. Rusia tampoco puede igualar los avances en la investigación y el almacenamiento de la energía solar, ni asumir el reto relativamente fácil de desarrollar sistemas de suministro eléctrico directo de bajo voltaje, baratos e inteligentes, y que puedan funcionar fuera de la red eléctrica. La estructura energética post-fósil o bien será importada o quedará empantanada a causa de las deficiencias técnicas.

Rusia no tiene ninguna propuesta solvente para la era post-fósil

Rusia no tiene ninguna propuesta solvente para la era post-fósil, aunque aún contará activos: reservas de oro, la industria minero-metalúrgica, su poderío militar o la acción de hackers. Gracias a todo ello, Rusia puede convertirse en una suerte de compañía minera con un ejército y armas nucleares, y aún con ello, cautiva de la maldición de los recursos. La innovación existirá en sectores estratégicos aunque marginales, como el del arte de la piratería informática con afán de lucro, una actividad económica parasitaria. Rusia puede exportar inestabilidad, pero esto no tiene ningún valor añadido global; no es un proyecto rentable para la era post-fósil.

El ejército de Rusia, con un hardware muy envejecido, está tensionado por problemas domésticos en Chechenia, en Transnistria, por guerras de ocupación en Georgia y Ucrania, y por el desgaste que produce el compromiso militar para mantener a Bashar al-Assad en el poder en Siria.

Esto dificulta la inversión en un futuro positivo y acelera la decadencia del país. Una guerra híbrida que combine activos y capacidades militares y no militares —un área en la que Rusia ha sido pionera— puede posponer el desplome, aunque no detenerlo.

En la nueva geopolítica de la energía renovable, la Rusia post-fósil no tiene una propuesta de valor. Su sociedad, insuflada de naciona-

lismo, no abraza la diversidad inclusiva ni goza del atractivo de las sociedades abiertas occidentales. Con un pequeño grupo de personas lo suficientemente valientes como para cuestionar unas ideas políticas mal concebidas, el país no puede evitar cometer errores. Rusia está en un proceso de decadencia demográfica debido a una sanidad deficiente y a la muerte prematura. Los que pueden hacerlo, exprimen el país y envían a sus hijos al extranjero; el propio Vladimir Putin les ha dado el ejemplo.

"L'empire éclaté": casi 40 años después de que el análisis de Hélène Carrère d'Encausse predijera el colapso del imperio soviético, podemos anticipar la decadencia post-fósil de Rusia. No será agradable, y todos los demás países deberían prepararse para un comportamiento cada vez más errático, una erosión del Estado en el centro y en la periferia de Rusia, y un elevado riesgo de confrontación militar. La adicción al petróleo es difícil de curar, y Rusia ni siquiera está intentando desengancharse.

R. ANDREAS KRAEMER,
IASS Potsdam y Ecologic Institute



EL APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: UN OPTIMISMO MENGUANTE

PÍLDORA DE OPINIÓN

COLOMBIA

Desde Aristóteles se viene repitiendo, con matices: “más importante que ganar una guerra o acordar un fin de hostilidades es organizar y construir la paz posterior”. Esa paz no se refiere a la armonía perfecta o a la ausencia de conflictos, inexistente en nuestro mundo, sino a aprovechar el proceso de hacer las paces e implementar lo acordado para abrir una ventana de oportunidad. Es decir, poner en marcha una transición y cambios que permitan a un país y una sociedad gestionar los conflictos sociales, de manera que se interioricen tanto que se garantice la no repetición de un pasado violento y un nivel bajo de violencia cuando menudeen y reaparezcan, como suele ocurrir, nuevos conflictos. De ahí que, en comparación, todos los actores directos del largo proceso (de 10 a 20 años) que va de hacer las paces a construir una paz duradera transiten por diferentes estados de ánimo.

En Colombia, en el caso de la comunidad internacional, en sentido lato (con actores privados y públicos interesados en el proceso), ese estado de ánimo ya ha oscilado: del seguimiento con optimismo y el apoyo constante que han facilitado las negociaciones, a la preocupación prudente que se manifiesta desde principios de octubre (tras la victoria del No en el plebiscito). Eso ha pasado en los pocos meses que van desde el desaliento o “plebitusa”, a cuando se concedió el Premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos para impulsar una segunda negociación, hasta el momento en que escribo, cuando la vía rápida está en funcionamiento y se acaba de aprobar en trámite legislativo la jurisdicción especial de paz.

Las razones para el optimismo son claras: Colombia es la única buena noticia de la comunidad internacional en los últimos años. El optimismo ha sido compartido por muchos actores y ha tenido manifestaciones diversas. Baste señalar el compromiso con la financiación internacional a la implementación, pese a que Colombia es un país de renta media-alta, y el inusitado y reiterado apoyo unánime del Consejo de Seguridad a la verificación y seguimiento del proceso.

Existe un riesgo de que la enorme ventana de oportunidad se sustituya por una transición lampedusiana

Más incipiente es la preocupación prudente, heterogénea, por los motivos que la alimentan y por su expresión diferenciada en cada actor. Es prudente en un doble sentido: porque todavía no empaña la sensación de optimismo; y porque no se atreve aún a manifestarse con claridad. Cuatro son al menos las razones que la nutren. Primero, comprobar que, acabado el subidón de adrenalina del éxito (en dos fases), la realidad se impone: el acuerdo es ambicioso, complejo técnica y políticamente y exige muchas negociaciones (aunque se llamen seguimiento) para poner en marcha más de 550 compromisos. Todo ello lastrado por la falta de recursos financieros (cuasi absoluta en 2017, algo mejor en 2018), por la maraña burocrática, la (insuficiente aún) dirección institucional unificada en el Ejecutivo y por la apatía y desconfianza de la población (más del 60% de la ciudadanía no confía en que se cumpla lo acordado). Segundo, por la polarización constante entre de-

tractores y partidarios del acuerdo, que imposibilita un bloque político y social amplio y plural que impulse la transición y el cambio, un fenómeno que agudiza la cercanía de las elecciones presidenciales de 2018. Tercero, la lentitud y problemas de implementación de los primeros pasos acordados, evidente en el proceso de creación de las zonas veredales de concentración y en el inicio del desarme. El resultado; erosión de la confianza y quejas de las partes y desencuentro entre ellas, incluyendo la parte internacional del mecanismo de verificación, y en el Gobierno sobre la necesidad de revisar el compromiso de 180 días para su imple-

mentación. Objetivamente, salvo aceleraciones imprevistas, hoy parece inasumible. Cuarto, las dificultades de gestión de la violencia directa: con mesas formalizadas de negociación con el ELN, existe cierto pesimismo sobre el posible incremento de efectivos de las FARC-EP que no entren en la desmovilización, o acaben reincidiendo. Y, en suma, por el difícil control de la violencia en muchas zonas del país, como muestra el asesinato constante de líderes sociales o las luchas por el control de zonas de Chocó con alto protagonismo de fuerzas paramilitares.

Para concluir, todo ello aconseja ser muy respetuoso y solidario, pero menos prudente en la enunciación pública de los problemas. Como académico, lo tengo claro: existe un riesgo de que la enorme ventana de oportunidad se sustituya por una transición lampedusiana: que todo cambie para que nada sustantivo cambie realmente. Aún hay tiempo y espacio para impedirlo.

RAFAEL GRASA,

Profesor de Relaciones Internacionales de la UAB, primer presidente del ICIP (2008-2016)



LA APUESTA GEOPOLÍTICA DE RODRIGO DUTERTE: UN BAILE PELIGROSO CON LOS GIGANTES

PÍLDORA DE OPINIÓN

FILIPINAS

Con tan solo seis meses en el cargo, el contundente presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha llevado a cabo una reconfiguración de la política exterior del país sin parangón en gobiernos anteriores. Filipinas, pura y llanamente, no ha tenido nunca un líder como él. Duterte es el primer presidente filipino originario de la isla meridional de Mindanao, la más pobre e inestable del país y se autodefine como un "socialista". También ha jurado desplegar una política exterior realmente "independiente", lo que para él significa menos dependiente de Estados Unidos y más comprometida con centros de poder alternativos.

Tan pronto como sus aliados y las Naciones Unidas empezaron a ser críticos con su falta de respeto a los derechos humanos, el líder filipino empezó, primero retóricamente pero más tarde de manera operativa, a desligar a Filipinas de sus tradicionales aliados y en un intercambio cada vez más duro con Occidente y la comunidad internacional; a raíz de su campaña de "tierra quemada" contra las drogas ilegales, no tuvo reparos en insultar de una tacada a Barack Obama (la Casa Blanca), a Bruselas (la UE) y a Ban Ki-Moon (la ONU). Apodado ya por algunos como el "Trump de Oriente", ha roto un día sí y otro también con la senda diplomática y estratégica de Filipinas, tomando por sorpresa tanto a partidarios como a detractores.

En la misma jugada, ha tendido una rama de olivo a sus antiguos rivales. Tan pronto como llegó al gobierno, Duterte dejó claro que no quería confrontación con China. En consecuencia, dejó a un lado la histórica sentencia a su favor del Tribunal de La Haya sobre la disputa en el Mar del Sur de la China. A cambio, una China exultante le ofreció miles de millones de dólares en acuerdos comerciales e inversiones, incluyendo un acuerdo de venta de armamento a Manila que se prolongará varias décadas. Sin embargo, el "giro al este" de Duterte no se

ha limitado únicamente a China. Por primera vez en la historia moderna, barcos de guerra rusos han visitado en tiempos de paz el puerto de Manila, y el presidente filipino ha sugerido una alianza militar con Moscú. Es más, en diversas ocasiones, Duterte ha llegado a afirmar que Putin es su "héroe favorito" y podría visitarlo en 2017 para culminar un acuerdo de asociación estratégica. En 2017, Filipinas presidirá la ASEAN, lo que llevará a Duterte a ser uno de los invitados a la Cumbre Anual de los BRICS en China.

Un análisis reposado de política exterior sugiere que lo que Duterte persigue es más una redefinición estratégica que una verdadera ruptura revolucionaria con el pasado. Está adoptando una estrategia de "equilibrio equi-lateral", enfrentando a una superpotencia con la otra y, con ello, ganando más margen de maniobra para su país.

Hasta el momento y para ser justos, las amenazas de Duterte a EEUU no han sido solo aspavientos: las patrullas conjuntas en el Mar del Sur de China han sido canceladas, y varios ejercicios militares conjuntos han sido pospuestos.

De todos modos, los cimientos de la relación bilateral, articulada en torno al Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada (2014) y el Tratado de Defensa Mutua de 1951, permanecen intactos. Para contrarrestar la creciente influencia de Beijing sobre Manila, Japón, un aliado clave de los norteamericanos, ha ofrecido incentivos económicos, y un compromiso diplomático proactivo bajo la administración de Shinzo Abe. No hay nada grabado en piedra, y la situación es susceptible de cambio.

El acercamiento a China, ha advertido Duterte, también podría revertir bruscamente si Beijing realiza acciones agresivas o unilaterales en el Mar del Sur de China contra sus intereses. La llegada de Trump a la Casa Blanca podría augurar menos presión en materia de derechos humanos y quizá más posibilidades de volver al acercamiento. Lo cierto es que casi en solitario, Duterte ha situado a Filipinas en el mapa geopolítico como nunca antes lo había estado, y las superpotencias sonean la buena voluntad del hombre fuerte de Manila.

Un análisis reposado de política exterior sugiere que Duterte persigue más una redefinición estratégica que una verdadera ruptura con el pasado

RICHARD JAVAD HEYDARIAN,

Profesor de Ciencias Políticas y analista de relaciones internacionales del canal de noticias ABS-CBN News y del *Manila Bulletin*



POLÍTICA EXTERIOR DE EEUU: ¿ROMPIENDO CON EL PASADO?

PÍLDORA DE OPINIÓN

ESTADOS UNIDOS

La política exterior tuvo poco protagonismo en la campaña presidencial de 2016, pero desde el primer día de la Administración Trump se ha evidenciado que será una prioridad. Y está claro que la política que llevará a cabo el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos constituirá una nítida ruptura con el pasado.

Dicho esto, ningún presidente entra en el despacho oval con un lienzo en blanco. Hereda un nutrido conjunto de compromisos firmados y obligaciones internacionales, y políticas que en muchos casos han estado en vigor durante años o décadas. También hereda los soldados norteamericanos, junto con miles de diplomáticos, funcionarios y espías. Y tiene el respaldo de la mayor y más innovadora economía del mundo, fuertemente dependiente de vínculos globales.

El presidente entrante también hereda una “bandeja de entrada”, y la de Trump es gigantesca. Incluye un Oriente Medio con multitud de conflictos, estados fallidos y rivalidades profundas; una Europa enfrentada a incertidumbres respecto a su futuro económico, político y de seguridad mucho mayores que las que ha tenido en ningún otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial; una Asia con una China ascendente y una Corea del Norte que pronto tendrá armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales; y una serie de retos globales, desde el cambio climático al ciberespacio, en los que los problemas evolucionan más rápido que la capacidad del mundo para gestionarlos adecuadamente.

Es imposible saber qué hará el presidente Trump, pues todos los presidentes aprenden durante su mandato. Todavía tiene que nombrar a la mayoría de altos funcionarios con los que trabajará. Pero sí se intuye cuál será el enfoque que probablemente adoptará ante el mundo. Está claro que desaparecerá el tradicional respaldo que daba Estados Unidos a los tratados regionales y globales de libre comercio. No está tan claro qué tipo de acuerdos comerciales más limitados pueden sustituirlos, ni en qué aspectos diferirán. Probablemente se

producirá una intensificación de la lucha contra el terrorismo. Una herramienta que ya ha sido anunciada es la erección de nuevas barreras para frenar la entrada de refugiados y de otros inmigrantes en EEUU; el problema de esta política es que puede llegar a ser muy contraproducente, porque puede provocar la enemistad de la comunidad musulmana norteamericana (y la radicalización de algunos individuos), al tiempo que complicará los intentos de Estados Unidos de colaborar con otros gobiernos en la lucha antiterrorista.

Es posible anticipar que continuarán los ataques militares contra los terroristas en Oriente Medio y en otros lugares. No está tan claro qué se hará, por ejemplo, después de la liberación final de Raqqa en Siria. Ahora bien, ¿con quién colaborará Estados Unidos para asegurar las zonas liberadas, y qué tipo de procesos políticos respaldará en Siria? Lo que sí parece probable, es que la era de los intentos norteamericanos de reconstruir esta región han llegado a su fin.

Hay evidencias del probable intento de establecer una relación más positiva con Rusia; lo que esto puede significar para Ucrania y para la OTAN está por ver. Confiemos que la apertura diplomática irá acompañada de medidas encaminadas a garantizar la seguridad a sus aliados, y de que cualquier atenuación de las sanciones esté condicionada a una mejora en el comportamiento de Rusia. Confiemos también que la nueva Administración evitará una crisis con China a causa de Taiwan. La política de “una sola China” ha permitido a Washington y a Beijing establecer

una cooperación selectiva que no ha impedido a Taiwan prosperar económica y democráticamente. Esto es un argumento a favor de continuar esa estrategia, junto con el compromiso de evitar una confrontación respecto al Mar del Sur de China o por cuestiones comerciales, y para centrar la cooperación en atajar la amenaza de Corea del Norte.

Lo que es obvio es que en este momento hay más preguntas que respuestas. Pero también es obvia la necesidad de asumir que la actuación en el pasado no proporciona una buena guía para valorar el futuro. “America First” promete ser más que un eslogan; es un claro indicio de que los cambios, más que la continuidad, serán la característica principal de esta nueva era de la diplomacia norteamericana.

Desaparecerá el tradicional respaldo de EEUU a los tratados regionales y globales de libre comercio

RICHARD HAASS,

Presidente del Council on Foreign Relations y autor del libro *A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order*, publicado por Penguin Press.



IRÁN: ENTRE LA NORMALIZACIÓN Y EL CONFLICTO

PÍLDORA DE OPINIÓN

IRÁN

En el curso de 2016 la sociedad iraní continuó su camino de modernización, adelanto cultural y apertura al mundo por parte de una clase media que, a diferencia de la realidad de los demás países de la región, es muy amplia, y no solamente en la capital, Teherán. El gobierno centrista de Rohaní ha mantenido su proyecto de prudente reforma en vista de las elecciones presidenciales de mayo de 2017, con bastante confianza en la posibilidad de recibir un segundo mandato.

Pero al mismo tiempo, el crédito y la popularidad que Rohaní se ha ganado corren el riesgo de esfumarse como consecuencia de una desilusión muy extendida. Es cierto que era poco realista esperar que el acuerdo nuclear produjese resultados económicos inmediatos, pero hay algo más serio. Mientras que los iraníes han cumplido al pie de la letra los compromisos que derivan del acuerdo, los americanos, como se diría en una expresión inglesa para denotar cierta dejadez, "arrastran los pies", y no han despejado el camino para una normalización en el campo comercial y financiero. Sin duda Obama ha empujado el acuerdo nuclear que concebía como punto de partida de un cauto proceso de normalización, y no como un hecho aislado solamente necesario para impedir la adquisición de armas nucleares por parte del régimen iraní. Pero la mayoría del Congreso estadounidense no comparte la visión del presidente, e incluso después de la firma del acuerdo nuclear ha habido una proliferación de iniciativas parlamentarias a favor de un aumento de medidas sancionatorias contra Irán. A eso se añade, ahora, la certidumbre que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca va a empeorar las cosas, en el sentido del aumento de las tensiones... y sin excluir incluso el peligro de un conflicto. Con Trump en la Casa Blanca todas las opciones están sobre la mesa.

Pero si eso es así, la estrategia de prudente reforma que caracteriza a Rohaní y su equipo van a tener un muy dudoso futuro. Los conservadores más radicales –que habían criticado el acuerdo afirmando que era un error fiarse de los americanos– han aprovechado inmediatamente la ocasión para subrayar que los hechos les están dando la razón y que, como ha dicho el ayatolá Jamenei, Donald Trump "revela lo que es realmente América...".

Mientras tanto, los conservadores más radicales en el interior del régimen están jugando muy sucio. Por ejemplo, es inquietante que las recientes detenciones de ciudadanos con doble nacionalidad, sobre todo irano-americanos, hayan sido obra, no del Ministerio del Interior o de los servicios de inteligencia, sino de los Guardianes de la Revolución. Este

cuerpo es un verdadero contrapoder que teme una normalización que podría amenazar sus intereses económicos y su rol en política exterior, donde la lucha contra la organización Estado Islámico (EI) y el apoyo a al-Assad le están dando un prestigio que hasta podría convertirse en poder político directo: al general Soleimani, responsable de la "rama exterior" del Cuerpo, se le atribuye un importante potencial como candidato presidencial.

**Con Trump en la
Casa Blanca todas
las opciones están
sobre la mesa**

División interna en el régimen, contraste entre una sociedad civil siempre más desarrollada y un régimen que no quería la guerra pero que le tiene miedo a la paz, vuelta a la hostilidad americana después del paréntesis Obama, incertidumbre sobre el futuro de Rohaní y de su proyecto político... El año 2017 amenaza con ser bastante crítico para Irán, un país con un potencial extraordinario pero que no alcanza a liberarse del hándicap de un régimen teóricamente revolucionario, pero de hecho profundamente conservador.



ROBERTO TOSCANO

Investigador sénior asociado, CIDOB

COLOMBIA, ¿PAZ CON JUSTICIA?

PÍLDORA DE OPINIÓN

PROCESO DE PAZ

El proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia ha buscado no solo poner fin a un conflicto armado largo y con altos niveles de victimización, sino además lograr una paz con justicia para las víctimas.

Este ambicioso propósito llevó a adoptar un complejo y sofisticado mecanismo de Justicia Transicional (JT), que tiene 7 innovaciones significativas: 1) espacios para que las víctimas expresaran su visión durante las negociaciones; 2) una visión holística de la JT pues esta no se redujo a la justicia penal, sino que incluyó mecanismos para satisfacer también el derecho a la verdad (una comisión de la verdad) y a la reparación de las víctimas; 3) reconocimiento de los orígenes sociopolíticos del conflicto colombiano, para lo cual se adoptó una amplia amnistía para los llamados delitos políticos y conexos, como la rebelión o las muertes ocasionadas en combate; 4) pero, por razones de justicia, exclusión de la amnistía para los crímenes atroces: los crímenes de guerra y de lesa humanidad; 5) los responsables de esas atrocidades deberán rendir cuentas ante la llamada "jurisdicción especial de paz", que es singular, pues no forma parte del sistema judicial colombiano ordinario pero tampoco es un tribunal internacional o mixto; es una jurisdicción especializada, que hará parte de la institucionalidad colombiana pero que nace del propio acuerdo de paz, con lo cual las FARC-EP no sienten que se rindieron ante la justicia del enemigo y el Estado colombiano evita un tribunal internacional; 6) el sistema de JT será integral pues conocerá no solo de los crímenes de las FARC-EP sino de todos los actores del conflicto: agentes estatales, paramilitares e incluso particulares cómplices; y 7) se crea un sistema de sanciones original, que combina componentes restaurativos y otros retributivos, según el grado de contribución a la verdad y a la paz: quienes aporten inmediatamente verdad total y fidedigna, no irán a la cárcel pero tendrán una restricción de la libertad de 5 a 8 años, en donde deberán hacer labores restaurativas a favor de la paz y las víctimas; quienes hagan ese aporte a la verdad pero tarde, irán a la cárcel pero por 5 a 8 años, un tiempo menor que las penas ordinarias; y quienes no aporten verdad y sean sentenciados, recibirán penas de cárcel más severas, de hasta 20 años.

Este diseño de la JT en el acuerdo de paz es prometedor para lograr una paz con justicia; pero su implementación afronta enormes desafíos.

El diseño de la justicia transicional en el acuerdo de paz es prometedor para lograr una paz con justicia; pero su implementación afronta enormes desafíos

Algunos son jurídicos pues algunas medidas han sido objeto de críticas. En particular, la regulación de la responsabilidad de los mandos militares por crímenes de sus subalternos ha sido criticada por grupos de derechos humanos por no ajustarse a los estándares internacionales. Otros desafíos son más operativos: no está claro que el Estado colombiano, que es bueno para diseñar políticas pero débil para implementarlas, logre que los distintos componentes de la JT marchen y que lo hagan armoniosamente.

Pero tal vez los obstáculos mayores son políticos y afectan no solo a la implementación del componente de JT del acuerdo de paz, sino a la totalidad del acuerdo. Y son al menos dos: en primer lugar, la persistencia de actores armados ilegales, vinculados a economías criminales, como el narcotráfico, que

están copando los territorios antes ocupados por las FARC-EP y que están ejerciendo violencia contra líderes sociales. Y en segundo lugar, el déficit de apoyo democrático al acuerdo y la polarización social y política sobre la paz, que se puso en evidencia en el plebiscito de octubre de 2016, en el que el 50,2% de los votantes expresó su rechazo al acuerdo de paz, y tuvo que ser ajustado para incorporar las principales objeciones de quienes votaron "No". Como el nuevo acuerdo no fue sometido a un nuevo plebiscito sino aprobado por el Congreso, importantes sectores cuestionan su legitimidad. Es pues necesario que el Estado controle los otros actores armados ilegales y reflexione sobre una implementación de la paz que sea lo más participativa

e inclusiva posibles, para reducir la polarización y fortalecer la legitimidad democrática del acuerdo. Pero ninguna de esas tareas es fácil.

RODRIGO UPRIMNY,

Investigador del centro de estudios "Dejusticia" y profesor de la Universidad Nacional de Colombia



COREA DEL NORTE: UNA PIEDRA DE TOQUE PARA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

PÍLDORA DE OPINIÓN COREA DEL NORTE

Contra todo pronóstico, Corea del Norte aún existe. Y ello plantea una serie de preguntas; algunas de ellas surgen más de la curiosidad otras, sin embargo, apelan a la funcionalidad misma del sistema internacional.

Hoy día, la práctica totalidad de los regímenes socialistas estatales que emergieron en 1945 se han hundido o han tomado el camino de la reforma, pero Corea del Norte es una excepción que no ha seguido el ejemplo. El país ha estado sometido a una enorme presión política y económica internacional, a la que muy pocos gobiernos habrían sobrevivido, pero la familia Kim —ahora en su tercera generación— sigue dirigiendo el país. Las carencias domésticas son igual o más importantes que las sanciones exteriores pero, aun con ello, Corea del Norte ha logrado avances tecnológicos que no están al alcance de cualquier nación: se ha dotado de armas nucleares y tecnología de satélites, además de los cohetes para desplegarlos.

¿Hacia dónde se encamina el país? En 2016, Kim Jong Un ha seguido la senda de la normalización, instando a la celebración del VII Congreso del Partido Comunista gobernante, tras un hiato de 36 años tras último, celebrado en 1980. Hasta la fecha, no parece que su agenda contemple reformas drásticas. Por el contrario, aspira a superar el “estado excepcional” en el que quedó sumido el país tras 1990, con la debacle del sistema socialista. Nadie sabe qué podrá suceder cuando el país recupere la estabilidad previa a 1990: si se quedará estancado ahí o empleará la estabilidad conseguida como puntal de una apertura gradual y controlada.

Teniendo en cuenta la situación actual de la sociedad norcoreana, Kim Jong Un apenas tiene otra alternativa que no sea el éxito económico. Su legitimidad no se sustenta en ningún mérito real o percibido, como sí era el caso de su abuelo Kim Il Sung, a quien se atribuía la liberación del país de sus ocupantes japoneses y su posterior defensa frente a los norteamericanos. Tampoco cuenta con el prestigio como mano derecha del Padre Fundador, una de las bazas de su padre, Kim Jong Il. La fuerza de Kim Jong Un es la promesa ante su pueblo de brindarles una vida mejor, y esto es precisamente lo que esperan de él los norcoreanos, especialmente la nueva clase media, cada vez más numerosa.

Corea del Norte es un país industrializado con una gran abundancia de reservas naturales y una población culta y muy disciplinada. Los surcoreanos han demostrado de una manera impresionante lo que los coreanos pueden conseguir.

Corea del Norte tiene la ventaja adicional de ser vecino directo de China, la mayor locomotora económica global de comienzos del siglo XXI. El próximo milagro de Asia Oriental puede muy bien producirse en Pyongyang.

Corea del Norte no está, sin embargo, utilizando este enorme potencial. Esto responde a las limitaciones de su actual sistema económico y político, pero también a su rotundo aislamiento internacional, que mantiene al país al margen de las finanzas globales y con un acceso muy limitado a la tecnología y los mercados. Este aislamiento es el resultado de su programa de armamento nuclear, que irónicamente, Pyongyang percibe como el único seguro de vida infalible en un mundo hostil.

La resolución del dilema no es solamente un reto para los líderes norcoreanos. Es también un campo de pruebas para la mecánica de la comunidad internacional. Es preciso abandonar el círculo vicioso de amenazas y acusaciones mutuas. El éxito o el fracaso en esta empresa puede ser muy bien un signo precursor de nuestra capacidad de gestionar un futuro marcado por la competición en ciernes entre Beijing y Washington.

Corea del Norte tiene la ventaja adicional de ser vecino directo de China, la mayor locomotora económica global. El próximo milagro de Asia Oriental puede muy bien producirse en Pyongyang

RUDIGER FRANK

Profesor de Economía y Sociedad de Asia Oriental y Jefe del Departamento de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Viena



NICARAGUA: ELECCIONES EN UN ESCENARIO INCIERTO

PÍLDORA DE OPINIÓN

NICARAGUA

A pesar de la progresiva desaparición de los gobiernos izquierdistas en América Latina, tanto la comunidad internacional como la oposición nicaragüense dieron por descontado que las elecciones de 2016 otorgarían la tercera victoria consecutiva a Daniel Ortega, esta vez en tándem con su mujer, Rosario Murillo. La única incertidumbre fue saber cuánta gente votaría.

¿Cómo ha sido posible que Nicaragua haya llegado a este punto? La respuesta reside en que, desde hace una década, en Nicaragua se ha ido configurando un régimen que ha vaciado la -ya débil- esencia democrática conseguida después de la caída del somocismo. Para que el régimen desembocara en lo que es hoy, Daniel Ortega impulsó desde 2007 la politización de la administración; erosionó los contrapesos institucionales; reformó a su antojo la Constitución; elaboró estrategias de confrontación con la oposición; y utilizó todos los mecanismos de la gobernanza electoral en su beneficio. Sobre este último punto es preciso dar cuenta que durante la última década en Nicaragua se ha llevado a la perfección el "menú de la manipulación" que expuso en su obra de 2004 Andreas Schedler *Elecciones sin democracia. El menú de la manipulación electoral*.

Fruto de dicho empeño el régimen nicaragüense actual es un sistema hiperpresidencialista donde Ortega controla

El régimen nicaragüense actual es un sistema hiperpresidencialista donde Ortega controla casi todos los resortes del poder político

casi todos los resortes del poder político, a la vez que comparte con las élites tradicionales el poder económico. Esto ha sido posible gracias a la ingente cantidad de recursos de libre asignación que han llegado de Venezuela, y gracias a su capacidad de someter al FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), al Poder Judicial, a los cuerpos armados y al Consejo Supremo Electoral (CSE), órgano clave en la organización de los comicios. Gracia a ello, Ortega ha conseguido instaurar un régimen muy semejante al que los viejos caudillos implantaron en la región durante la primera mitad del siglo XX. La diferencia más significativa entre esos caudillos y Ortega es que este último ha desplegado, a través de plataformas partidarias, políticas sociales focalizadas con las que fidelizar una clientela electoral estable (tal y como argumenta David Close en su libro de 2016 *Nicaragua: Navigating the Politics of Democracy*).

Sin embargo este régimen difícilmente puede eternizarse. El problema de su supervivencia reside en que, a pesar de haber extraído la incertidumbre propia de las elecciones competitivas, nunca sabe cuál es el apoyo real con el que cuenta. En esta situación, cuando la oposición empieza a ganar terreno, es imposible saber si el aumento de la represión o de la manipulación detendrá o acelerará su declive. Así las cosas, a día de hoy nadie sabe qué puede ocurrir si en un futuro próximo la economía se deteriora y ya no sea posible desplegar políticas sociales, o si se rompe la luna de miel entre Ortega y las élites tradicionales a raíz de la aprobación de la iniciativa norteamericana "Nica Act", ahora que los republicanos dominan la Casa Blanca, el Congreso y el Senado. También es una incógnita lo que podría pasar si hubiera una crisis de sucesión, ya que la ascendencia política de Daniel Ortega no es la misma que puedan tener su esposa o sus hijos. Ciertamente nadie puede leer el futuro, pero la vulnerabilidad del gobierno parece haber incrementado con la celebración de unas elecciones autoritarias el 6 de noviembre de 2016.

SALVADOR MARTÍ I PUIG,

Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Girona e investigador externo del CIDOB-Barcelona



“ECOLOGIZAR” LA VIDA DIGITAL

PÍLDORA DE OPINIÓN

REVOLUCIÓN DIGITAL

Los humanos somos una especie tecnológica, y la digitalización es el más reciente y poderoso acelerador de esta evolución social. Hemos necesitado menos de una generación para concebir y situar nuestros mundos online en el centro de muchas de las experiencias diarias de una porción cada vez mayor de la floreciente población mundial. Esta realidad, nos guste o nos disguste, está aquí para quedarse y sus impactos serán exponenciales y de progresión viral.

“Ecologizar” nuestro mundo digital ha consistido hasta ahora en un canje de nuestras experiencias físicas a otras virtuales; esencialmente ha sido una desmaterialización de nuestro consumo y de nuestra inversión. En tan solo una década, este potencial será una trivialidad comparado con el impacto del tsunami digital al que nos encaminamos. Un ejemplo son las tecnologías financieras (*fintech*), que abarcan desde las plataformas de pago por móvil a las de colaboración masiva (o *crowdsourcing*), que ya hoy permiten a los ahorradores del centro de Barcelona financiar y beneficiarse de la instalación en sistemas de energía solar distribuidos instalados en el África rural subsahariana, al tiempo que abren la puerta a la financiación a comunidades pobres que no cuentan con historias crediticias ni pueden firmar contratos que les permitan adquirir energía limpia mediante pre-pago (*pay-as-you-go-basis*). El modelo de Cadena de Bloques (*blockchain*) no es solamente un sistema de contabilidad distribuida, sino que también registra el historial —y por tanto de la procedencia— de todos los bienes intercambiados, incluyendo el dinero, lo que nos permite conocer en cada momento la huella medioambiental de todo lo que se compra y se vende.

Pero esto es solo el comienzo; el *fintech* no es un disruptor solitario. Forma parte de una ecología tecnológica más amplia, en cuyo centro están las bases de datos masivas (*Big data*), la inteligencia artificial y el “internet de las cosas”. Juntos, conectarán digitalmente el mundo natural con los bienes físicos y con los flujos y activos financieros. Es posible imaginar que todos, en el futuro, tendremos cuentas personales de capital natural y que el dinero tendrá un valor inextricablemente ligado a las fuentes subyacentes de la propia vida, la energía, la nutrición y el clima. En realidad, este futuro

está ya en desarrollo hoy mismo, porque las empresas que gestionan plataformas de pago por móvil están empezando a experimentar con cuentas y operaciones de capital natural como parte de su actividad diaria.

Lograr que la tecnología se ciña a buenos fines ha sido un reto a lo largo de la historia y lo cierto es que todas las revoluciones tienen su precio. Las instituciones financieras actuales que no sean capaces de evolucionar rápidamente, así como las personas que dependen de ellas para ganarse la vida, serán las primeras en pagar ese precio. Un cierto abuso de estas nuevas tecnologías parece también inevitable, por lo que deberemos esforzarnos al máximo para prevenirlo. La pérdida de privacidad será la renuncia más visible, y una consecuencia más que probable a pesar de todos los nobles esfuerzos que hagamos por preservarla.

En este nuevo mundo, la política, la regulación y mismo imperio de la ley podrán poco más que mostrar-nos su fragilidad, al menos durante el tiempo que tarden los gobiernos en dirimir cómo seguir pilotando un sistema cada vez más complejo, dinámico y virtual.

“Ecologizar” la vida digital no es tan solo una buena idea, es más bien un hecho existencial; y debemos cuadrar este círculo si pretendemos sobrevivir como especie populosa con aspiraciones civilizatorias.

El *fintech* no es un disruptor solitario. Forma parte de una ecología tecnológica más amplia

SIMON ZADEK

Director adjunto del Comité de Investigación para el Diseño de un Sistema Financiero Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y profesor visitante de la Singapore Management University



¿CÓMO PODEMOS PREPARARNOS PARA EL FUTURO Y CREAR FUTUROS ALTERNATIVOS?

Hemos asistido a cambios extremos en las últimas décadas, promovidos por fenómenos como las crisis financieras –asiática y global–, la revolución del *peer-to-peer*, el extremismo político o el cambio climático, por mencionar solo algunos. Todos han trastocado el ciclo tradicional de planificación, implementación y revisión, que precede a soluciones basadas en (re)ajustes técnicos específicos.

En vez de “aprender a aprender”, la mayoría de organizaciones bombardean con más dinero sus problemas, o buscan eficiencia despidiendo a sus empleados. Ni se adaptan al futuro cambiante, ni innovan y crean un futuro alternativo. Necesitamos un mejor entendimiento de la pre-visión, que aliente a las organizaciones a abandonar los meros ajustes técnicos y pensar en respuestas adaptativas, o incluso, a emprender viajes transformativos en los que cambien al tiempo que construyen los nuevos futuros.

Esto resulta cada vez más pertinente al constatar que los próximos veinte años prometen traer cambios aún mayores. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo sugiere que el 90% de los trabajadores del Sudeste Asiático podrían quedarse sin trabajo por culpa de la automatización. La Inteligencia Artificial (IA) y aumentada transforma la asistencia sanitaria y trabajos como la contabilidad –y de hecho cualquier campo en con tareas repetitivas y predecibles– podrán ser realizados por máquinas. Esto transformará los debates vigentes: los coches sin conductor harán las ciudades más seguras y desplazarán el debate de la propiedad a la movilidad; la carne pura o carne in vitro, puede acabar con la industria cárnica y sus 56.000 millones anuales de animales sacrificados, lo que cuestionará qué y cómo comemos, y también cómo organizamos el agro. La gobernanza y la economía del *peer-to-peer* des-intermedian al intermediario, y podría hacer, por ejemplo, que Wikipedia acabe con el reinado de la Encyclopaedia Britannica. Cuestiona también la jerarquía corporativa, creando espacios para las cooperativas y los niveles locales y globales. La caída del precio de la energía solar trastoca el actual sistema energético basado en el carbón, permitiendo a los hogares no solo convertirse en productores de energía, sino también en una parte de las cooperativas energéticas comunitarias. Dada

PÍLDORA DE OPINIÓN

CREANDO FUTUROS

la magnitud del cambio que se avecina, ¿qué debemos primar en el trabajo para una innovación que sea también inclusiva?

En más de treinta años de talleres de pre-visión en más de cuarenta países, he llegado a tres conclusiones principales:

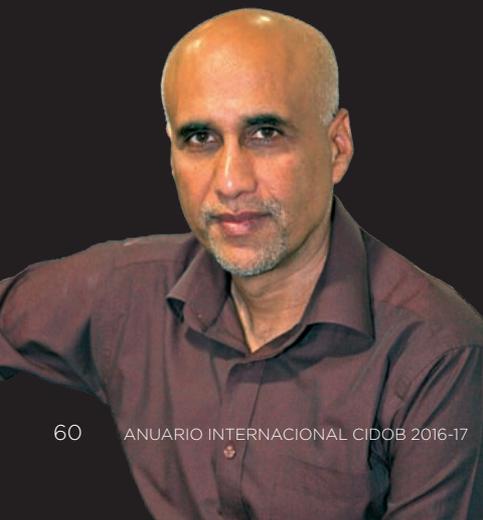
Debemos cuestionar el “futuro usado”; cada organización tiene prácticas que no necesariamente conducen a su futuro preferido, es más, pueden desarrollar estrategias que contradicen su visión. Por ejemplo, en el sector de la educación, el futuro usado más recurrente es el de las aulas con hileras de pupitres, que no están centradas en el estudiante ni son tecnológicamente amigables, y que aplican una evaluación “de talla única”. A nivel global, en la medida en que la IA empiece a sustituir al trabajo no cualificado, y de hecho también al cualificado, el empleo puede pronto convertirse en un futuro usado, útil en el pasado, pero irrelevante de cara al futuro.

En segundo lugar, hay que crear futuros alternativos. La trayectoria de un asunto emergente es difícil de predecir, por lo que trabajar con futuros alternativos es crucial para negociar las incertidumbres y ser más adaptables. Para ello, debemos cuestionar nuestros supuestos básicos sobre cómo es el mundo y cómo funciona. Por lo que respecta al nexo futuro trabajo-educación, contemplamos distintos escenarios: enseñar y formar para empleos de ayer; enseñar y formar para el futuro emergente; o co-enseñar y diseñar para un mundo post-empleo, donde el foco se ponga en las personas, el planeta, la prosperidad y el propósito.

Tercero, debemos encontrar la cosmovisión y el relato. Los relatos no son correctos o incorrectos; la cuestión es si soportan o no la visión del futuro. Sin una comprensión de los relatos, las estrategias a menudo fallan: la cultura termina comiéndose la estrategia.

Para transformar la actual crisis global, necesitamos crear nuevas estrategias y garantizar que tengan el respaldo de nuevos relatos nucleares.

En un contexto de cambios drásticos, un alto ejecutivo me comentó una vez: “Teníamos la estrategia perfecta para el futuro de ayer”.



SOHAIL INYATULLAH

Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Futuro y Profesor en la Universidad de Tamkang, Taipei

TURQUÍA: UN AÑO QUE NO MERECE SER LLORADO

PÍLDORA DE OPINIÓN

TURQUÍA

El año 2016 no fue muy prometedor para Turquía: las normas democráticas sufrieron un grave contratiempo después del fallido golpe de estado del 15 de julio. Pero incluso antes del camino hacia la intransigencia y la violación de derechos fundamentales estaba ya en marcha, justificado por la lucha contra Gülen (actualmente identificada como la organización terrorista FETÖ-Fethulah).

El intento de golpe ha traumatizado a la nación. Presumiblemente, de haber triunfado, Turquía se habría visto envuelta en una guerra civil con un ejército dividido. La mayoría de observadores se sorprendieron de que hubiese tantos gülenistas en el ejército, aunque su presencia en la policía y en la judicatura era bien conocida. Este intento de golpe ha sido el más sangriento en el país, con 250 víctimas civiles, y Erdogan y el gobierno mantuvieron a la gente en la calle durante casi un mes en una serie de “manifestaciones en defensa de la democracia” para bloquear cualquier intento de repetición del golpe.

Lo que muchos turcos consideraron que fue una tímida reacción de la UE y de EEUU generó tensión con los aliados occidentales. Las duras críticas de Occidente a las medidas tomadas por el gobierno después del golpe, que convirtieron la necesaria operación de limpieza contra los gülenistas en una purga mucho más amplia, exacerbó la sensación de distanciamiento. El gobierno siguió adelante con sus medidas sin hacer caso de las llamadas de la Unión Europea.

En consecuencia, el año registró un severo deterioro en el imperio de la ley, particularmente una vez que los “decretos ejecutivos” del estado de emergencia rigieron el país. Aquellos relacionados con el movimiento de Gülen de manera directa o indirecta, fueron arrestados, encarcelados y/o expropiados.

La otrora prometedor participación kurda en la vida política turca también tuvo un trágico final en 2016. La guerra de trincheras del PKK topó con una fuerza incontenible que destruyó muchos barrios, pueblos y ciudades en el sudeste de Turquía. Casi medio millón de ciudadanos se quedaron sin hogar tras los combates. El PKK continuó sin embargo sus ataques terroristas contra objetivos en las grandes ciudades, que causaron muchas víctimas.

2016 fue también el año en que Turquía se convirtió en objetivo de la brutalidad de la organización Estado Islámico (EI), ya que esta organización llevó a cabo una serie de sangrientos atentados contra objetivos kurdos o extranjeros.

En los asuntos exteriores, el año estuvo lleno de sorpresas

causadas por los cambios activados por el gobierno turco, sobre todo después de la destitución del ministro de Exteriores Ahmet Davutoğlu, el arquitecto de la nueva política exterior turca. Bajo el lema “reducir el número de nuestros enemigos y aumentar el de nuestros amigos”, el primer ministro Yıldırım ha introducido cambios respecto a Rusia, ha dado pasos para acercarse a Israel y ha reducido las ambiciones turcas, aunque al mismo tiempo ha atacado al EI y ha emprendido una operación militar, “Escudo del Éufrates”, contra dicha organización, pero que también ha alcanzado al grupo kurdo PYD.

El gobierno dejó que se deterioraran las relaciones de Turquía con sus aliados occidentales, particularmente con EEUU, por el presunto apoyo norteamericano al PYD y a su ala armada en Siria, las YPG (Unidades de Protección Popular), enemigas del EI. Estos grupos son extensiones del PKK que

luchan contra el Estado turco y son considerados una organización terrorista por los aliados de Turquía. En consecuencia, Turquía considera al PYD/YPG una organización terrorista. Ankara ha declarado su objetivo de unir a las tres zonas controladas por los kurdos de Siria en el norte del país, porque considera que la creación de un corredor hacia el sur controlado por el PYD constituiría una amenaza existencial.

El tratado sobre los refugiados firmado con la UE a principios de año, y que provocó críticas de los defensores de los derechos humanos y del Parlamento Europeo, continúa vigente pese a las tensiones ocasionales y a las amenazas turcas de que si la cláusula que preveía la posibilidad de viajar sin visado no se implementaba, denunciarían la totalidad del tratado. Esto no sucedió, pero el mal ambiente perduró porque la UE siguió insistiendo en que Turquía tenía que cambiar su ley antiterrorista, y Ankara se negó rotundamente, invocando el golpe y el peligro terrorista.

2016 registró en Turquía un severo deterioro en el imperio de la ley

SOLI ÖZEL

Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Kafdir Has de Estambul



En diciembre del 2014 la patente hostilidad o, como la denominara Henry Kissinger, "antagonismo perpetuo" entre Cuba y EEUU, dio paso a una política que sin variar el objetivo estratégico a favor del cambio del sistema político y económico cubano, también apuesta por el diálogo respetuoso, la negociación en pie de igualdad y la cooperación entre pares, pese a las grandes diferencias existentes.

A pesar del conflicto histórico, la asimetría y la desconfianza, características que dominaron durante 55 años las relaciones entre las dos naciones, en apenas 15 meses después de que en julio de 2015 se restablecieran las relaciones diplomáticas, se ha avanzado mucho. Concretamente, se han firmado 23 acuerdos gubernamentales, la mayoría no vinculantes, en áreas de interés común como el narcotráfico, la seguridad de los pasajeros y la carga, la aviación civil, la protección medioambiental y la lucha contra el cambio climático, así como en salud, la investigación sobre el cáncer, agricultura, hidrografía, áreas marinas y terrestres protegidas y el correo postal directo. Además, fueron rubricados arreglos para cooperar en temas de sismología, meteorología, contaminación por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas y búsqueda y salvamento marítimo. Los compromisos bilaterales tienen un balance positivo en lo bilateral, regional e internacional.

Al mismo tiempo, y bajo el paraguas de la Comisión bilateral creada por ambos gobiernos, se han establecido diálogos sobre aplicación y cumplimiento de la ley, que incorporan asuntos como el contrabando y la trata de personas, crimen transnacional organizado, el ciberespacio, el contraterroismo y fraude de documentos, entre otros. Mientras, el diálogo económico permite establecer grupos de trabajo en temas regulatorios, energéticos, comerciales, inversionistas y de propiedad intelectual.

Poco se ha avanzado en los asuntos más espinosos y medulares para la política exterior cubana como el fin del bloqueo, la devolución del territorio ocupado por la Base Naval de Guantánamo, la compensación al pueblo cubano por los daños humanos y económicos, el cese de las emisiones gubernamentales (Radio y TV Martí), o la anulación de los programas para la llamada "promoción de la democracia en Cuba", basados en la lógica del cambio de régimen. Y, sin embargo, al existir canales de comunicación es posible de manera respetuosa interlocutar en donde ambas partes exponen sus desacuerdos, y concretan acciones en los asuntos que son de su interés nacional.

Lo más relevante de las modificaciones adoptadas a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas radica en la expansión de los espacios de negociación y oportunidades de cooperación, incluida la colaboración cultural, científica y educacional.

Los resultados de las elecciones presidenciales en EEUU, y el posicionamiento del presidente Trump han puesto en entredicho el curso que el proceso hacia la normalización tendrá con la nueva Administración. El 3 de febrero 2017 se anunció una revisión total de la política hacia Cuba, en la cual influirán actores y factores que favorecen mantener y avanzar en el proceso o que, por el contrario, abogan por revertirlo. Pero, quizás, la variable del "desconocimiento" sea la más importante en la ecuación, en tanto impide tener una verdadera visión estratégica y eclipse o acelera decisiones, con trágicos resultados. Como resultado, el tema Cuba puede devenir, sin alto costo político, en una moneda de cambio o la carnaza que tranquiliza a ciertos sectores de extrema derecha.

Si la política de hostilidad perpetua y patente regresa, tal y como se plantea en el ideario del partido republicano, las relaciones entre Washington y La Habana se pueden deteriorar mucho y retornar a la fallida política que en 55 años no brindó los resultados esperados. En ese escenario, Cuba tiene experiencia, además de paciencia, para estar siempre dispuesta al diálogo respetuoso basado en los principios del derecho internacional.

El posicionamiento de Trump ha puesto en entredicho la normalización de las relaciones bilaterales

Cuba, con Trump o sin Trump, está llamada a enfrentar sus propios desafíos con una visión estratégica y acompañada por esa vocación natural, como dijera José Martí, de ser un punto de encuentro «por sobre la lengua de los istmos y la barrera de los mares».

SORAYA CASTRO MARIÑO,

Profesora e investigadora titular del Centro de Investigaciones de Política Internacional, Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Cuba

EQUIDAD: LA ÚLTIMA FRONTERA EN LAS CONVERSACIONES SOBRE EL CLIMA

PÍLDORA DE OPINIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO

En los albores de las negociaciones hacia un acuerdo sobre el cambio climático, el concepto de equidad era simple: compartir los bienes comunes globales –la atmósfera, en este caso– entre todos, y por igual. En aquel momento la idea no generaba ansiedades, ya que no existían demandantes reales. Un grupo reducido de países llevaba más de un siglo quemando combustibles fósiles y en paralelo acumulando una enorme riqueza. Paradójicamente, era este club el que tenía la capacidad de reducir las emisiones y lo que planteó fue que todos los países eran co-responsables de las emisiones. Fue gracias a las visiones alternativas –entre las que se cuentan las que realizamos Anil Agarwal y quien escribe en el libro *Global Warming in an Unequal World: A case of environmental colonialism*– que en 1992 se reconoció el principio de las responsabilidades comunes, aunque diferenciadas en la reducción de las emisiones.

Aquel año, en Río de Janeiro, el mundo habló de reducciones drásticas –de hasta un 20% respecto a 1990– para facilitar el crecimiento y garantizar la seguridad climática. Pero incluso en aquella “edad de la inocencia” de las negociaciones estas fueron correosas y desagradables. EEUU alegó que su estilo de vida era innegociable y se negó a aceptar un acuerdo que implicase reducciones profundas. En 1998, el Protocolo de Kioto estableció el primer objetivo legal para estos países, muy por debajo del umbral óptimo.

Veinte años después, la idea de equidad resulta aún más incómoda. Mientras que los países más desarrollados no han reducido emisiones, los emergentes emiten más –China pasó del 10% al 27% entre 1990 y 2010–. Esto explica por qué, sin prácticamente haber reducido sus emisiones, los países desarrollados hoy suponen tan solo el 43% del total.

El mundo se ha quedado sin espacio atmosférico y también sin tiempo. ¿Querrán los ricos, los que más contribuyeron a las emisiones en el pasado y que todavía ocupan una parte desproporcionada de este espacio según su población, reducir sus emisiones? ¿O exigirán a los países emergentes que asuman ellos la carga?

Como sabemos, el cambio climático no obedece a las emisiones actuales, sino a las del pasado. La presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera tiene una vida larga, y esto debería contemplarse a la hora de repartir el pastel de las emisiones. Así, mientras hoy China es responsable del 27% de las emisiones anuales, en términos acumulativos (desde 1950) lo es solamente de un 11%. De un modo similar, India aporta el 6% anual pero solo el 3% del

acumulado. Los países ricos, con menos del 25% de la población, responden por el 70% de la carga histórica. Este stock de gases es responsable de un aumento medio de la temperatura global de 0,8 °C, y de otro 0,8 °C en el futuro, que ya no podrá evitarse. Para contener el aumento de la temperatura por debajo de 2 °C en 2050, el mundo deberá reducir sus emisiones entre un 50% y un 80% respecto al año 2000. Ahora la equidad ya no es una idea moral, sino un reto de futuro. EEUU y sus asociados están decididos a eliminar cualquier referencia a las emisiones históricas y descalifican la necesidad de desarrollo de China e India como la búsqueda de un obcecado “derecho a contaminar”.

La equidad cuenta con pocos adeptos hoy en un mundo que desconfía del idealismo y de cualquier noción de justicia distributiva. Ni siquiera los mismos negociadores del cambio climático confían que este “socialismo del clima” pueda convertirse en realidad. Sostienen que el mundo nunca cederá espacio, que es demasiado mezquino para transferir dinero o tecnología a las naciones pobres para que puedan realizar la transición hacia un crecimiento menos dependiente del carbón.

Sin embargo, olvidan que el cambio climático es el mayor fracaso del mercado y no podemos utilizar el mercado para solucionar el problema. Para evitar cambios catastróficos es esencial alcanzar un

acuerdo de colaboración que sea efectivo. Y la cooperación no es posible sin justicia ni equidad; es un requisito previo. Y tenemos la obligación de asumirlo.

El mundo se ha quedado sin espacio atmosférico y también sin tiempo. ¿Querrán los ricos reducir sus emisiones?

SUNITA NARAIN

Directora General del Centre for Science Environment, India



Con Trump como nuevo presidente de EEUU, nadie puede estar seguro de cuál será el futuro del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre EEUU y la UE, o siquiera si este tendrá algún futuro. De momento está en *stand by*, pero varias corporaciones transnacionales anhelan que se ponga en práctica. He aquí diez puntos por los que considero que hay que frenar este acuerdo antidemocrático.

- 1. Las Corporaciones transnacionales han diseñado el TTIP con apoyo oficial y sin debate.** Desde 1995 el Diálogo Empresarial Transatlántico (DET) se ramificó en nuevas entidades. La más influyente de ellas es el Consejo Económico Transatlántico. Las reuniones 120+ de la Comisión para preparar las negociaciones eran en un 93% grandes empresas, y un 7% la sociedad civil.
- 2. Secretismo.** Los ciudadanos solo han sido “informados” por filtraciones. No se sabe quién redactó la orden que autoriza a la UE a negociar. Según la Comisión, “no hay ninguna lista” de miembros del “Grupo de Trabajo de Alto Nivel” que redactó esta orden, y el secretismo ha sido la tónica dominante desde el comienzo de las negociaciones en julio de 2013. No ha habido oportunidad de llevar a cabo un debate ciudadano con los funcionarios.
- 3. El estudio de la comisión europea que respalda el TTIP se basa en un falso modelo económico de pleno empleo.** La Comisión, para justificar el TTIP sobre una base económica encargó al grupo de expertos Centre for Economic Policy Research (CEPR) un informe que prometía más empleos, crecimiento económico y una mejora de ingresos para los europeos. Diversos economistas, particularmente Jeronim Capaldo, de la Tufts University de Boston, han rechazado el estudio del CEPR porque parte de supuestos poco realistas en el modelo económico. Concluye que el TTIP tendría como consecuencia una pérdida de empleos y un descenso en el PIB.
- 4. Este tratado no trata de “comercio” ni de “inversiones”.** Los aranceles entre EEUU y la UE ya son bajos, aproximadamente un 2-3% en casi todas las áreas. No necesitamos años de negociaciones para reducirlos al 1% o al 0%. Además, favorece solo a la inversión exterior directa de las corporaciones transnacionales a quien prioriza sobre los inversores locales.
- 5. Los aranceles siguen siendo elevados en la agricultura.** Si no estuviesen protegidos por los aranceles, entre tres y cuatro millones de pequeños agricultores europeos serían eliminados. Es absurdo creer que estos podrían “competir” con el modelo norteamericano o canadiense de granjas mecanizadas, y con unos cebaderos con decenas de miles de animales. Europa tendría que cambiar enteramente a “granjas-fábrica” y perdería su soberanía alimentaria.

Las corporaciones pueden demandar a los gobiernos, pero estos no tienen el derecho recíproco de control de los abusos empresariales

6. Otorga el privilegio a las corporaciones transnacionales del “procedimiento de arbitraje entre inversores y estados”, que permitiría a los inversores extranjeros demandar a gobiernos soberanos en tribunales de arbitraje privados siempre que crean que sus beneficios puedan verse reducidos por una decisión gubernamental.

7. La “cooperación reguladora” es un intento de implicar a las corporaciones transnacionales en regulaciones relativas a áreas vitales como la industria química, la farmacéutica, la seguridad alimentaria, la sanidad pública, la protección medioambiental, la protección al trabajador, etc.

8. Los procedimientos de arbitraje entre inversores y estados tienen un “efecto paralizador” en los Ejecutivos. Particularmente en el caso de los países más pequeños y con unos medios limitados, la amenaza de pleitos multimillonarios haría que se lo pensasen dos veces antes de aprobar una ley que las empresas pudiesen impugnar.

9. No hay referencias vinculantes al respecto a los derechos humanos, laborales, o a la protección medioambiental. Las corporaciones extranjeras pueden demandar a los gobiernos, pero los gobiernos no tienen el derecho recíproco para controlar los abusos empresariales de las personas y de los recursos de los que dependen, trabajadores y naturaleza.

10. El TTIP aumentará el calentamiento global. Hasta ahora, más de

la mitad de los casos de arbitraje anunciados o llevados a juicio en tribunales de arbitraje privados –aproximadamente 300– han sido iniciados por compañías de industrias extractivas. Es posible que los gobiernos opten por mantener las políticas sobre combustibles fósiles en lugar de optar por las energías renovables.

Estos son algunos de los motivos de que 3,4 millones de europeos hayan firmado la Iniciativa Ciudadana contra el TTIP, impulsada por grupos de ciudadanos, ya que la Comisión Europea rechazó su petición de iniciar una iniciativa oficial.

SUSAN GEORGE

Presidenta del Transnational Institute (TNI)



DIEZ AÑOS DE DERECHOS INDÍGENAS: AVANCES Y DESAFÍOS

PÍLDORA DE OPINIÓN

INDIGENISMO

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, fue el resultado de casi 23 años de negociación política y diplomática de los pueblos indígenas y Estados en el sistema de las Naciones Unidas, cuyo inicio se remonta a los años veinte del siglo pasado y ha tenido varias etapas. Las organizaciones y liderazgos indígenas de las diversas regiones geoculturales del planeta nos fuimos incorporando activamente desde los años ochenta con iniciativas e intervenciones, que hacían temblar la sala de sesiones del *Palais de Nations* de Ginebra, basadas en la necesidad de diferenciar entre ser incorporados como pueblos Indígenas o ser tratados como minorías o grupos étnicos. Los pueblos indígenas se unieron bajo la misma bandera y un mismo lema: ¡Somos pueblos con culturas, con lenguas propias, con territorios, recursos naturales, filosofía, ideología, cosmovisión, y con formas propias de ver y actuar en el mundo!

La implementación y los avances, principalmente desde el sistema de las Naciones Unidas, están relacionados con la incidencia global de la diplomacia indígena y nuestros aliados, que participamos desde los diferentes mecanismos logrados en los últimos 35 años. Las recomendaciones emanadas desde el Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de la ONU en los últimos 15 años, en un número de casi 1.200 sobre diversos aspectos prioritarios relacionados con la vida digna de los pueblos indígenas, se convierten en herramientas para que estados y agencias las incluyan progresivamente en sus acciones.

Las recomendaciones de la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas se basan en los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, que se complementan armoniosamente,

así como en la relación entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Las recomendaciones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas juegan también un rol importante. Actualmente, se cuenta con el Grupo Interagencial sobre Pueblos Indígenas, cuya principal responsabilidad es contribuir en la implementación de la Declaración elaborando planes de acción con la misma participación de los pueblos indígenas.

El desafío más grande se encuentra en los niveles nacionales y locales de cada país, por desconocimiento de los avances en el reconocimiento de derechos individuales y colectivos, por prejuicios y racismo que vienen desde la colonia, los cuales impiden que los derechos y políticas sean incluyentes y equitativos. En este contexto, el punto más conflictivo es el respeto a los derechos territoriales y participación en las decisiones sobre el destino de los recursos naturales que están en territorios indígenas. Las exigencias del respeto a la gobernanza y la libre determinación en nuestras regiones son perseguidas, penalizadas o satanizadas.

Lo más conflictivo es el respeto a los derechos territoriales y la participación en las decisiones sobre el destino de los recursos naturales

En este escenario, las mujeres indígenas hemos contribuido activamente en el proceso de elaboración de la Declaración, aprendiendo a construir alianzas con propuestas en los diversos espacios donde se tratan nuestros derechos, principalmente en el plano internacional; sin embargo, la defensa de los derechos colectivos, del agua, los recursos naturales, la biodiversidad y la producción de alimentos sanos, son vistos como contraposición al “desarrollo economicista” y no como un aporte a la vida plena, respetuosa y digna de todos.

Transcurridos diez años de la Declaración estados y pueblos indígenas tenemos la obligación de dialogar teniendo como marco los derechos humanos y nuestros derechos para alcanzar un entendimiento real y construir acuerdos que demandan la práctica de relaciones interculturales en todo orden, principalmente en el respeto mutuo que permite construir sociedades democráticas, participativas y respetuosas, donde las diferencias son una riqueza material y espiritual.

TARCILA RIVERA,

Integrante del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII 2017-2019)



De la noche a la mañana, a resultas de la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses y su posible cuestionamiento de la política de Una Sola China, Taiwan pasó en un instante del ostracismo internacional a estar en boca de todos. Las declaraciones del presidente electo venían precedidas de un acuerdo suscrito por las dos cámaras que permitirá elevar en 2017 el nivel de los intercambios militares entre Taiwan y EEUU. Y todo ello, en un contexto de tensión creciente entre Beijing y Taipei, iniciado el 20 de mayo de 2016 cuando la soberanista Tsai Ing-wen, del *Minjindang* o Partido Progresista Democrático (PDP), al asumir el poder se negó a ratificar el llamado “Consenso de 1992”, un entendimiento tácito suscrito por el Koumintang (KMT) y el Partido Comunista Chino (PCCh) a favor de la reunificación y que sirvió de base para el acercamiento que se vivió durante el mandato de la formación nacionalista (2008-2016).

Puede que las declaraciones de hostigamiento hacia China sean expresión de la inexperiencia de Trump, como apuntan algunos, o que por el contrario, respondan a precisos tanteos, parte de una estrategia de reforzamiento del poder de negociación comercial con el gigante asiático. A China, que esperaba un Trump correoso en lo económico pero condescendiente en lo estratégico, poco le importará. La movilización de su fuerza aérea fue inmediata para expresar la contundencia de su mensaje: si hay cambios en la política hacia Taiwan, habrá una respuesta sustancial.

China necesita estabilidad interna y externa para culminar su transición hacia un nuevo modelo de desarrollo

Por su parte, Taiwan ve peligrar la defensa del statu quo, un principio erigido en política gubernamental para responder de forma equidistante tanto a las demandas continentales como a las presiones de los movimientos independentistas de la isla. Taipei se mueve entre el alborozo por las expectativas que despierta el republicano Trump y el temor a convertirse en moneda de cambio en las relaciones sino-estadounidenses.

EEUU viene respaldando la política de Una Sola China desde 1972, cuando Nixon firmó con Zhou Enlai el Comunicado de Shanghai. Diez años después, Ronald Reagan sumó a ello las “Seis Garantías” que aseguran la continuidad de la venta de armas y excluyen cualquier presión a favor de la reunificación. En su última conferencia de prensa, Obama advirtió a Trump que los chinos no tratarán el problema de Taiwan de la misma manera que otros asuntos, ni siquiera el del Mar de China Meridional. Taiwan es un asunto central, el nervio más sensible de las relaciones entre EEUU y China, y no debe ignorarse el potencial desestabilizador de una controversia sobre este asunto. Un atisbo de inestabilidad en Taiwan podría conmocionar todo el nordeste de Asia.

Los cambios de Administración en EEUU suelen incorporar zozobras en políticas clave en relación a China. Pasó con Clinton en 1995 cuando autorizó la “visita privada” del presidente taiwanés Lee Teng-hui, irritando a Beijing. Dos años más tarde, las aguas volvieron a su cauce.

China necesita estabilidad interna y externa para culminar su transición hacia un nuevo modelo de desarrollo pero sería un grave error creer que eso le obligará a hacer concesiones en asuntos centrales, más cuando la correlación de fuerzas en la región sopla a su favor. Taiwan sigue siendo *casus belli*.

XULIO RÍOS,

Director del Observatorio de la Política China

